UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
Sede Bogotá

FACULTAD DE DERECHO

**Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y
Cortes Internacionales**

V COHORTE

José Ricardo Ruiz Abadía

TRABAJO DE GRADO

**Financiación alternativa para los Derechos Humanos.
Construyendo una política pública**

Bogotá D.C., Febrero de 2015

Introducción

En la búsqueda de proteger, promover, implementar y garantizar los derechos humanos o fundamentales -esto es, todos aquellos que comprenden no sólo al individuo, sino además los colectivos, los ambientales, entre otros que implican la supervivencia, libertad, igualdad, equidad y dignidad de la humanidad- en un determinado grupo, comunidad, pueblo, región nacional, país, región internacional, y porque no, a un nivel global. Para la consecución de dicha meta, es indispensable poder contar con los recursos adecuados, se entiende que es una labor de gran envergadura y dificultad, por cuanto hablar de inversión en este campo no siempre implica una contraprestación o lucro (que en una revisión histórica, se podría dar cuenta que ha sido un gran motor en toda acción humana), sino que se pone de presente que su causa es más axiológica, humanista, lo que finalmente redundará en una mejor inversión que pueda hacerse al conglomerado humano, el preservar nuestro pasado, presente y futuro. Existen distintas formas de obtener recursos, unas gestiones implican un poco más de dificultad que otras, pero en esencia lo que se ha de plantear en este escrito es optar por una posibilidad entre las tantas existentes, implica a su vez una reconfiguración de estructuras e ideologías, pero se estima que es un camino viable, en el cual todas las partes pueden obtener un beneficio.

(Palabras claves: Derechos humanos-fundamentales, protección, promoción, implementación, garantizar, inversión, contratación, marco normativo, obligaciones estatales-particulares).

Abstract

In the purpose to protect, promote, implement and guarantee the human and fundamental rights -all those who encompass not only the individual rights, also collective, environmental, among others involving the survival, the freedom, the equality, the fairness and the dignity of the humanity- in a group, community, village, home region, country, international region and why not, all the world; for this purpose, it's necessary count on with resources. It's understandable that's a hard work, more if we talk of investment in this field doesn't always involve a fee or profit - historical evidence suggest has been the engine of all human action-, their goals are more axiological and humanist, the best investment can we make like a human conglomerate, it's preserve our past, present and our future. There are different ways to achieve or channel resources, some steps are a little more difficult than others, but in essence, is a possibility of many, involves a reconfiguration of structures and ideologies which can be seen in the text, I considered it's a viable way, which all parties can make a profit.

(Key Words: Human and fundamentals rights, protection, promotion, implementation, guaranteed, investment, engagement, legal structure, state-individuals obligations).

Planteamiento de la cuestión y justificación

Es un hecho notorio que la situación de un país como Colombia, en el cual ha existido un conflicto armado, en términos del derecho moderno, desde las décadas de los 50's a 60's del Siglo XX hasta la actualidad; ello implica la existencia de una guerra que ha durado aproximadamente 50 años, y sumando, lo cual resulta en un sin número de víctimas como consecuencia de esta desgastante circunstancia, tanto de civiles como de combatientes; además, es un fenómeno del cual deben establecerse responsabilidades y compromisos. De la responsabilidad se encargarán las instituciones correspondientes, la Rama Judicial del Poder Público y la Fiscalía General de la Nación; de los compromisos se hablara entonces del gobierno de turno, quien debe lidiar con los aspectos políticos del conflicto. Pero, ¿qué pasa entonces con la reparación integral a las víctimas?,

¿quiénes son víctimas?, ¿quiénes deben responder?, ¿de dónde ha de surgir los recursos en conflicto y postconflicto?, ¿sólo el conflicto constituye todas las víctimas del país?, es de estas interrogantes, entre muchas otras relacionadas a estas, que surge la necesidad de dar una respuesta o plantear una salida al respecto.

Como es evidente, un fenómeno tan complejo no puede ser resuelto en un solo escrito, pero de aquí sí pueden resultar aportes para tratar de dar soluciones a puntos álgidos y que son necesarios de atender, en este caso, me centré en la forma de dar una solución a un asunto que es vital en nuestra realidad, la búsqueda de un soporte económico, financiero u otro del cual pueda existir una base estable en la reconstrucción del tejido social y del individuo, materializando todos aquellos derechos de los cuales la humanidad ha ido construyendo a través del tiempo; el problema surge en la aplicación de todo aquello, en parte ello es así porque en la actualidad contamos con dos grandes problemas que influyen toda actividad humana: ¿cómo hacemos nosotros para satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados? y ¿qué puede hacerse para que esos recursos limitados no terminen en un monopolio o en un determinado grupo de personas?

Este escrito no pretende dar una solución a esos dos interrogantes, lo primero por cuanto es el objeto de la ciencia económica; lo segundo, es un tema de políticas del mercado y de la legislación de una nación que impida la ocurrencia de ese fenómeno. Lo que se desea resaltar es que los recursos siempre serán una dificultad constante, ya sea por su escases o bien porque se concentra en algunos pequeños grupos; el tema es financiero, es una causa determinante que afecta a los derechos en general, ya que refleja o permite medir lo que acaece en una sociedad expresando ya sea un estado de prosperidad y bonanza o una situación contraria.

Por lo tanto, ante las variantes económicas, y la necesidad de recursos necesarios para la protección, promoción, implementación y garantía de los derechos humanos, es que se trata de llegar a un punto de equilibrio, de esa manera se llegó a la idea de una figura jurídica en que exista una seguridad jurídica, que opera a pesar de las variables, además de tener la constante de afluencia de recursos económicos, esto es la contratación estatal (es evidente la existencia de otros medios de financiación, y en el desarrollo del escrito se mirarán esas otras opciones, pero esta figura jurídica en particular es la apuesta académica de este escrito); en esencia se propone que: a través de una adecuada planificación, de una buenas negociaciones e investigaciones iniciales con la característica de ser eficaces, efectivas, incluyentes e integrales al momento de plasmar las estipulaciones en las etapas previas o iniciales de la contratación estatal se podría garantizar, proteger, implementar o promover los derechos humanos, que adicionalmente ha de tenerse en cuenta el presupuesto de la nación, en donde deben asignarse los recursos adecuados en pro de todos los derechos, no sólo aquellos que tengan una connotación social; como un punto adicional que puede aportar este documento, se presenta una propuesta que permita lograr la participación del sector privado en un tema que siempre ha sido considerado como exclusivo del Estado, cuando los derechos humanos por su naturaleza se consideran universales, y en los que todos estamos implicados, en esa misma forma no sólo hay derechos sino también debe tenerse presente que existen deberes y obligaciones.

Problema jurídico

¿Es viable generar una política pública nacional, o internacional, mediante la inversión económica dada por métodos alternativos de financiación, como podría ser la contratación estatal, para lograr la garantía, implementación, protección y promoción de los derechos humanos o fundamentales en Colombia?

Hipótesis

El financiamiento preventivo, adecuado y constante dirigido a la garantía o protección de los derechos humanos o fundamentales, anticipando el pleno cubrimiento de las necesidades básicas a los individuos, grupos, colectivos, comunidades o sociedad en general; lograría notables beneficios a futuro, evitando responsabilidades del Estado por acciones u omisiones en la vulneración de derechos humanos, a su vez, ello lograría reducir eventuales procesos contencioso-litigioso estatales para asegurar cumplimientos, aquellos incrementan gastos operacionales además que influyen en la congestión judicial. Al no existir condenas contra la Nación el doble ahorro obtenido, es dable al aumento de la inversión de lo que aquí se propone o en temas de infraestructura o mejoramiento económico.

Todo esto redundaría en un Estado más garantista, con un mejoramiento en la calidad de vida de los diversos sectores sociales, además de un notable mejoramiento en la economía procesal, y con una adecuada gestión gubernamental del momento, inclusive podría darse un mayor impulso a la economía nacional ante el bienestar del conglomerado, tal y como sucede en aquellos países, en especial los escandinavos, que demuestran tener economías fuertes al tener una fuerte inversión social.

Metodología

El soporte de la presente investigación o la metodología, por su naturaleza, ya que consiste en demostrar la necesidad de recursos, e implica realzar las obligaciones estatales y de los individuos, las fuentes serán de carácter documental, textos que en su gran mayoría expongan un estudio poblacional y estadístico, por supuesto, si es del caso, se aportará doctrina que fundamente o fortalezca ideológicamente algún punto; debe de tenerse en cuenta que muchos aportes contendrán un análisis subjetivo respecto de los datos que se expondrán. Por último, habrá un fuerte componente legal, propio de todo escrito jurídico, a pesar de la existencia de jurisprudencia, que no es dada en exceso y en este caso es más limitada aún, se partirá del hecho que las providencias están circunscritas a lo establecido por la legislación, nacional e internacional, por lo tanto, serán las normas el marco en el cual se ha de mover y construir este documento.

Estructura del documento

En la estructura ideológica del presente escrito, se ha de plantear en su primera parte las obligaciones adquiridas por los Estados, incluyendo Colombia, en derechos humanos, a nivel internacional y su incorporación al interior (se lleva a cabo este proceso mediante leyes y precedentes jurisprudenciales, pero como se mencionó, no se resaltará el tema de las providencias, que es relevante, pero ello daría paso a un escrito adicional presentando una línea jurisprudencial) fortaleciendo sus obligaciones o compromisos; posteriormente se enlaza esto a la estructura económica del país, cómo funciona, la forma en que se ejecutan los presupuestos, en qué se invierte, cómo se financian algunos proyectos, etc., después se realza la necesidad de invertir en derechos humanos, con todo lo que ello implica, cerrando ese capítulo con algunas distintas formas de obtener recursos; se finaliza con la propuesta central, de cómo financiar los derechos humanos protegiéndolos, promoviéndolos, implementándolos y garantizándolos a través del uso de la contratación estatal, con la expectativa de lograr un documento con una aplicación o ejecución real.

ÍNDICE

I. Obligaciones del Estado en promover, proteger implementar y garantizar los Derechos Humanos	7
1. Marco jurídico	10
i. Marco normativo Internacional	12
i. Obligaciones de promoción e implementación de carácter general	12
ii. Obligaciones de promoción e implementación de carácter específico	16
ii. Marco normativo Nacional	27
i. Constitución Nacional del Estado de Colombia	27
ii. Leyes y Decretos	28
iii. CONPES	30
iv. Directivas	30
2. Del Presupuesto Nacional, destinaciones y partidas	31
i. Producto Interno Bruto	32
ii. Presupuesto Nacional o Público	34
iii. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	36
iv. Inversión	43
3. La obligación de adecuación del derecho interno a la protección la promoción, implementación y aplicación de los Derechos Humanos	45
i. Obligación de adecuación del derecho interno	46
ii. Necesidad de una política pública en Derechos Humanos	48
iii. Necesidad de asegurar recursos o sobre el financiamiento	51

i. Importancia desde el sistema interamericano.....	52
ii. De la ausencia de recursos.....	54
iv. Formas de financiamiento.....	61
i. Donaciones.....	63
ii. Asignaciones Presupuestales.....	66
iii. Contratación Pública.....	69
II. Derechos Humanos y contratación pública.....	72
4. La etapa pre-contractual pública como una forma de política pública y de garantizar los Derechos Humanos, además de disminuir futuras responsabilidades estatales.....	75
i. Diferentes modalidades de contratación estatal, de los procesos de selección y su ejecución o aplicación.....	76
ii. Una normatividad sesgada en Derechos Humanos.....	83
iii. Utilidad de su aplicación en la planeación y proceso de selección....	87
iv. Exigibilidad a las partes, por medio de la implementación de cláusulas especiales, que permitan la protección de derechos fundamentales de manera inmediata.....	91
5. Sobre la consulta previa y de las cláusulas medio ambientales.....	93
III. Conclusiones.....	97
IV. Anexos.....	103
V. Lista de referencias.....	137

I. OBLIGACIONES DEL ESTADO EN PROMOVER, PROTEGER IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS

Al adentrarse en el ámbito internacional, por lo menos en lo que concierne al área jurídica, se halla que fruto de las prácticas, de las costumbres, de los hechos, en general, de toda la historia de lo que actualmente denominamos como Estados, Naciones y los pueblos o comunidades que los conforman han pactado o estipulado toda una serie de Tratados, Pactos, Convenios, Protocolos o Declaraciones con numerosas y diversas metas o fines de gran importancia para el mundo; obligándose y comprometiéndose a realizar, ejecutar o materializar aquellos objetivos contenidos dentro de los mismos. De forma global, esos compromisos tienen en común su objeto de protección, esto es, las personas, las cuales son parte en alguna forma de esas Naciones negociantes o contratantes, así lo pone de presente las Naciones Unidas:

El desarrollo del Derecho Internacional es uno de los objetivos más importantes de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, en el Preámbulo, establece el objetivo de «crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional».

El Derecho Internacional define las responsabilidades legales de los Estados respecto a su forma de proceder con otros países y al trato que brindan a las personas dentro de las fronteras estatales. Su dominio engloba un ámbito muy amplio de temas de interés internacional, tal como los derechos humanos, los programas de desarme, los delitos internacionales, los refugiados, la inmigración, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la forma de actuar en la guerra, entre otros. También regula el patrimonio mundial, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio exterior, las comunicaciones mundiales y el comercio mundial. (Naciones Unidas, 2014).

Siempre median los derechos humanos en los objetivos del derecho internacional público; por lo tanto, dentro de los objetivos de este escrito, de todos esos compromisos que adquieren los Estados, el más relevante y que cuenta con un debate considerable, además de extenso, es el compromiso de ejecutar sus labores en pos de la garantía, protección, promoción e implementación de los derechos humanos, así se evidencia en los *objetivos del milenio*, que aunque de forma desglosada, la meta a grandes rasgos es lo mencionado en cuanto a la ejecución de las estipulaciones dadas en materia del derecho internacional de los humanos, el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia anuncia de esta forma aquel compromiso mundial:

"El nuevo siglo ha comenzado con una declaración de solidaridad sin precedentes y con el firme propósito de acabar con la pobreza en el mundo". Informe sobre desarrollo humano 2003.

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en la sede de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000), los jefes de Estado y de Gobierno del mundo firmaron la Declaración del Milenio. En ella asumieron compromisos en materia de paz y seguridad, derechos humanos, protección del entorno y atención especial a la pobreza. Con base en esa Declaración se concertaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, que incluyen ocho objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores que deben hacerse realidad para el 2015. Tal como en su momento lo planteó el Informe mundial sobre desarrollo humano 2003, "los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza humana".

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, constituyen la principal agenda global del desarrollo al proponerse reducir, para el 2015, por lo menos a la mitad la pobreza, sus causas y manifestaciones. Estas metas mundiales fueron acordadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo en la Cumbre del Milenio (septiembre 2000).

Los ODM sintetizan los objetivos de desarrollo convenidos en las conferencias internacionales y las cumbres mundiales durante toda la década de los años noventa. Incluyen ocho objetivos, 18 metas y más de 40 indicadores.

Los Objetivos de Desarrollo de Milenio son las metas específicas de reducción de la pobreza más completas y que más amplio apoyo han obtenido en el mundo. Tal como lo señala el Proyecto del Milenio "para el sistema político internacional, representan la piedra angular en la que se basa la política de desarrollo; para más de mil millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema, representan los medios necesarios para poder llevar una vida productiva; para todos los habitantes del mundo, son la piedra angular de la búsqueda de un mundo más seguro y más pacífico".

Por tanto, para los millones de personas que viven en pobreza extrema, los ODM representan su vida o su muerte, porque en esas condiciones y ante la carencia de ingresos una enfermedad, una inundación o una plaga pueden acabar fácilmente con la vida y genera retrasos en las posibilidades de desarrollo humano de millones de personas en el planeta. Los ODM forman parte del capital humano, de la infraestructura, de la sostenibilidad y el capital natural, del crecimiento económico general. (PNUD, 2014)

En concordancia con los compromisos que se enunciaron, uno tiene especial importancia, es el cometido de los Estados para promover e implementar los derechos humanos, esto con el

fin de que realmente sean aplicados y que no queden como un concepto o una simple manifestación de buena voluntad, en especial de que en el momento de ser realmente sean necesarios, puedan ser materializados sin ningún tipo de impedimento.

Es importante resaltar que los Estados actualmente comprometen sus agendas, movilizan amplios recursos, invierten una gran cantidad de tiempo, realizan un notorio esfuerzo al momento de trazar estos compromisos, por lo tanto, no se puede hablar tan a ligera de que las Naciones solo desean mantener simplemente un discurso sin ejecución alguna, pero no puede negarse que en la actualidad, o más recientemente, por la voluntad política de algún Gobierno de turno, se puede ver afectada en alguna forma toda la inversión que se ha tenido hasta el momento.

Es evidente que esta es una labor de alta dificultad y complejidad; las altas partes contratantes, y buena parte de los sectores sociales, entienden que los derechos humanos son un tema de vital importancia para una convivencia digna, teniendo en cuenta los Tratados y los Objetivos del Milenio, se puede decir que por lo menos existe un consenso mayoritario de lograr un bienestar general; ya sea en el área social, comunal e individual, por lo tanto, todo este tema siempre debe ser parte de la agenda como algo prioritario, por lo menos en todo Estado democrático.

Aunque la historia ha demostrado que a veces no se logran muchos de los resultados esperados o planteados, y aunque en ocasiones pareciera que se tratara de un esfuerzo en vano, hay algo que debe tenerse en cuenta, y es que los fines que se persiguen contienen una filosofía, argumentación y fundamentación de tal magnitud, que no se puede simplemente desistir y dejar de lado esa constante lucha por lograr la implementación y aplicación de estos derechos por el bienestar de la humanidad. En consecuencia, aunque de manera lenta, y a veces con intentos demasiados cautelosos, los Estados siguen tratando de crear un ordenamiento jurídico adecuado y justo, en que se tengan en cuenta todas las diferencias que pueden presentarse entre las distintas sociedades, en especial aquellas que no tienen similitud alguna, tratando de respetar las distintas cosmovisiones, pero que a su vez se impongan una serie de reglas justas y claras las cuales todos los seres humanos puedan seguir, entendiendo que el bienestar es algo natural y no algo que deba exigirse; es lo indicado lograr paulatinamente un mayor desarrollo en la calidad de vida y una digna convivencia, pero para que todo ello sea así se debe haber un

gran soporte, una fuerte interiorización del respeto por el otro junto con un coherente, estructurado y estricto catálogo de derechos fundamentales que pueda ser materializado o exigibles.

1. Marco Jurídico

Desde hace un buen tiempo los Estados en la construcción de sus ordenamientos jurídicos, constantemente se han encontrado ante el dilema de la implementación de un sistema jurídico internacional, ya que de ello se derivan varias problemáticas tales como la prevalencia de las normas, el cumplimiento de las recomendaciones, decisiones u órdenes de los organismos supranacionales conformados por ellos mismos o tener que aceptar ciertas imposiciones sacrificando así la ya antigua noción de soberanía.

En la configuración actual de la sociedad internacional de los Estados soberanos continúan siendo, fundamentalmente, los destinatarios principales de las normas de derecho internacional; pero es obvio que el Derecho Internacional contemporáneo ya no tiene la función de regular solamente relaciones entre Estados sino que se ocupa de materias cuya regulación correspondía en el pasado al derecho interno. Por ejemplo, en materia de derechos humanos los Estados no poseen una esfera de competencia absoluta porque la comunidad internacional reconoce hoy en día la existencia de valores o bienes jurídicos universales, cuya promoción y protección trascienden la competencia propia de un Estado particular. En otros términos, la violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana interesa a toda la comunidad internacional y, de acuerdo con el derecho internacional contemporáneo, tales violaciones están sujetas a la acción colectiva de los Estados.

De igual manera, los destinatarios de las normas que forman parte del derecho internacional humanitario son, primordialmente, los Estados. Sin embargo, una parte importante de las normas de derecho humanitario regulan la conducta que deben observar las partes en luchas civiles y en las de liberación nacional, es decir grupos o entidades que no son necesariamente Estados. Además es importante tener presentes que esas normas obligan no sólo a los Estados como tales, sino también a los individuos, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, Jefes de Gobierno, Ministros de Estado y a otros funcionarios, así como a las fuerzas que actúan por decisión o autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (Acevedo, 1992).

A pesar de las diferencias que surgen a lo largo de estos procesos, cada Nación acepta y opta por la mejor forma de interiorizar o amalgamar los sistemas para que todos en algún momento hablen en la misma clave en las diferentes áreas del derecho internacional público o privado;

todo ello con el fin proteger, garantizar, implementar o promocionar los diversos actos jurídicos necesarios para el desarrollo de cada alta parte contratante y de sus ciudadanos. Al ser una instancia internacional los Estados tienden a tener siempre en el horizonte que sus acciones sean más cercanas a la justicia y a la seguridad jurídica.

El tema de la "Relación entre el derecho internacional y el derecho interno", además de un alcance y contenido sumamente vasto, tiene al mismo tiempo una importancia fundamental puesto que la eficacia y efectividad del derecho internacional depende, en gran medida, de la manera en que los ordenamientos jurídicos internos se conformen a las normas internacionales y les den efecto. Con referencia al derecho internacional humanitario, como se verá más adelante, este punto específico ha sido objeto de numerosos pronunciamientos. Por ahora bastaría mencionar que en 1986 la propia Conferencia Internacional de la Cruz Roja reafirmó que la aplicabilidad del derecho internacional humanitario depende, en gran medida, de la adopción de leyes adecuadas e instó "a los gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y, cuando proceda en los Protocolos adicionales a cumplir cabalmente su obligación de adoptar o complementar la legislación nacional pertinentes". (Acevedo, 1992).

En Colombia sucede una circunstancia particular a la de otros países, aquí nos vamos a encontrar con que el ordenamiento jurídico normalmente tiende a fusionar las instancias externas e internas, a través de la negociación, suscripción y ratificación de los Tratados, Convenios, Pactos, Declaraciones, etc., se finaliza todo el proceso dado a nivel internacional con una ley interna, la cual pasa por una revisión del máximo tribunal constitucional, por consiguiente, esto permite la aplicación directa de lo allí dispuesto a través de los mecanismos o acciones que se dan al interior del mismo ordenamiento.

... para que el Presidente pueda obligar internacionalmente a Colombia, es necesario que el Congreso apruebe el tratado mediante una ley. Adicionalmente, y como se explicará con más detalle, es necesario que la Corte Constitucional verifique la compatibilidad del tratado con las normas superiores. (Orjuela, 2005).

Actualmente, Colombia mantiene la Constitución Nacional como el punto fundamental de toda la estructura normativa, incluyendo las disposiciones Universales y direcciona todo el sistema en el sentido dado por el Constituyente, esta superioridad contiene algunas excepciones frente alguna de las disposiciones Internacionales, son aquellas normas que poseen unas características determinadas dadas por la Carta Política las cuales tendrán su mismo valor (especialmente aquellas relacionadas con los Derechos Humanos), a esa situación la denominamos con una figura jurídica denominada "*Bloque de Constitucionalidad*".

La noción de bloque de constitucionalidad puede ser formulada recurriendo a la siguiente imagen paradójica: este concepto hace referencia a la existencia de normas constitucionales que no aparecen directamente en el texto constitucional. ¿Qué significa eso? Algo que es muy simple pero que al mismo tiempo tiene consecuencias jurídicas y políticas complejas: que una constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional, esto es, que las normas constitucionales, o al menos supraleales, pueden ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la constitución escrita. (Uprimny, 2004).

A continuación, se presenta un marco normativo Internacional -de los tratados ratificados por Colombia- y Nacional, relacionados con aquellas obligaciones de promover, garantizar, proteger e implementar los derechos humanos en Colombia, para así sentar algunas bases jurídicas de los compromisos adquiridos y de esta forma encaminar el discurso con el fin de resolver nuestro planteamiento inicial.

a. Marco Normativo Internacional

Este acápite está compuesto por dos partes; un primer momento consta de aquellas obligaciones adquiridas internacionalmente, trasnacionalmente, supranacionalmente, fruto de todos aquellos consensos entre naciones en pos de la humanidad, de carácter general -esto es dirigido a un colectivo, comunidad o sociedad- y en segundo lugar se expondrán aquellos acuerdos que contienen estipulaciones específicas, es decir, aquellos sujetos los cuales son especialmente e individualmente protegidos por su condición; tema que ha sido escindido con el fin de facilitar, por lo menos dogmáticamente, la presentación de lo que aquí se pretende avizorar.

i. Obligaciones de promoción e implementación de carácter general

En esta parte se ha de presentar los instrumentos jurídicos internacionales que contienen las obligaciones de los Estados contratantes de promover, garantizar, proteger e implementar políticas de Derechos Humanos hacía sujetos indeterminados, donde está presente el compromiso de realizar todas las gestiones y transformaciones necesarias al interior de cada Nación teniendo como guía cada una de las herramientas jurídicas ya negociadas, suscritas y ratificadas. En estos compromisos puede existir doctrina frente a su alcance y contenido, pero

no es la intención de este texto hacer un debate, sino presentar los compromisos adquiridos, por lo que es necesario presentar la transliteración de las normas, reflejo de los consensos.

La Carta de las Naciones Unidas, en la que Colombia fue parte de los primeros cincuenta Estados suscriptores, en su primer capítulo sobre los *propósitos y principios*, hay un primer vestigio de las obligaciones sobre fomento y desarrollo -con la salvedad que está más relacionado a la cooperación entre los Estados que a la promoción e implementación en el interior de cada Nación-, tiene el carácter de ser un vínculo primigenio del compromiso con otros países para el estímulo y respeto por los derechos humanos.

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y (...). (Carta de las Naciones Unidas). (Subrayas fuera de texto).

En la Convención Americana de Derechos Humanos en su parte primera de los "*deberes de los estados y derechos protegidos*", capítulo uno "*enumeración de deberes* se tiene que en un primer artículo habla acerca de la "*obligación de respetar los derechos* en donde se sigue el compromiso de respetar los derechos y garantizar su pleno uso sin ningún tipo de discriminación al momento de hacerlos efectivos, esto es, sin necesidad de pleitos con el fin de buscar su debida protección, sólo por el hecho de ser una persona parte del Estado miembro.

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (Convención Americana de Derechos Humanos). (Subrayas fuera de texto).

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya entrada en vigor fue el 23 de marzo de 1976, en su segunda parte, artículo segundo, no sólo se mantiene el ideal de respetar y garantizar por parte de los Estados parte los derechos reconocidos en este instrumento, como de los anteriores, sino que además se establece el compromiso de adoptar por cada uno, acorde a su procedimiento interno, el proferir disposiciones legales o de otro tipo que permitan hacer efectiva esa protección sin distinción alguna.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). (Subrayas fuera de texto).

Así como ha de encontrarse esta obligación de los Estados parte frente a las personas, desde un punto de protección individual, es menester establecer esta protección y garantía al grupo comprendido en sociedad o colectivo, es por ello que encontramos una regulación de promoción e instauración de los derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado el 16 de diciembre de 1966.

Es más interesante aún este pacto para el documento, en la medida que se debe entender que en la mayoría de las ocasiones al celebrar contratos de carácter público, su objeto corresponde a algún fin del Estado los cuales tienen la connotación de tener un impacto en el colectivo o en la sociedad en sí.

Es así como en su segunda parte, el artículo correspondiente hace mención al compromiso de adoptar, si es necesario, medidas de asistencia y cooperación internacional, en especial, técnica y económica hasta el máximo de sus recursos para lograr de forma progresiva la adopción de medidas legislativas que den plena efectividad, garantizando sin discriminación, sea nacional o extranjero de los derechos allí dispuestos. Esto es más válido y actual cuando hablamos de la contratación pública, ya que es un tema que enlaza lo técnico, económico y jurídico, en la actualidad es una situación de globalización por lo que lo internacional es cada vez más relevante en cualquier acción de un Estado.

Artículo 2

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). (Subrayas fuera de texto).

En su parte tercera, artículo sexto, se evidencia uno de los derechos, que además de ser un tema relevante al momento de hablar de la contratación pública, está presente en cualquier aspecto económico y es de gran importancia al hablar de su protección a nivel internacional; el derecho al trabajo, un elemento que además de ser un derecho fundamental, puede tener un excelente desarrollo al momento de regular cualquier contratación.

Al momento de ahondar en nuestra legislación interna sobre la contratación, se puede determinar qué tan elaborado, amparado y garantista ha de encontrarse las disposiciones relativas a este derecho, es fundamental observar esa situación en la medida que nunca puede desestimarse el componente humano y su debida protección.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). (Subrayas fuera de texto).

Por último, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o llamado "*Protocolo de San Salvador*", como herramienta jurídica con un contenido de obligación de carácter general de adoptar medidas y disposiciones de derecho interno, además de no discriminar.

Lo anterior, está acorde a lo expuesto por los demás instrumentos presentados, por lo que es una forma de complementar todo lo dado hasta el momento en materia de promoción de derecho humanos de forma general.

Artículo 1. Obligación de Adoptar Medidas. Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante

la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

Artículo 2. Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos. (Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). (Subrayas fuera de texto).

De esta forma, podemos observar cómo se insiste en el concierto internacional en la necesidad de promover, proteger, garantizar o implementar en la mejor forma que tengan los Estados parte los derechos humanos, además se incentiva la implementación de medidas de carácter económico y técnico para el desarrollo de la Nación logrando de esta manera el desarrollo y progreso que redunda en las personas que hacen parte de ellos; inclusive, se dispone el apoyo internacional para el logro de sus fines para con la sociedad e individuos.

En lo que concierne a la contratación pública, como es una forma en que el Estado materializa sus fines, además de ser una manera de garantizar unos recursos constantes, adicionalmente está dirigido tanto a pequeños sectores como a su generalidad, es una forma rápida y eficaz de promocionar, garantizar, implementar y proteger derechos fundamentales humanos reconocidos universalmente si se encuentra dentro del objeto de cada contrato, teniendo como eje al ser humano en sus diferentes dimensiones.

ii. Obligaciones de promoción e implementación de carácter específico

Como se enunció previamente sobre las obligaciones de promoción, garantía, protección e implementación de carácter general, existen herramientas jurídicas internacionales que a su vez cumplen esa función de adelantar conductas que se ciernen a un determinado grupo o individuo, normalmente ubicado en una situación de discriminación, indefensión o inferioridad ya sea por cuestiones culturales, fisiológicas, temporales o de situación de precariedad económica. Es tanto así la situación de estos, que los Estados han llegado a acuerdos en pos de la protección especial y específica de ellos, que de igual forma a

lo anterior, son medidas que deben ser adoptadas al interior de los países que parte o miembro de los tratados, convenciones, pactos, protocolos, entre otros.

Cada sujeto al que se le da mención especial en los instrumentos jurídicos de naturaleza internacional puede ser, o realmente, debe ser amparado al interior de la legislación de los Estados parte; la protección de ellos se encuentra en su mayoría en la legislación colombiana, como se verá al mirar la normatividad nacional, o por lo menos hay alguna forma de protección legal al respecto.

En primer lugar, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o conocida como la "*Convención de Belem Do Para*", en su capítulo tercero, sobre los "*Deberes de los Estados*", se determina la protección hacia la mujer; es de conocimiento público o un hecho notorio que ellas han sido objeto de una constante discriminación por diferentes o diversas razones a lo largo del tiempo; por lo tanto, las disposiciones normativas en un primer momento están dirigidas a la igualdad material, el tratar de equilibrar las cargas suele llamarse *acciones afirmativas*, estas aunque han tenido algunas discusiones en su aplicación, es la mejor forma que se ha encontrado hasta el momento para lidiar con un sistema predominantemente patriarcal. Así ha sido reconocido y demostrado en el ámbito internacional ante la necesidad de expedir una convención que permita una mayor protección de género, pero inicialmente habría que dar la discusión develando la problemática dada al respecto.

Se consideró necesario contar con otros medios para proteger los derechos humanos de la mujer porque el mero hecho de su "humanidad" no ha sido suficiente para garantizar a las mujeres la protección de sus derechos. En el preámbulo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se explica que, a pesar de la existencia de otros instrumentos, las mujeres siguen sin tener derechos iguales a los de los hombres. La discriminación contra la mujer sigue existiendo en todas las sociedades. (Declaración y Programa de Acción de Viena, 1993).

Lo anterior, se traduce en la Convención realizada un año después, en este caso el mismo Tratado da algunos aportes de los cambios que deben llevarse a cabo al interior de los Estados con el fin de lograr avances en relación a evitar la violencia o discriminación hacia la mujer. Ha de considerarse que más allá de ampliar la protección que otorga esta normativa, la discusión en realidad debería consistir en que más que evitar la violencia, el trabajo o los

ideales deben estar centrados en cambios ideológicos y formativos, en todos los sentidos, para promover un desarrollo social integral. Claro está que mientras se llevan a cabo modificaciones estructurales deben existir normas que permitan contener un poco las transformaciones y las resistencias que ello conlleva. Es pertinente observar lo contenido en sus artículos 7°, 8° y 9°, ya que denotan la importancia de adoptar, en forma progresiva, medidas específicas teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, la disposición que se cita a continuación reconoce la necesidad de establecer políticas al respecto.

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente. (Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer), (subrayas fuera de texto).

En materia de contratación pública o privada, este caso particular, como los que a continuación se han de presentar en relación a los sujetos, las circunstancias, los derechos, los objetivos y en general todo lo relacionado a la estructuración jurídica que pueda darse, tiene el potencial de variar y aplicarse en diversas formas, debe entenderse que es cuestión del Estado Parte el imponer o establecer los mínimos que deben tenerse en cuenta al momento de planear las estipulaciones y condiciones en los distintos hechos y negocios jurídicos dados en su territorio.

Para complementar, la protección especial hacia la mujer se encuentra de forma paralela al instrumento anterior en la *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, del cual puede decirse que completa de una manera más progresista la defensa y amparo de los derechos propios de su sujeto de protección.

Quizá lo más interesante de esta normatividad, como se puede observar en los artículos 2° y 3°, es lograr promover cambios en los patrones sociales, ya sean culturales, económicos, políticos o legales, ello permite plantear propuestas más apropiadas en distintos niveles o áreas con el fin de lograr esas transformaciones en lo expresado hasta el momento, mientras que a su vez puedan lograrse avances positivos en material de igualdad materialmente hablando.

Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas **política, social, económica y cultural**, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer). (Subrayas y negrillas fuera de texto).

La Convención sobre los derechos del niño, con entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, establece la obligación de cada Estado Parte para con ellos, en este caso no puede hablarse de sujetos contratantes en materia de contratación, por el hecho de ser menores de edad; sin embargo, toda actuación estatal debe de tener en cuenta a los niños, niñas y adolescentes como sujetos especiales, ya que constitucionalmente (y en el deber ser de las cosas) tienen prelación sobre cualquier persona mayor de edad, el denominado *interés superior del niño*, por lo tanto, debe recaer sobre ellos la protección del más alto nivel, y en la situación de que cualquier actuación de agentes del Estado o de particulares los afecte, se debe de tomar las medidas de corrección, disciplinaria, civil o penal al respecto.

Artículo 3

1. En **todas las medidas concernientes a los niños** que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el **interés superior del niño**. (Convención sobre los derechos del niño), (subrayas y negrillas fuera de texto).

Aquí se presenta una situación bastante particular, ya que como lo expresa el artículo 4° de la recién citada convención, el *interés superior del niño* en materia de los *DESC* llega hasta la capacidad económica del Estado Parte y también se encuentra sujeta al marco de la cooperación internacional lo que puede ser muy diciente, además de ser una cuestión que puede tener una discusión de fondo, pero ello no es propio del tema que se trata ahora.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. (Convención sobre los derechos del niño). (Subrayas y negrillas fuera de texto).

Entre los sujetos especiales de protección se hallan las personas con algún tipo de discapacidad, de los instrumentos jurídicos internacionales en relación a la promoción, protección, garantía e implementación de los derechos humanos respecto de ellos se resaltan dos; en primer lugar, se encuentra la *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*.

El propósito de la presente Convención es **promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.**

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en **igualdad de condiciones con las demás.** (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad), (subrayas y negrillas fuera de texto).

En segundo lugar, se halla la *Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad*, que al analizar su contenido se evidencia un mayor compromiso, trabajo y promoción por los Estados Parte para fomentar la protección especial en derechos humanos en este tema.

Artículo III

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de **cualquier otra índole,** necesarias para **eliminar la discriminación** contra las personas con discapacidad y **propiciar su plena integración en la sociedad,** incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:

(...). (Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad), (subrayas y negrillas fuera de texto).

El Convenio OIT No. 169 sobre *pueblos indígenas y tribales en países independientes*, establece el reconocimiento de los pueblos tribales distinguidos al resto del colectivo social en

diferentes aspectos, a los cuales se les reconoce sus propias costumbres y reglas en el marco de un ordenamiento jurídico general, se afirma la identidad de sus instituciones, y para la aplicación de esta normatividad debe tenerse en cuenta su conciencia como grupo indígena o tribal; cualquier definición al interior de las disposiciones no puede ser restrictiva de la situación de estos sujetos.

En igual forma, se puede hallar la obligación de respetar, promover o garantizar la protección de sus derechos, el generar oportunidades y colaborar en la eliminación de las diferencias que puedan presentarse.

En Colombia existen algunas herramientas que permiten la inclusión de las comunidades y grupos étnicos en las decisiones de infraestructura o que modifiquen territorios donde se encuentran ubicados, la consulta previa por ejemplo, de ella se hará un análisis en capítulo posterior, por ahora es importante remarcar el marco del convenio el cual presenta varias disposiciones las cuales se han de tener en cuenta al momento de proteger a estos grupos o comunidades especiales, del caso en concreto los dos primeros artículos permiten establecer los lineamientos del instrumento, estas normas permiten que los pueblos tribales se puedan regir por sus costumbres, además de mantener sus instituciones, adicionalmente los gobiernos deben generar acciones coordinadas para garantizar sus derechos y respetar su integridad, con igualdad, con plena efectividad y de manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Artículo 1o.

1. El presente Convenio se aplica:

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicos les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;

(...)

Artículo 2o.

1. **Los gobiernos** deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

(...). (Convenio No. 169, OIT). (Subrayas y negrillas fuera de texto).

La *Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial* es la herramienta internacional con la cual se pretende llevar a cabo sus esfuerzos en pos de la eliminación, en todas sus formas, de la discriminación racial promoviendo el entendimiento entre todas las razas, así reza su contenido.

Antes de ahondar en algún tipo de análisis, es dable presentar dos cuestiones para hacer claridades conceptuales; en primer lugar lo que entiende esta normatividad por *discriminación racial*, ello está contenido en su artículo primero que expresa: *Denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.*

En segundo lugar, es dable presentar una definición científica del concepto raza, de esta forma Sierra Alfranca, I. (2001) lo define como: *un concepto técnico- científico, identificador y diferenciador de un grupo de animales, a través de una serie de características (morfológicas, productivas, psicológicas, de adaptación, etc.) que son transmisibles a la descendencia, manteniendo por otra parte una cierta variabilidad y dinámica evolutiva.* Ese concepto permite establecer una visión muy general del tema, dando paso a poder identificar lo que comprende la raza y así saber en qué sentido es que puede existir distinción alguna.

Este instrumento facilita además algunas disposiciones que promueven la protección hacia toda discriminación racial e instan a que se tomen medidas al respecto, ya que en su artículo 2°, en los dos numerales que lo componen, se establece el no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial, no fomentarla, defenderla o apoyarla, el deber de cada Estado de revisar sus políticas para ajustar el ordenamiento evitando que se pueda crear alguna forma de discriminación o perpetuarla, prohibir de manera tajante su práctica y fomentar estimular organizaciones y movimientos multirraciales e integracionistas.

Artículo 2

1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:

(...). (Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial), (subrayas y negrillas fuera de texto).

Con el fin de reforzar lo anterior, el evitar cualquier forma de discriminación racial, es pertinente traer a colación la *Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid*. El apartheid cuya definición dada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española plantea *segregación racial, especialmente la establecida en la República de Sudáfrica por la minoría blanca*, indica una discriminación racial, a pesar de que sus orígenes sean dados por una situación dada en un determinado país, una exposición más amplia y precisa del tema sería la que se plantea a continuación.

Las Naciones Unidas denunciaron el "apartheid" como un crimen de lesa humanidad y una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales, manifestando que "su verdadero propósito es consolidar y perpetuar la dominación por la minoría blanca y la desposesión y explotación de los africanos y otra gente no blanca en Sudáfrica". (Bissio, 1977).

Un objetivo que no está expresamente dicho en este escrito, es poder proponer un pensamiento que conlleve a realizar acciones con el fin de evitar llegar a ese estado de cosas (apartheid, genocidios, masacres, etc.), más si se tiene en cuenta que Colombia es un país con múltiples diferencias culturales, que ha tenido que sobrellevar a lo largo del tiempo el tener que lidiar la falta de tolerancia hacia "lo distinto", se ha salido adelante en cierta forma, no sin haber derramado sangre (en exceso); sin embargo, la historia nos ha demostrado que suele suceder de forma constante que, por más vecinos y unidos que puedan llegar a ser dos pueblos, grupos, familias, sociedades, a veces pueden ser más los intereses o las ideas de supremacía, por lo que es sensato y sabio adoptar medidas previas teniendo en cuenta ello, evitando reiterar las dolorosas lecciones del tiempo y de las acciones de los hombres.

Artículo IV

Los Estados Partes en la presente Convención se obligan:

a) A adoptar las medidas legislativas o de otro orden que sean necesarias para reprimir e impedir el aliento al crimen de apartheid y las políticas segregacionistas similares o sus manifestaciones y para castigar a las personas culpables de tal crimen. (Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid), (subrayas fuera de texto).

Uno de los derechos fundamentales de toda sociedad, que influye en lo personal y en lo colectivo, es lo relativo al trabajo, así las cosas, el sujeto especial de protección en este caso el trabajador, y porque no, el empleador en ciertas circunstancias; en una relación que presenta un sin número de escenarios, positivos tales como el crecimiento personal, familiar, social o profesional, a su vez ello demuestra el desarrollo de una Nación; como aspectos negativos, muchos de ellos en virtud de obtener beneficios deprecando y pasando por encima de la dignidad humana en la obtención de satisfacer un egoísmo extremo.

La mayoría de las personas en el mundo sólo pueden aportar mano de obra o su intelecto (y si se tiene en cuenta que en la actualidad se concentra cada más en un puñado de personas, la situación en el horizonte no se ve mejor), por lo que gran parte de la población se encuentra en un estado constante de indefensión, ante aquellos que aprovechan el desequilibrio contractual para abusar de su condición, o los mismos se hallan sujetos a las variantes del mercado, por lo tanto, deben tomarse medidas o hacer mano de las herramientas jurídicas existentes, con el fin de equilibrar la situación (así lo reconoce el artículo 1° del Código Sustantivo del Trabajo Colombiano, que expresa en su objetivo. *La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.* Se ha de plantear entonces algunos de los instrumentos jurídicos internacionales que han reconocido esas circunstancias, y los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Estado mediante sus agentes o instituciones o por los particulares.

En el Convenio No. 98 de la OIT relativo a la *aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva* en su artículo 4° se expresa que *Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las*

condiciones de empleo. Como se puede observar, es una regulación dirigida a las garantías y derechos que tienen los grupos sindicales o las alianzas entre trabajadores.

En el Convenio No. 100 de la OIT relativo a *la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la obra de mano femenina por un trabajo de igual valor*, se esgrima precisamente la necesidad de generar procesos de inclusión e igualdad de géneros en materia laboral, ello tiene sentido y está expuesto de manera coherente a todo lo dicho hasta el momento, además de ser parte consecuente en este punto del derecho del trabajo, ya que este instrumento entiende que no sólo contar con un empleo garantiza la existencia de condiciones de igualdad entre los trabajadores o el ejercicio pleno y equivalente del mismo. Es así como en los artículos 1° al 4° se desarrollan en armonía todos los instrumentos, una protección con el fin de lograr igualdad laboral, pero en especial el artículo 3°, implica llevar a cabo políticas para que exista una vigilancia constante en lograr y mantener la igualdad y protección.

ARTÍCULO 3

1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente Convenio. (Convenio No. 100, OIT), (subrayas fuera de texto).

En el Convenio No. 111 de la OIT relativo a *la discriminación en materia de empleo y ocupación* se evidencia la protección en términos de igualdad, evitando cualquier forma de discriminación, ya que como se ha visto previamente se reconoce el empleo como la forma básica en que el ser humano crece y se desarrolla en todos los demás ámbitos permitiendo una calidad de vida digna que permita ejecutar sus proyectos personales o familiares dando un sentido al camino que opta por recorrer; es así como las disposiciones tienen la intención de garantizar unas condiciones mínimas de protección, ya que se entiende que el trabajo es una obligación de cada Estado y depende de las condiciones económicas o de la actividad a ejecutar, se puede establecer unas condiciones justas para acceder dependiendo de la preparación de cada sujeto (teniendo en cuenta que es también una obligación de cada Nación es que una persona la cual posea la intención de capacitarse para ejercer una labor, tenga las herramientas adecuadas para hacerlo). Así en sus disposiciones (artículos 1°, 2° y 4°) se define, se promueve y se limita los alcances de la discriminación en materia de empleo, aquella limitación está dada por la idoneidad de la persona para determinado cargos, en especial

restringir la posibilidad de convertirse en una amenaza ya que la actividad que realiza puede ser perjudicial a la seguridad del Estado, y en algunos casos, debe mediar la posibilidad de acudir a un tribunal competente para determinar su peligrosidad.

ARTÍCULO 4

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional. (Convenio No. 111, OIT), (subrayas fuera de texto).

En el Convenio OIT No. 138 *sobre la edad mínima de admisión al empleo*, en su artículo 1° se establece que *todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores*, esa disposición tiene el objetivo de proteger a los menores de edad de cualquier forma abusiva de empleo, cuestión que en Colombia es totalmente aplicable, ya que a pesar de existir una normatividad interna con el fin de garantizar derechos a los niños, niñas y adolescentes, se siguen presentando tales hechos de explotación infantil; ante la existencia de un instrumento internacional del tema o una regulación normativa interna, es la evidencia de aquella realidad, una problemática no sólo dada en nuestro país, es también una cuestión internacional.

Por último, el Convenio *sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas y de los monumentos históricos* (Pacto Roerich), es un instrumento jurídico que debe de tenerse en cuenta; es evidente que no trata sobre sujetos especiales de protección, pero obedece a la construcción humana, con connotaciones culturales, intelectuales o históricas, esto es, el intelecto humano puesto a disposición de distintos campos, que puede ser realizado por personas, comunidades, grupos o pueblos con condiciones especiales, producción que debe de ser protegida; además, es un tema que puede coincidir en algún punto con todo lo desarrollado en temas posteriores (haciendo en algunas ocasiones alguna hermenéutica o interpretación al momento de llevar a cabo las etapas previas al contratar, puede surgir la necesidad de tomar decisiones que tengan impacto en esos campos, y en consecuencia siempre debe pensarse en

la preservación y protección de todo elemento cultural, histórico o intelectual de una sociedad). De esta forma, en su artículo 2° se establece que *la neutralidad, protección y respeto a los monumentos e instituciones mencionados en el artículo anterior, se acordará en todo el territorio de cada uno de los Estados signatarios y accedentes, sin hacer distinción en razón de la nacionalidad a que pertenezcan. Los Gobiernos respectivos se comprometen a dictar las medidas de legislación interna necesarias para asegurar dicha protección y respeto.*

Una vez vistos los instrumentos internacionales que contienen alguna obligación general o particular de promover, proteger o garantizar los derechos humanos al interior de un Estado Parte o miembro, lo dogmáticamente adecuado es observar ahora, si todos esos compromisos adquiridos se han ido dando al interior de una Nación, en nuestro caso Colombia.

b. Marco normativo Nacional

Para guardar la relación con lo planteado en la parte previa, es esencial presentar el ordenamiento jurídico, político o administrativo por el cual se pone en funcionamiento una primera aplicación de la construcción jurídica internacional al interior de un país.

i. Constitución Nacional del Estado de Colombia

En primer lugar, y como cabeza del ordenamiento jurídico colombiano, encontramos la Carta Política de Colombia o Constitución Nacional, en la que se establece su prevalencia ante cualquier otra ley, disposición o norma al interior de la nación (Artículo 4°), ello incluye por supuesto, el derecho internacional. Como es normal en materia de derechos humanos, la teoría jurisprudencial y doctrinal que fundamenta la aplicación de estos, además de la ratificación por parte del Estado de los tratados correspondientes a la materia, es el llamado *Bloque de Constitucionalidad*, ahondar en este tema sería salir del marco teórico de este escrito, además de ya existir toda una literatura jurídica exponiendo todo lo que se ha dado alrededor de esta figura, que aunque ya tenga este definida conceptualmente, lo cierto es que sus aplicaciones pueden ser innumerables y corresponderá al análisis casuístico en particular, lo que determine las distintas variables que pueden presentarse.

A pesar de lo dicho, es relevante hacer una presentación de las disposiciones de la Constitución que permitan establecer la obligación de aplicar, promover, implementar o garantizar los derechos humanos o que guarden alguna relación con los mismos. En relación con esta parte del documento, es dable poner de presente, enunciativamente, aquellos artículos que hacen una mención directa a los *derechos humanos* en alguna forma: Artículo 67; Artículo 93; Artículo 95. No.4; Artículo 118; Artículo 164; Artículo 214. No.2; Artículo 222; Artículo 277. No.2; Artículo 278. No. 4; Artículo 282. No.23.

Ello implica un gran cambio en la materia, teniendo en cuenta que la anterior Carta Política, de 1886, no hace mención alguna y su referencia a los Tratados Internacionales estaba ajustado a aquellos de carácter público en los cuales se fomentaba la relación de algún tipo con otras naciones, es por ello que es relevante observar todo el ordenamiento jurídico de la norma superior desde 1991, en el cual supone ajustar todos los criterios jurídicos inferiores acorde a los fines, derechos, obligaciones y deberes contenidos en esta.

ii. Leyes y Decretos

Del marco constitucional presentado, en donde se expone la mención o se da referencia a los derechos humanos, se desarrolla toda la legislación que tiene como fundamento lo expresado constitucionalmente o presente per se alguna cuestión en relación a los derechos humanos, continuando así la incorporación de esta materia al interior del ordenamiento jurídico y a las instituciones del Estado de Colombia como parte de sus obligaciones adquiridas en el plano internacional.

Dada la magnitud de leyes creadas al respecto, y además que no es propio de este escrito ahondar demasiado en este tema, es adecuado realizar una mención de cada normativa que exprese su relación al tema de los derechos humanos y de esta forma ir evidenciando el nivel de compromiso que ha tenido el Estado, puede que se pase por alto alguna norma, en especial aquellas previas a la constitución, muchas de ellas relacionadas a la ratificación de los tratados internacionales previos a la carta política; sin embargo, la cantidad de fuentes legales que se presentaran permiten explorar un buen panorama de la situación, en especial toda aquella actividad del congreso a partir de la carta de 1991.

De esta forma, fundamentándose en la Constitución de 1991, y en un orden cronológico, se ha de presentar toda la actividad legal que ha surgido del tema, mencionándose su propósito y exponiendo su relación con los derechos humanos; las demás normatividades distintas a la ley se expondrán de una forma en que se enuncie a grosso modo su contenido.

Existe toda una gran legislación dada desde 1992 hasta la actualidad (**ver cuadro 1.1.- Anexos**) que evidencia todo un reconocimiento en materia de Derechos Humanos, en gran medida se denota la ratificación e integración al ordenamiento jurídico interno de todos aquellos instrumentos internacionales que fueron siendo expedidos a lo largo del Siglo XX y XXI, acorde a todos los acontecimientos de la humanidad, muchos de ellos crueles, dados en buena parte por la guerra o por el estilo de vida impuesto en la modernidad, cada Tratado pactado por las Naciones pone de presente muchos de esos hechos, reconociendo las consecuencias de toda cada actividad humanas que dejan o han dejado huella en la humanidad, ante tales atrocidades que han surgido se intenta regular, contener o proteger mediante la expedición de normas.

Colombia recoge esa experiencia y la integra a través de múltiples leyes y decretos, se puede observar en el compendio normativo interno todas las disposiciones propias de las experiencias del país y las cuales no se replican aún en ninguna otra parte del mundo, verbigracia, la regulación legal de las víctimas del conflicto armado interno, un articulado que contiene la expectativa del Estado de haber creado un mecanismo que permite el reconocimiento y reparación a todas aquellas personas que fueron objeto de las distintas vejaciones cometidas durante décadas por los actores de la guerra, legales o ilegales.

En materia de decretos (**ver cuadro 1.2.- Anexos**) se busca poner de presente la regulación especial que se ha dado en algunas de las leyes dadas en materia de Derechos Humanos, como muchas de las normas traídas a colación contienen ratificaciones de los tratados internacionales y de aquellas que constituyen algún aporte estas no presentan una mayor regulación, se realiza la mencionada norma de víctimas que requirió toda una regulación adicional respecto de los mecanismos de la reparación integral y de los sujetos de especial protección; adicionalmente, se trata sobre los mecanismos para la restitución de las tierras, fruto del despojo de tierras en distintas modalidades, una de las formas más practicadas en el país y causante-consecuencia de diversas vejaciones a múltiples derechos de una gran cantidad de personas en Colombia a

lo largo del tiempo, dando paso a aquel indicador que tristemente solemos encabezar a nivel mundial, el desplazamiento forzoso.

iii. CONPES

Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión.

El Departamento Nacional de Planeación desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES y CONPES Social, y por lo tanto es la entidad encargada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión. De las resoluciones proferidas (**ver cuadro 1.3.- Anexos**) en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se encuentran: lineamientos de acción para fortalecer la política del Estado, lucha contra la impunidad, prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, equidad de género y la prevención de riesgos, protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado.

iv. Directivas

La Directiva o directriz es definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como "*Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de algo*", jurídicamente hace parte del denominado acto administrativo, que es la forma en que se pronuncia el poder público, las directrices son una parte específica de ese mundo de temas, permitidos por la ley, en los cuales el sector público puede expresar, por lo tanto, existen muchas instrucciones dadas por las instituciones del Estado, en especial por parte del ejecutivo, en relación a los Derechos Humanos (**ver cuadro 1.4.- Anexos**).

Las directivas del ejecutivo están coordinadas al Gobierno de la época, de esta forma están ajustadas a los propósitos de cada cual, al presentarse los objetivos de cada presidencia electa a partir de la Constitución de 1991 se puede evidenciar un poco, al menos desde lo académico,

cuáles han sido las prioridades en cada período, planes que suponen una respuesta a las necesidades del país en el momentos.

Periodo	Presidente	Nombre del Plan de Gobierno
1990 - 1994	César Gaviria Trujillo	La revolución pacífica
1994 - 1998	Ernesto Samper Pizano	El salto social
1998 - 2002	Andrés Pastrana Arango	Cambio para construir la paz
2002 - 2006	Álvaro Uribe Vélez	Hacia un Estado comunitario
2006 - 2010		
2010 - 2014	Juan Manuel Santos Calderón	Prosperidad para todos
2014 - 2018		Todos por un nuevo país

2. Del Presupuesto Nacional, destinaciones y partidas

El capítulo posterior ha de constar sobre el desarrollo de algunos conceptos sobre modelos de financiamiento por los cuales se puede lograr el garantizar, implementar, promocionar y proteger los derechos humanos en Colombia, tal como se ha obligado la nación al nivel internacional y en el ordenamiento jurídico. Se observará la importancia de lograr recursos para ejecutar y consolidar esos objetivos, de manera concomitante a los fines del Estado. A continuación es importante observar la capacidad económica del país, además de las partidas presupuestales, el porcentaje de contratación o inversiones que ha sido destinado por la nación desde la Constitución de 1991, al ser la carta de navegación más completa y garantista de los años noventa, a nivel mundial, o así fue reconocida en su momento, considero que es un buen punto de referencia, junto a los informes presentados por diversas entidades, todo en relación a los derechos humanos.

A su vez, debe de tenerse en cuenta el periodo de conflicto en Colombia, lo que conlleva una directa afectación a puntos tales como: las prioridades sociales, los tributos, las políticas públicas, etc., pero también debe dejarse por sentado que muchas de las circunstancias que dieron fruto a las diversas guerras en el país han sido el pleno desconocimiento de los derechos de toda índole, las exclusiones, la supresión de lo diferente y el constante abuso de unos pocos frente a la mayoría, los cuales han sido constantemente mermados de todo bienestar posible, por lo menos ha sido así hasta épocas recientes. Lo anterior ha tenido como consecuencia

diversas generaciones con fuertes cicatrices, difíciles de sanar o que por lo menos implica un largo proceso de curación.

a. Producto Interno Bruto

Como punto de partida de este acápite, se debe establecer la definición de Producto Interno Bruto (PIB):

Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado. El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos (por ejemplo, el valor de un buey de carreta o equipo militar no existente en los Estados Unidos). Como resultado, estimaciones PPA para algunos países se basan en una canasta pequeña de bienes y servicios. Además, muchos países no participan formalmente en el proyecto PPA del Banco Mundial que calcula estas medidas, por lo que el resultado de las estimaciones del PIB de estos países puede carecer de precisión. Para muchos países en desarrollo, las estimaciones del PIB basados en PPA son múltiples del PIB al tipo de cambio oficial (PIB TCO). La diferencia entre los valores del PIB TCO y los valores del PIB PPA es mucho más pequeña para la mayoría de los países ricos industrializados. (Index Mundi).

Este concepto es relevante, por cuanto es una de las formas de medir la riqueza de una nación, a nivel mundial, lo que implica que ha mayores ingresos un Estado debería optar por mejorar el bienestar social e invertir en los ciudadanos, optimizando, creando o adaptando medidas que permitan un nivel cada vez más alto en todos los derechos. No es una medida perfecta, pero permite entrever las condiciones económicas de una nación; así las cosas es menester observar y analizar estadísticas de Colombia respecto de esa medición, ya se estableció la referencia temporal, es relevante mencionar que previamente a aquella época, el país siempre tuvo un ingreso mucho menor de lo que se presenta en la siguiente escala.

Fuente: Banco Mundial, 2014

Lo anterior indica que Colombia a partir de la apertura económica de los años noventa, además de instaurar un criterio del Estado de Bienestar (modelos que suelen ser contradictorios), ha presentado un crecimiento de su Producto Interno Bruto, a pesar de los constantes desequilibrios económicos mundiales y del interior, tal como sucedió con la crisis del UPAC. Lo que permite concluir que es una nación que ha crecido, en términos de riqueza, y que por lo tanto ello debería reflejarse en una reinversión equitativa y un aumento de la justicia social, corrigiendo, renovando o reparando todos aquellos vejámenes que ha dejado décadas de conflicto e inequidad, pero parecía que ello no se ha dado.

Es claro que en la actualidad han existido muchos debates respecto de las medidas económicas, en especial lo relacionado al mantenimiento fiscal y la "protección" del erario público, pero ello no es óbice a que siga existiendo toda una problemática social ante un aumento de la riqueza, entonces ¿dónde está el problema?, es la pregunta que siempre estará presente en nuestro medio y la cual tendrá siempre una gran cantidad de causas (podría decirse corrupción, falta de cultura, cero solidaridad o fraternidad, sociedad agotada psicológicamente, etc.), una parte del esfuerzo del presente documento es la redirección de los dineros públicos o privados teniendo siempre como horizonte los derechos humanos o fundamentales, para que esa riqueza realmente sea redistribuida de manera adecuada, sin perderse en manos de una burocracia que no es eficaz, ni eficiente y en la cual se desperdician muchos recursos.

b. Presupuesto Nacional o Público

Es claro que en esta parte del texto no podemos hacer una referencia explícita de algún presupuesto en especial, por lo que la mejor referencia que podemos tener al respecto es tener una visión macroeconómica del presupuesto y de sus diferentes partidas, así podremos ver cuál ha sido el nivel de asignaciones a diversas entidades, instituciones u otras para que de esta forma tratar de observar si en alguna medida se ha logrado garantizar, implementar, promocionar y/o proteger los derechos humanos.

El año de partida establecido como indicador del presupuesto será el del 2010 (**ver cuadro 2.- Anexos**), las razones para dar como punto inicial esta fecha son: por una parte, desde esta época es que puede encontrarse información ilustrada (ya que el resto se complementará con la información expuesta en las correspondientes normas de cada año) en el portal web del Ministerio de Hacienda; por otra parte, lo expuesto en los datos planteados, se evidencia que la inversión social, o en derechos humanos, es una política del Estado reciente y la cual ha tomado su tiempo en implementarse desde el tiempo que ha existido la constitución o los distintos instrumentos internacionales, ni que decir de los tiempos en que comenzó el conflicto armado interno.

El Estado colombiano ha avanzado significativamente en el respeto y garantía de los Derechos Humanos de los colombianos y colombianas, lo cual se refleja en el comportamiento de los indicadores durante el periodo 2003-2009. Por ejemplo, el número de homicidios se redujo en un 32,76% y el de secuestros extorsivos en un 89,96%; los actos de terrorismo disminuyeron en un 81%; las víctimas de masacres en un 70,83%; las acciones subversivas en un 64% y el número de personas desplazadas de 2008 a 2009 en un 43,35%. Desde el inicio de los procesos de la Ley de Justicia y Paz, se ha apoyado la búsqueda de la verdad en más de 44.000 hechos enunciados que relacionan a 61.012 víctimas, y ha conducido a la exhumación de 3.524 cadáveres en 2.901 fosas.

Una aproximación al universo de víctimas de la violencia lo constituye el número de solicitudes de reparación por vía administrativa que reglamenta el Decreto 1290 de 2008, el cual asciende a 331.604 víctimas, de las cuales el 87% corresponde a hombres y el restante 13% a mujeres. De acuerdo con el hecho victimizante, el 78,01% se relaciona con homicidio; el 10,06% con desaparición forzada; el 2,79% con lesiones que produjeron incapacidad; el 2,73% con secuestro; el 2,61% con lesiones que no produjeron discapacidad; el 2,54% con tortura; el 0,77% con reclutamiento de menores y el 0,49% con delitos contra la integridad sexual. Los índices de pobreza mantuvieron una tendencia decreciente; la población que recibió ingresos inferiores a la línea de

pobreza bajó del 53,7% en 2002 al 45,5% en 2009. En la salud se aumentó el número de afiliados al régimen subsidiado, se pasó del 46,6% en 2003 al 93,13% en 2009. De igual manera, en el caso de la cobertura bruta de educación básica y media, pasó del 90,6% al 105,6%. (Plan Nacional de desarrollo 2010 – 2014).

Por último, veremos que una de las consecuencias del conflicto armado interno fue el dejar una economía en colapso, además de un fuerte presupuesto destinado a la guerra.

Así mismo, en sus efectos agregados, estudios académicos disponibles han advertido que el conflicto armado le cuesta a la economía colombiana entre 0,5 y 8,32 puntos porcentuales de su tasa de crecimiento anual. En efecto, si la tasa de crecimiento anual de Colombia entre los años 2000 y 2009 estuvo alrededor de 3,8%, entonces el conflicto armado le pudo haber costado a Colombia más del 100% de su tasa de crecimiento anual promedio en este mismo período (Villa, Restrepo, & Moscoso, 2014). La cuantificación completa de estos efectos es difícil, porque una cosa son los costos del conflicto y otra cosa es el impacto de la paz sobre el crecimiento. Los costos del conflicto se refieren al esfuerzo financiero que significa mantener la capacidad operativa de las fuerzas militares para contrarrestar los embates del terrorismo y el accionar de actores armados ilegales y, se refieren también, al daño que el conflicto causa en términos de pérdidas del capital humano, físico y natural del país. Por lo tanto implican una medición “directa” de lo que el conflicto cuesta. Pero otra cosa es el impacto de la paz sobre el crecimiento, que tiene que ver más con los costos de oportunidad, representados, por ejemplo, en la pérdida de oportunidades de inversión fruto de la percepción de inseguridad y del deterioro de la confianza de los agentes económicos en el país. Por las dos vías, los efectos del conflicto sobre el crecimiento son considerables. (Bases del plan Nacional de desarrollo 2014 – 2018).

Del cuadro se pueden sacar conclusiones tales como: **a.** Ha existido un constante crecimiento del presupuesto, lo que se reflejará en los distintos indicadores de carácter económico, pero no de forma directamente proporcional a los derechos; **b.** La forma en que se mantiene la inversión, a duras penas para su funcionamiento, en las partidas presupuestales relacionadas a temas en derechos humanos o fundamentales; **c.** las limitadas opciones en entidades, organismos o instituciones que existen para poder realizar las inversiones o aportes; **d.** el mantenimiento o coste del aparato militar (lo que aparece en cada ley del presupuesto, más no en el cuadro); y **e.** Como muchas de las entidades reciben un ingreso superior de otros lados menos del propio Estado.

En fin, pueden sacarse un sinnúmero de conclusiones variadas, pero las que se anuncian son las que causan una fuerte impresión al documento.

c. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Este programa en su plataforma virtual contiene una importante base de datos de interés general en publicaciones, información judicial e informes de gestión, conlleva la virtud de aportar varios elementos relevantes, ha de presentarse diversas estadísticas que dan cuenta de los avances que se han tenido en derechos humanos. Uno de los informes al interior del sitio web es el *Balance de Resultados: Enfoque Nacional 2013*, elaborado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas - DSEPP, del Departamento Nacional de Planeación y publicado en el año 2014.

En los anexos, figura la evolución en forma de gráficas de los derechos o datos que se relacionan a continuación, cada uno varía en la muestra temporal, por lo que para un mejor análisis habrá que ir directamente al esquema al final del documento, en esta parte se expone de manera sintética cada elemento.

Laboral.- (ver figuras 1.1.-, 1.2.- y 1.3.-)

Este ítem tiene una concepción amplia, además puede resultar cambiante acorde a la sociedad, a la economía y al tiempo imperante.

El pensamiento de Durkheim supuso la culminación de un discurso que durante tres décadas había hecho del trabajo el centro de todas las actividades públicas. La legitimidad de las actuales sociedades de mercado ha dependido en buena medida de la asunción de este discurso. En efecto, las imágenes que del progreso, la igualdad, la libertad o la justicia social se han hecho estas sociedades no serían comprensibles desvinculadas del trabajo, actividad que de modo principal las vertebró a todas ellas. Visto desde otro punto de vista, la legitimidad del orden social de las modernas sociedades industriales puede verse más o menos erosionado en función de si los individuos perciben que sus posiciones sociales se corresponden más o menos con sus capacidades y méritos laborales. El mundo del trabajo se ha erigido, pues, en el seno de estas sociedades como un escenario privilegiado en el que los individuos aspiran a ver realizados todos los valores que la Modernidad había enunciado.

Ahora bien, si algo caracteriza en la actualidad a estas sociedades es la falta de trabajo y el incremento de la precariedad laboral. “Nos enfrentamos- había escrito Hannah

Arendt a mediados del siglo XX- con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo”. Si la actividad que estructura y cohesiona de forma legítima a las sociedades modernas se hace cada vez más insegura e inestable para un número cada vez mayor de sus miembros ¿no se erosionará aquel conjunto de representaciones que el pensamiento moderno había asociado a la esfera del trabajo, y, por tanto, la legitimidad del orden social que en ellas se apoyaba? ¿Encuentran en esta realidad sentido algunos de los nuevos discursos que en la actualidad están emergiendo en la esfera del trabajo? Estas preguntas, que cierran el presente artículo, pretenden sugerir nuevas respuestas que nos acerquen un poco más a la comprensión de las sociedades tardo-modernas. (Duran Vázquez, 2006)

Se denota lo variante del concepto; sin embargo, según lo presentado en cada gráfica, para la entidad correspondiente, en esta parte existen al menos tres datos relevantes para tener en cuenta al momento de elaborar el esquema: **1.** la tasa de desempleo nacional, **2.** la informalidad laboral y **3.** la tasa de desempleo jóvenes, esta última datada desde el 2002, los otros dos parten desde el 2009 y 2008 respectivamente, al hacer un cruce de información resulta que a partir de la primera fecha, en los tres casos, ha existido una disminución en el índice hasta el 2013, lo que implica una mejora en materia de empleo y en la formalidad del mismo, ello repercutiría en la mejora de las condiciones de vida digna de cada individuo al tener ingreso y la legalidad que se traduce en estabilidad y seguridad al disminuir la informalidad.

Vivienda.- (ver figuras 2.1.-, 2.2.-, 2.3.- y 2.4.-)

Este ítem es seleccionado por la entidad, como los otros puntos, pero son conceptos que son relevantes para los derechos humanos, en este caso es bueno traer a colación la definición de vivienda digna esbozada por la Corte Constitucional Colombiana.

El concepto de vivienda digna implica contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse en unas mínimas condiciones de dignidad y en el cual pueda desarrollar su proyecto de vida. El artículo 51 de la Constitución Política consagró el acceso a una vivienda digna como un derecho de todas las personas, y dispuso además, que el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas y fijar las condiciones necesarias para garantizar este derecho promoviendo planes de vivienda de interés social y demás estrategias necesarias para que el compromiso con la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales se materialice. (Corte Constitucional, 2013).

Una vez más, en esta parte la entidad ha de presentar cuatro esquemas que evidencian: **1.** Las unidades de vivienda licenciadas a nivel nacional y en algunos municipios (77 de 1.123), **2.**

Las metas y avances e iniciaciones de vivienda con y sin apoyo de Fonvivienda y Cajas de Compensación, **3 y 4**. El aumento de la construcción, avances y metas en materia de vivienda de interés social y las que no lo son, otro indicativo de los avances económicos (mínimos en comparación de la necesidad de los habitantes a nivel nacional de poseer o contar vivienda, teniendo en cuenta la cantidad de desplazados).

Pobreza.- (ver figuras 3.1.-, 3.2.-, 3.3.- y 3.4.-)

El término “pobreza” tiene distintos significados en las ciencias sociales. En un trabajo reciente, Paul Spicker (1999) identifica once posibles formas de interpretar esta palabra: **necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable**. Todas estas interpretaciones serían mutuamente excluyentes, aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables en toda situación.

Si bien la medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera de estas definiciones, la mayoría de los estudios económicos sobre pobreza han centrado su atención casi exclusivamente en las concernientes a **“necesidad”, “estándar de vida” e “insuficiencia de recursos”**. Para estas opciones, los indicadores de bienestar más aceptados han sido la **satisfacción de ciertas necesidades, el consumo de bienes o el ingreso disponible**. La elección de esas variables obedece a su pertinencia teórica respecto al concepto de bienestar utilizado, considerando además la limitada información disponible en las encuestas más comunes. (Feres; Mancero, 2001).

Este es otro punto que presenta múltiples concepciones, esta definición es adecuada por cuanto reconoce esa amplitud y pone de presente un esquema general, en este ítem la entidad expone la pobreza y pobreza extrema por ingresos, diferenciándola además por cabecera y resto, adicionalmente se expone el índice y variables de la pobreza multidimensional indicando las áreas nacionales, cabeceras y resto, como lo presentado hasta el momento todos demuestran una disminución a lo largo del tiempo.

Esos datos presentan una información que permite una importante conclusión, y es que sigue existiendo una notoria diferencia entre lo nacional y cabecera con el resto, lo que implica los niveles superiores de pobreza en una gran parte del territorio, ya que las cabeceras obedecen a unos pequeños sectores (en relación al área) del país, por lo tanto, al momento de diseñar las políticas o al momento de decidir las inversiones este es un elemento crucial a tomar en cuenta.

Calidad de Vida.- (ver figura 4.1.-)

El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

La calidad de vida es un vago y etéreo concepto, polivalente y multidisciplinario, cuyas acepciones principales se han efectuado desde diferentes disciplinas y saberes: médicas, filosóficas, económicas, Éticas, sociológicas, políticas y ambientales. La medicina la asocia con la salud sicosomática del organismo, la funcionalidad, la sintomatología o la ausencia de enfermedad; los filósofos, con la felicidad o una buena vida; los economistas, con la utilidad del ingreso o de los bienes y servicios; los sociólogos, con la inserción del individuo en la arena social; los políticos, como una meta que ha de alcanzarse para sus ciudadanos en el mediano o corto plazo; y los ambientalistas, con las condiciones ambientales en que vive, crece, se reproduce y muere un individuo.

En el campo Ético, desde la década de los sesenta el término calidad de vida adquirió una connotación semántica definida y en los noventa, la expresión se identificó en tres contextos y significados: descriptivo, evaluativo y prescriptivo. En el contexto descriptivo, cuando designa una determinada clase de objetos, los individualiza y los diferencia de los demás; en este sentido, la cualidad del ser humano es la razón, de modo que la calidad de vida se identifica con la racionalidad y es sinónimo de vida humana. (Cardona A.; Agudelo G., 2005).

Por lo que se muestra en la gráfica desde el año 2002 ha existido una tendencia a 0, lo que implicaría que al año 2013 ha habido una mayor perfecta igualdad, pero sigue estando por encima de la mitad, esto es en niveles de 0,539, evidenciando lo bastante desigual que se encuentra la sociedad colombiana.

Enfoque diferencial.- (ver figura 5.1.-)

Ante el amplio abanico de posibilidades que ofrece un tema como el enfoque diferencial, la gráfica hace mención del número de personas con discapacidad diferenciándolos por sexo y ciclo vital, lo que pone de presente la gran cantidad de personas las cuales deben de tenerse en cuenta al desarrollar las políticas públicas que deben ser integradoras de todas las personas que

presentan una condición distinta, ya que este concepto abarca los múltiples sujetos que no hacen parte de la "normalidad" y que deben ser considerarse en el ordenamiento jurídico.

Acnur ha indicado que el enfoque diferencial “busca visibilizar vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos específicos, y prioriza acciones de protección y restauración de los derechos vulnerados. Implica: identificar los vacíos y riesgos de protección de cada grupo y desarrollar herramientas para dar soluciones, promover la participación equitativa y planear y ejecutar medidas afirmativas basadas en caracterizaciones sistemáticas para la garantía del goce efectivo de los derechos de los diferentes grupos poblacionales” (Acnur, 2008, citado en Ministerio de la Protección Social, 2011: 27). (Observatorio de Construcción de Paz, 2012).

Seguridad.- (ver figuras 6.1.- y 6.2.-)

En lo que se concibe como *la seguridad humana*, es un tema que continúa siendo un concepto discutido y en el medio se piensa que debe adquirir relevancia en la disciplina de las Relaciones Internacionales y en el campo de los estudios sobre seguridad; por ahora se puede plantear otra noción a grandes rasgos para tener una idea general.

La seguridad nacional vela por la protección de los Estados; la seguridad humana vela por la protección de los individuos. Los Estados deberían ser los primeros proveedores de seguridad ante sus ciudadanos. No obstante, a menudo fallan en esta tarea. En algunos casos persiguen violentamente a aquellos ciudadanos que están llamados a defender. El paradigma de seguridad nacional, con su énfasis ante las amenazas externas, es de limitada relevancia en relación a la seguridad del individuo, particularmente respecto a las guerras civiles, que en este momento constituyen más del 90% de los conflictos armados.

El paradigma convencional de los estudios sobre seguridad no tiene la capacidad para tratar las amenazas que emanan del propio Estado. Por otra parte, allí donde el individuo es el objeto de referencia en materia de seguridad no se necesitan supuestos sobre el rol del Estado: podrá proteger a sus ciudadanos o podrá amenazarlos, según sea el caso.

Que el realismo sea una teoría sobre la competencia entre Estados ha distraído la atención de la comunidad dedicada a los estudios sobre asuntos de seguridad de la abrumadora mayoría de las guerras contemporáneas —que son las que tienen lugar dentro de los Estados-. Al convertir el Estado en la entidad que debe ser asegurada se privilegia la seguridad nacional o del régimen por encima de la de los ciudadanos.

Es entendible que el concepto de seguridad al interior de Colombia tenga unos rasgos más emparentados con el conflicto armado interno y es lo que demuestran esas gráficas, es la

continuidad de aquel, y que a pesar de no ser igual al de los años 80's y 90's, sigue siendo una realidad bastante influyente en las condiciones de seguridad y vulneración de derechos en el país.

Gobernabilidad.- (ver figuras 7.1.- y 7.2.-)

La gobernabilidad se refiere a dos conceptos la primera, surgida de los informes de Banco Mundial, la define como un estilo de gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. La segunda se define como un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas como fuentes primarias de construcción del orden social; es probable que sea derivada del campo de la economía de costos y transacciones. Por extensión, gobernabilidad es definida como cualquier forma de coordinación social (Colombo, 2003).

Lo que en los esquemas se evidencia es que los indicadores de gobernabilidad en años recientes (2012 a 2013) no habido un gran cambio, y sería ideal contar con las variaciones en un período prolongado, pero implicaría un mayor estudio e investigación que no vienen al caso, lo segundo expresa el recaudo tributario presentando como hay un alto índice en razón de las declaraciones de renta, retención e IVA.

Cooperación internacional.- (ver figura 8.1.-)

La cooperación internacional se refiere a la ayuda voluntaria de un donante de un país (Estado, gobierno local, ONG) a una población (beneficiaría) de otro. Esta población puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su estado, gobierno local o una ONG de la zona.

En la gráfica se presentan el monto y el porcentaje de participación en temas como víctimas, reconciliación y derechos humanos, gobernabilidad, medio ambiente, igualdad de oportunidades, crecimiento sostenible y competitividad y gestión del riesgo, lo que podría verse como un mayor aporte a los derechos humanos por parte de la cooperación internacional en estos temas, que del mismo Estado, salvo por el primer elemento de víctimas.

En resumen, a pesar de existir avances recientes en todo lo expuesto hasta el momento sigue existiendo un largo camino por recorrer, lo que implica la necesidad de seguir realizando esfuerzos en todos los niveles para lograr niveles de desarrollo y bienestar aceptables, lo que da paso a la pertinencia y actualidad de esta investigación.

En materia de gestión por parte de esta entidad, se presentan informes que cubren los años 2008 a 2011 en las cuales no se presentan datos estadísticos, pero si hace mención de los planes, metas, visión y logros obtenidos hasta el momento lo que en términos de seguimiento y vigilancia pueden resultar de suma relevancia.

Por último, se muestra un cuadro traído por el Programa Presidencial que contiene información de la evolución de las violaciones a los derechos a la vida e integridad, que a pesar de haber ciertas condiciones de mejorar un poco a lo largo del tiempo, no puede dejarse pasar por alto que sigue siendo una realidad, es importante presentar esta gráfica por cuanto de cierta forma demuestra la importancia que ha tenido la inversión en seguridad, que se traduce en la contratación frente a la adquisición de bienes y capacitación a miembros de la fuerza pública. Pero es claro que este no puede ser un presupuesto sostenible y constante, sólo es notable en los casos de guerra pero aun así es un gasto que repercute en la inversión social por lo que en algún punto desgasta socialmente, pero es una erogación que no puede ser tomada en cuenta en etapas posteriores de un proceso de paz.

CIFRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LA VIDA E INTEGRIDAD
2002 - Julio 2012

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Julio - 2012
Homicidios	28.775	23.523	20.210	18.111	17.479	17.198	16.140	15.817	15.459	14.712	8.058
Casos de masacres	115	94	46	48	37	26	37	29	39	37	14
Víctimas de masacres	680	504	263	252	193	128	169	147	183	171	66
Homicidios de alcaldes y ex-alcaldes	12	11	15	6	5	1	3	4	4	8	1
Homicidios de concejales	77	75	18	26	23	14	13	10	8	9	2
Homicidios de docentes sindicalizados	97	54	48	26	35	18	20	15	21	17	1
Homicidios sindicalistas de otros sectores	99	47	41	14	25	8	18	13	16	12	9
Homicidios de periodistas	10	6	3	2	3	2	0	1	1	1	0
Secuestro	2.882	2.121	1.440	800	687	521	437	213	282	305	196
Personas expulsadas (fecha de salida)**	483.530	283.690	257.327	296.380	316.338	349.254	302.892	181.836	138.150	159.337	2850***
Personas expulsadas (fecha de recepción)**	481.184	283.334	262.262	299.554	323.394	358.290	323.399	201.644	153.035	173.998	3284***
Eventos por Map y Muse	974	1.458	2.024	1.795	2.154	2.031	1.420	2.639	2.530	2.874	1.815
Civiles heridos por Map y Muse	258	227	219	330	368	226	285	247	179	169	98
Civiles muertos por Map y Muse	58	62	66	92	74	60	70	57	7	33	25
Militares heridos por Map y Muse	234	352	469	561	625	537	401	376	308	283	138
Militares muertos por Map y Muse	84	115	136	199	168	156	102	67	49	65	22

*Las cifras que procesa el Observatorio están en constante proceso de verificación

**Fuentes: Policía Nacional, Federación Colombiana de Municipios, Federación Nacional de Concejales, Ministerio del Trabajo, Fundación para la Libertad de Prensa, Dirección operativa para la defensa de la libertad personal - Ministerio de Defensa, SIPOD - Acción Social y Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas Antipersonal; Ministerio de Defensa Nacional

** La Fecha de expulsión hace referencia al momento en que la víctima sale expulsada de su lugar de origen, mientras que, la fecha de recepción hace referencia al momento en que llega la víctima en calidad de desplazada a otro municipio, a otro departamento, de la vereda a la cabecera urbana, etc.

*** De otro lado, la información que se presenta para el año 2012 corresponde sólo a las víctimas de desplazamiento forzado registradas en el Sistema de Información de Población Desplazada - Sipod - el cual recoge los eventos de desplazamiento derivados de la aplicación de la Ley 387 de 1997, no incluye información que sobre éstos mismos eventos se registran en el Registro Único de Víctimas establecido por Ley 1448 de 2011, por lo que hasta el momento no se cuenta con el universo total de las víctimas de dicho fenómeno. En ese sentido, no se realiza una comparación de las cifras, dado que, para 2012 no se cuenta con las cifras consolidadas de ambos sistemas.

Fuente: Portal, Programa Presidencial de Derechos Humanos, 2014

d. Inversión

El portal de transparencia económica, herramienta virtual en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es una base de datos que nos permite visualizar los comportamientos del Estado en materia de gastos e ingresos del mismo, además de otra información que incluye un gran aporte en materia de inversión, ya que nos permite hacer una visualización temporal, y en distintas categorías, de las gestiones del Gobierno durante alguna época determinada. Aunque es una herramienta práctica, conlleva varias lagunas en la información y no abarca muchos puntos que pueden ser relevantes en derechos humanos; sin embargo, contribuye en gran medida a las estadísticas que se quieren presentar, bastante actuales, para construir una imagen panorámica de los elementos que vistos de manera individual presentan sólo una parte de lo que en su totalidad puede concluirse.

En primer lugar, se ha de presentar una barra sobre el comportamiento histórico de los años 2000 a 2014 en cuestiones de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, se quisiera haber tomado una muestra desde 1991, pero muchos de los datos que se presentan a continuación sólo se encuentran a partir de 2010 o 2011 en adelante, el cuadro histórico es de las pocas estadísticas en la que hay una muestra que parte del 2000.

Tipo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
FUNCIONAMIENTO	93.1	93.7	93	92.9	92.6	94.1	93.9	95.2	96	93.1	91.1	97.3	96.7	96.3	27.6
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	95.1	98.6	98.3	98.8	94.6	97.8	96.5	96.7	91.4	88.4	80.8	95.8	99.5	84.9	40.9
INVERSION	73.2	65.9	66.2	66.7	65.1	67.2	65.1	79.5	86.7	85.5	79.7	86.5	86.4	88.9	24.9

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014

En segundo lugar, se busca mostrar un panorama en los diferentes de campos de inversión por parte del Estado en relación a derechos humanos o fundamentales, para ello en los anexos se han de presentar los cuadros estadísticos de cómo se invirtió durante un corto periodo de

tiempo, información que es arrojada por el portal virtual, siendo uno de los pocos instrumentos que nos presenta datos de manera adecuada y que son relevantes a la presente investigación.

Es relevante mencionar que los datos se constituyen temporalmente desde el 2011 y 2012, en algunos casos se permite abarcar a partir del 2013, precisamente por la ausencia de información en los años previos, se ha tratado de presentar una tendencia en un largo periodo, sin embargo, los esquemas evidencian asignaciones, aunque también existen vacíos de información, casi nulas previas a estos años, lo más pertinente al caso es presentar gráficas que contengan algún dato relevante.

Las gráficas se componen de dos vectores, el de porcentaje y el temporal, exponiendo dos informaciones a comparar, los avances en gestión y los avances en productos; el primero se refiere a la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades) lo que incluye: **1.** La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que tenga lugar; **2.** La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones); y **3.** La rendición de cuentas ante el abanico de agentes interesados por los efectos que se espera que el proceso desencadene (Fantova, 2005). Y los productos, entendido desde la mercadotecnia como una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo (Kotler, 2001).

Aunque la página no expresa en detalle que implica cada ítem, he de tomar cada uno acorde a la relación que puede tener el elemento con algún derecho humano/fundamental, o con las instituciones que exponen las cuales materializan los mismos en determinada forma a través de sus acciones o decisiones: **a.** Acción y apoyo social (**ver figuras 9.1.-, 9.2.-, 9.3.-**); **b.** Educación (**ver figuras 10.1.-, 10.2.-, 10.3.-**); **c.** Rama judicial (**ver figuras 11.1.-, 11.2.-, 11.3.-**); **d.** Fiscalía (**ver figuras 12.1.-, 12.2.-, 12.3.-**); **e.** Justicia y derecho (**ver figuras 13.1.-, 13.2.-**); **f.** Trabajo (**ver figuras 14.1., 14.2., 14.3.-**); **g.** Ambiente y desarrollo sostenible (**ver figuras 15.1.-, 15.2.-, 15.3.-**); **h.** Inclusión social y reconciliación (**ver figuras 16.1., 16.2. -, 16.3.-**); **i.** Deporte y recreación (**ver figuras 17.1.-, 17.2.-, 17.3.-**); **j.** Vivienda, ciudad y territorio (**ver figuras 18.1.-, 18.2.-**); **k.** Cultura (**ver figuras 19.1.-, 19.2.-, 19.3.-**); **l.** Salud y protección social (**ver figuras 20.1.-, 20.2.-, 20.3.-**).

En cada uno de los elementos expuesto se demuestra una notoria inversión que va en aumento a partir del año 2011 o 2012, al ser reciente aún no pueden verse los efectos de la misma ya que su impacto, pertinencia o efectividad se verá en tiempos posteriores, pero lo que ahora esto nos permite es llevar cabo desde ahora un seguimiento como política pública permanente, esto es, que todo lo que se ha dado hasta ahora no vaya a ser suprimido, modificado en detrimento de los derechos, teniendo en cuenta todas aquellas circunstancias que son propias de un país que cambia sus intereses y programas acorde a quienes se encuentran en el poder para ajustarse a la conveniencia del momento.

3. La obligación de adecuación del derecho interno a la protección la promoción, implementación y aplicación de los Derechos Humanos

A lo largo de toda esa compleja y extensa normatividad, la cual se verá o deberá verse reflejada en la jurisdicción y en la doctrina, ya sea para soportarla o criticarla, se denota el imperativo u obligación frente a la necesidad de garantizar, implementar, proteger y promover los derechos humanos a nivel regional o territorial para lograr los fines u objetivos establecidos por las naciones para lograr niveles de desarrollo que permitan garantizar derechos fundamentales y esenciales reconocidos por los países de occidente, como lo son: la dignidad, la justicia, la igualdad, la vida, la libertad, entre tantos otros, además en la modernidad se piensa con mayor fuerza la colectividad como uno de los derechos humanos fundamentales a tener en cuenta y que es igual de importante, en muchos casos mayor, a aquellas prerrogativas de corte individual.

Esto es importante de observar, ya que al momento de proteger los derechos e intereses de grupos, comunidades, colectividades, sociedades, pueblos, etc., se está garantizando a la vez el poder salvaguardar a los individuos, es decir, ya en países como Colombia y en varios países de América y Europa se encuentra que sus ordenamientos priman los intereses colectivos sobre aquellos de cada persona; sin embargo, a la luz de la modernidad, no es posible pasar por encima de las minorías o del sujeto particular, diferente, en razón de garantizar la satisfacción de la necesidad de un grupo o colectividad.

De lo anterior es de que trata ese gran sistema jurídico internacional, es lo que piensan todas aquellas personas naturales o jurídicas al momento de promover, implementar, proteger o

garantizar este marco jurídico, que ninguna persona o colectivo lleguen a quedar desprotegidos o se les pueda vulnerar sus derechos fundamentales en algún momento o lugar, y en el caso de que así fuere, en el instante en que alguna persona, grupo o Estado lleve a cabo actos de violencia o vulneración hacia aquellos, tengan la certeza de que existe un sistema u ordenamiento jurídico multinivel que da la posibilidad de ejecutar todos los actos o reclamaciones ha lugar, que permiten generar la expectativa de una reparación integral por determinadas acciones o por las omisiones de protección y cuidado, teniendo de antemano el deber de haberlo hecho ya que se cuenta con las herramientas y la estructura necesaria para ello.

a. Obligación de adecuación del derecho interno

Teniendo en cuenta todo lo establecido en el marco jurídico internacional, cada país debe realizar todas las actuaciones necesarias para adecuar los derechos humanos al interior de cada ordenamiento. Si se mira normativa y jurisprudencialmente, Colombia ha llevado a cabo una producción jurídica muy amplia e importante en materia de derechos humanos, claro que si se entra en detalle, gran parte de la parte legislación en la materia es la ratificación e interiorización de tratados internacionales, poca producción legal propia, los cuales negoció y de los cuales quiso ser parte teniendo claro, o eso podría entenderse, las violaciones que acaecían o suceden en nuestro territorio, independientemente de todo lo que pueda conllevar querer ser parte del ámbito internacional y firmar todo un bloque normativo en relación a los derechos humanos, se denotó una intensión positiva por parte de la nación en encaminar el ordenamiento jurídico en esa dirección.

La verdad es que a través de la jurisprudencia es como ha sido la forma idónea de lograr una aplicación directa de toda esa normatividad, ya que como se vio previamente a pesar de existir de forma reciente alguna política pública en derechos humanos, se ha dado esa implementación de manera errónea, es una implementación fruto de las respuestas a todas aquellas responsabilidades adquiridas consecuencia de las múltiples vejaciones a los individuos y a los colectivos a lo largo del tiempo en el territorio nacional, más que de una iniciativa propia del Estado.

Es de considerar que teniendo en cuenta que la cruzada por los derechos humanos o fundamentales en una concepción más o menos moderna dio sus inicios en la época que data antes de las guerras mundiales, e institucionalizada en la postguerra, Colombia sólo ha sabido adoptar toda esa experiencia mundial muchas décadas después.

Ese ordenamiento jurídico, que en la lógica y filosofía de la modernidad es algo que no debería ser necesario, esto es el imponer los derechos humanos a través de leyes. Es una cuestión que hace mucho tendría que ser parte de una seria política pública en cada país de occidente, y más aún, haber sido interiorizado por cada persona, es un asunto de imperativo categórico.

Una vez observada la implementación normativa de los derechos humanos, y en cierta forma se dejó por sentado cómo ha sido la aplicación de los mismos a través de la responsabilidad adquirida por los distintos sujetos por medio de los diversos fallos proferidos por las Altas Cortes Nacionales (especialmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado) e internacionales. Es importante resalta que de todo ese marco jurídico se encuentra el concepto ya mencionado y denominado como *bloque de constitucionalidad*, que consiste en una forma de interiorizar los derechos humanos a través de la implementación y aplicación por los jueces y magistrados de la rama judicial del poder público de los tratados en derechos humanos e interpretar aquellos no ratificados de manera *pro personae*; sin embargo, debe dejarse claro que la promoción y aplicación consiste en distintas etapas, la judicial es una forma posterior a las violaciones acaecidas, pero el ideal al cual debe apuntarse es que debe ampliarse esos conceptos de prevención y de la concomitancia sobre las vejaciones, para que así sí pueda hablarse de una verdadera integración en la implementación, promoción, protección, garantía y aplicación de los derechos humanos.

En Colombia es perfectamente viable hablar de los tres tiempos en que se dan las violaciones a los derechos fundamentales, ya después de tantas décadas en guerra y de acciones por parte de algunas empresas, personas, grupos políticos, bandas criminales y algunas entidades del Estado, se está dando ese proceso de responsabilidad posterior y que todavía debe perfeccionarse y materializarse aún más. Como es un país que aún se encuentra en guerra y bajo las mismas condiciones culturales y de conflicto se deben crear rutas de acción para las violaciones que se están dando en la actualidad, y en algún punto, si se da la posibilidad de controlar los hechos a futuro, podrían evitarse ulteriores responsabilidades, y lograr dejar de

lado al poder judicial a lo estrictamente necesario, eso es una labor que dependerá de las acciones del poder ejecutivo.

Bajo nuestras manos tenemos todo lo que tenga que ver con la prevención, lo que dirigido de forma adecuada permitiría evitar en su totalidad, o por lo menos en gran parte, violaciones o vejaciones a los derechos humanos logrando así un necesario cambio cultural, ya sea creando políticas que permitan disminuir riesgos y/o estableciendo pautas mínimas de conducta, estimulando la necesidad de cambiar patrones de comportamiento en todos los niveles de una sociedad la cual adolece de la falta esos elementos culturales que dificultan la aceptación de lo que es diferente, o por lo menos de todo aquello que no contiene una "normalidad" y que al no cumplir esas expectativas de la sociedad imperante resultan ser agredidos, por lo que esa diferencia debe de ser protegida mediante la garantía de algunos unos mínimos.

b. Necesidad de una política pública en Derechos Humanos

Para poder hablar de prevención, debemos entender su significado, así las cosas el diccionario de la real academia de la lengua española nos expresa que es la *preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo*, en otras palabras propias al caso, es toda decisión planificada que se toma de manera anticipada a unos hechos u acciones que se realizarán, este concepto va a ser integrado a lo que doctrinalmente se considera una política pública, además del significado escindido en sus partes.

Una vez más, desde la posición del diccionario de la real academia de la lengua española, se entiende por política, de las diferentes concepciones que puede adoptar esta palabra, la que es de mayor interés es que aquella que la entiende como aquel *arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado*; ahora, lo que se concibe como noción de pública(o), en igual forma existen distintas acepciones, pero la indicada sería aquella que expresa lo *perteneciente o relativo a todo el pueblo*. Haciendo una síntesis de lo anterior, podríamos decir entonces que, es la manera en que se lleva un asunto o se emplean medios para lograr el fin que en este caso es todo lo que pertenece al pueblo o lo relativo a este, -entendiéndose en su sentido más amplio como la sociedad, comunidad, grupo o colectivo-.

Lo anterior es relevante, ya que nos permite esbozar un concepto literal pero que puede variar bastante en su interpretación y aplicación, por lo que es pertinente poner de presente algunas posiciones doctrinales que permitan hacer más funcional el tema, es de aclarar que no se busca hacer una exposición de las distintas políticas públicas que hubo en Colombia a lo largo del tiempo, digamos partiendo desde la constitución de 1991, ya que ello supondría la construcción de una investigación documental alternativa cuyos resultados pueden cruzarse con este escrito, no son correspondientes a sus objetivos, por cuanto lo que es necesario entender es la política pública como concepto y marco que permita adecuar las acciones, en el caso de ser aplicado lo que aquí se ha desarrollado.

Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. (Velásquez, 2009).

El anterior concepto resalta por ser bastante operativo o práctico, ya que no considera todo lo que puede contener una política pública sino que entiende lo que debe ser tenido en cuenta y de cómo debe llevarse a cabo la aplicación del proceso y de quienes han de participar del mismo, es una buena línea a tener en cuenta al momento de hacer eficaz la implementación de la idea que deseamos sea tenida en cuenta, empero hace falta un poco más, algo que permita complementar la definición literal y operativa. De esta forma, la concepción consiguiente conlleva la necesidad de un análisis previo y de tener en cuenta el impacto o consecuencias, lo que completaría el ideal que ha de tener en cuenta.

Si bien en la literatura especializada existe una gran cantidad de definiciones de política pública, el autor se arriesga a dar la siguiente definición personal: “una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2006: 27). En resumen, el análisis de las políticas públicas consiste en examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el Estado para transformar total o parcialmente a la sociedad, así como sus resultados y efectos. Es preciso señalar que la política pública no existe “naturalmente” en la realidad, sino que se trata de una construcción social y de una construcción de un objeto de investigación (Roth, 2006: 28). (Gómez Lee, 2008).

Como se puede apreciar, las definiciones tienen algunos elementos en común, está claro que lo doctrinal perfila en mejor forma lo que se quiere presentar como una política pública, pero indistintamente de ello pueden rescatarse varias cuestiones; en primer lugar, debe tenerse claridad en los tiempos y verbos dominantes en el concepto ya que siempre hemos de hablar en decisiones, acciones, acuerdos, entre otros que se toman en el presente para *solucionar* o *prevenir* una situación que puede conllevar a problemas en el futuro, y alongando aún más la enunciación de una circunstancia actual la cual se quiere resolver posteriormente.

Ya es un hecho notorio desde varias décadas en Colombia la deficiencia en materia de derechos humanos que sólo se ha venido siendo presentado como algo novedoso e importante en los últimos años, en su trasfondo ha sido una larga lucha la cual ha pasado por toda una época de grandes vejaciones, de pérdida de personas valiosas y de una innegable perseverancia para dar a conocer ante el público todo lo que ha sucedido en la historia, tratando obtener algo de verdad, justicia y, en la medida de lo posible, la mayor reparación posible. Esos pilares bastante nuevos en la mentalidad del Colombiano, constituyen el centro de todas las acciones de las víctimas y de los defensores de derechos humanos, pero que en la práctica termina siendo un ejercicio de extrema complejidad, gran parte de la culpa es por todos los que intervienen en todas las esferas del país: las instituciones del Estado, los grupos alzados en armas y a veces la misma sociedad civil, lo que suele convertir a las acciones inmediatas en algo idílico, que las respuestas se diluyan a lo largo del tiempo, ello redundará en que el inmenso colectivo que ha sido constantemente afectado observen con gran tristeza como las reparaciones prometidas se vean como algo fútil.

Es por eso que desde hace tiempo, como hasta ahora lo ha estado mirando el gobierno, ha debido pensarse en la necesidad de dar inicio a políticas públicas serías que permitan contener todo aquel pasado sumamente delicado y complejo, con un futuro en construcción en el cual debe tenerse siempre como objetivo las llamadas *garantías de no repetición*, las cuales se han dado algunos intentos de materialización por imposición jurisprudencial, cuestiones como la capacitación a los miembros de las fuerzas armadas en derechos humanos para que no sigan siendo parte de las violaciones que se presentaron en las décadas (¿o siglos?) pasadas. Sin embargo, esos esfuerzos cuando son juntados a leyes con una gran bondad contenida en sus objetivos pero altamente ineficaces, son elementos insuficientes ante la gravedad de la

situación en Colombia, por todo eso es que es necesaria una gran política pública que pueda ser aplicada en materia de derechos humanos.

c. Necesidad de asegurar recursos o sobre el financiamiento

Dejando de lado el ideal y la necesidad de establecer los derechos humanos como un punto elemental y básico en una sociedad, del cual no sea necesario de educar constantemente en la materia sino que sea una característica inherente de toda persona, siendo conscientes que su ejercicio permanente permite llevar una mejor convivencia con todos los seres y consigo mismo como parte de un mundo. Es evidente que en el plano social actual se habla de un planeta globalizado y que en su mayoría existe una tendencia económica capitalista, por lo que todo proyecto tiene la connotación o característica de ser oneroso, salvo contadas situaciones en las que sólo es necesario el capital humano. Ya sean los sujetos privados o los públicos, para dar cumplimiento a sus objetivos se requiere de un capital con el cual se pueda poner en funcionamiento todo el andamiaje necesario para la consecución de las metas impuestas.

Los fines tienen una disposición que es variante de acuerdo al tipo sujeto del que estemos hablando, pero si podemos generalizar en algún sentido, se puede decir que lo concerniente a los individuos, o el particular, tienen como tal el querer la obtención de un capital con el fin de satisfacer sus intereses personales (que son una infinidad de opciones, de las cuales una de esas puede ser la obtención de más dinero) o los de una sociedad privada constituida con ese objeto. Seguidamente, ya lo público tiende a tener, en teoría, una finalidad más social, fraterna y algo controladora, en la que ese patrimonio es únicamente un medio para alcanzar con el cumplimiento de los logros acordados por toda la sociedad en la constitución; por lo tanto, como su objetivo no es satisfacer individualidades o ampliar su patrimonio, tanto sus actividades como la obtención de un capital para funcionar varía a la de los sujetos, lo anterior es lo que conocemos como gobierno y hacienda pública.

La forma de obtener esos recursos es una parte de este escrito, pero más que los métodos de obtención de una fuente segura y constante, es la importancia de contar con los medios para soportar una política que dure todos los años, décadas o siglos posibles. Y más importante aún, es el humanismo al cual debe estar sujeto ese programa, ya que sin una construcción humana, todo esfuerzo se perderá, y se convierte en otra burocracia de las que tantas se han plasmado a

lo largo del tiempo, que no han logrado nada sino reflejar toda una información que, aunque importante, no plantea soluciones o no es pragmática.

Ya partiendo de la importancia de contar con unos recursos para dar inicio y continuidad a toda actividad que se quiera llevar a cabo, además de depositar la confianza en sujetos que puedan materializar en la mejor forma lo que esta propuesto en esos planes o políticas públicas, es bueno reforzar desde otras visiones el porqué es necesario esa fuente económica y de su uso en materia de derechos humanos, lastimosamente la idoneidad de los sujetos que hacen parte del proyecto no es propio de este escrito, pero a muy grandes rasgos se puede sentar que una persona la cual tenga claro la actividad pro homine o personae que está llevando a cabo, además del gusto, capacidad, aptitud, talento para las labores en derechos humanos, el poder congeniar con otros seres humanos entendiendo sus problemas, pueden ser criterios con los cuales se daría un buen inicio a toda esta gran actividad.

i. Importancia desde el sistema interamericano

En diciembre de 2011, la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, presentó un informe llamado *Maximizando la justicia, minimizando la demora: acelerando los procedimientos de la comisión interamericana de derechos humanos*, en el que se reconoce que durante un gran tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha enfrentado a una gran afluencia de peticiones, complejas, y que no ha sido acompañada por presupuesto proporcional con el fin de desempeñar sus diversas responsabilidades, por lo que *en reconocimiento del impacto positivo de la Comisión, el presente informe, elaborado por la Clínica, procura analizar este problema y formula recomendaciones que fortalezcan a la Comisión.*

Es así como, reconociendo que no se habla de forma directa de una política pública, internacional, si demuestra la necesidad de obtención de recursos en derechos humanos para llevar a cabo sus actividades, a continuación se presenta las conclusiones a las que llegó el informe al respecto:

La Clínica reconoce que los recursos financieros de la Comisión juegan un papel crucial en sus funciones promocionales y jurisdiccionales. La Clínica reconoce que la

Comisión carece de fondos y del personal suficiente y que la OEA debe aumentar su financiamiento.

La Clínica considera que la OEA debe ser responsable de la asignación de más recursos para ayudar a la Comisión a combatir al congestionamiento y demoras crecientes. Al proporcionarle los fondos necesarios se evitan conflictos de interés con los Estados donantes, tanto los miembros como los observadores, y es, al mismo tiempo, más sustentable en el largo plazo. (La Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, 2011).

Otra conclusión, en la que reconoce las diversas formas en la que pueden obtener recursos, además de los límites que implica esa recolección, en la que no afecte los fines impuestos, ya que por su naturaleza tiene una relación directa con los intereses privados que se plantearon previamente.

La Clínica reconoce que la Comisión ha puesto en marcha campañas para la recaudación de fondos que incluyen metas definidas destinadas a funciones específicas. Tales medidas muestran un movimiento en la dirección correcta y probablemente permitirán que la Comisión obtenga un mayor financiamiento. El enfoque de la Comisión para la recaudación de fondos debe continuar centrándose en los objetivos publicados de la Comisión, minimizar los conflictos de interés, y tener en cuenta la sustentabilidad a largo plazo de estas contribuciones financieras. Más aun, la Clínica felicita a la Comisión por sus planes de dar seguimiento y analizar a sus operaciones de financiamiento a fin de garantizar un financiamiento adecuado y comunicar sus obligaciones a los donantes. (La Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, 2011).

Reconoce además, que unos recursos aleatorios no son la mejor alternativa, ya que eso afecta el trabajo y los planes que se plantean al inicio.

A pesar de que un aumento en su financiamiento y recursos humanos le permitirían a la Comisión hacer frente de forma oportuna a más peticiones y casos, esta no es la solución a todos los desafíos a los que se enfrenta la Comisión. La Comisión puede llevar a cabo diversos cambios que no requieren de fondos adicionales, pero que le permitirían reasignar los recursos con los que ya cuenta de una manera más eficiente, y, en consecuencia, aumentar la efectividad general de la organización. (La Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, 2011).

Es relevante expresar que las estrategias y la integralidad (en todo sentido, de sujetos y acciones) es esencial en el funcionamiento de todo proyecto o política, en especial si hablamos de planes a largo plazo.

La Clínica hace un llamado a la Comisión para que, además de solicitar más recursos específicos, siga aplicando una estrategia integral destinada a hacer frente al congestionamiento actual que no dependa exclusivamente de un aumento en su personal para poder mantener las prácticas actuales. En cambio, la Comisión puede reorganizar y utilizar todas las habilidades de su personal actual. La Clínica considera que tal estrategia es esencial para el manejo del creciente congestionamiento que presenta la Comisión. Más aun, al aplicar esta estrategia, la Clínica sugiere que la Comisión continúe, y construya sobre, los objetivos específicos descritos en el Plan Estratégico. A pesar de que la Clínica se ve alentada por los objetivos del Plan Estratégico, la Comisión tiene un largo camino por recorrer para realizar estas metas auto impuestas. (La Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, 2011).

Por todo lo anterior, se entiende como al nivel del sistema interamericano y por lo tanto a nivel regional o nacional, es importante tener en cuenta el tema de los recursos con las características expuestas con el propósito de dar cumplimiento a lo acordado o establecido en todos los escenarios nacionales e internacionales.

ii. De la ausencia de recursos

El Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, en un documento del año 2009, denominado *La corrupción y los derechos humanos. Estableciendo el vínculo*, presenta todo un escrito alrededor de los actos de corrupción y su relación con los derechos humanos, de esta forma, llega a un punto que es de suma importancia para nosotros que es el tema de la malversación de fondos, que a larga se traduce en la ausencia de los mismos en los distintos focos a los cuales va dirigido y del porque es importante mantener transparente todo un proceso sobre los distintos proyectos, logrando que los fondos tengan el uso adecuado cumpliendo los objetivos propuestos.

Hay que poner de presente la dificultad de encontrar doctrina sobre la necesidad de contar con unos recursos con los fines de *garantizar, implementar, promocionar o proteger* todo lo relacionado a los derechos humanos, pero razono que esto se debe en que todo promotor o defensor considera que es un punto inherente a todo discurso o documento que se ocasiona al respecto, esto es, que siempre se encuentra implícito el contar con unas partidas

presupuestarias ante cualquiera de los verbos rectores mencionados, por lo que todo los esfuerzos están dirigidos a la definición y limitación de quienes son objeto de la disertación.

Es así como este documento nos ilustra sobre la práctica de la corrupción en lo que respecta a la malversación de fondos y su impacto en los derechos humanos, y así lo expresa:

El alegato de que la corrupción viola los derechos humanos se basa, por lo general, en el razonamiento de que el dinero perdido a causa de la corrupción pudo haberse utilizado para la compra de medicinas, equipos o el suministro de agua, mejor educación, etc. Por lo tanto, es útil analizar la malversación de fondos con mayor detalle, especialmente la malversación de los fondos destinados a los programas sociales. Esta práctica corrupta puede afectar a un amplio espectro de derechos humanos. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

Nos encontramos ante los tres pilares que soportan a los derechos humanos, la vida, la libertad y la dignidad, todas enlazadas no pueden considerarse el que sólo se garantice una de ellas, ya que todas conforman al ser humano en su integridad desde el punto de vista occidental; una vez establecido eso, todos los demás derechos parten de algún pilar, es así como el caso de la salud, de cierta manera anda de la mano con todas las bases, convirtiéndose en un derecho esencial en el desarrollo de todo proyecto de vida.

Existen diversas formas de garantizar este derecho, estableciendo un marco, la salud como prestación de servicio puede ser dado por particulares o por el Estado, de diferentes maneras (gratuita u onerosa), pero para ello, sin duda alguna es elemental la necesidad de recursos, en diferentes espacios y modos, para que sea prestado en la mejor forma posible o por lo menos lograr llevarse a cabo, ante lo cual, cualquier afectación a los fondos repercute en gran medida.

Como se ha señalado, el derecho a la salud (Artículo 12, PIDESC) se entiende casi siempre en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la salud pública y de los centros, los bienes, los servicios de los programas de salud. Las instalaciones de salud, así como los bienes y servicios, tienen que estar disponibles, en cantidades suficientes, para que sean accesibles a todos sin discriminación; deben ser adecuados, científica y médicamente, y de buena calidad. La mayor parte de los casos de corrupción afectan a varios de estos elementos. Esto es especialmente cierto en el caso de la malversación de los fondos públicos realizado por los funcionarios públicos. Parte del presupuesto de salud puede "desaparecer" antes de efectuarse el pago desde el Ministerio de Finanzas al Ministerio de Salud. Más dinero aún puede ser sustraído en el proceso de canalizar los fondos desde el gobierno nacional a las administraciones

de provincias y, eventualmente, por los directores o administradores de los hospitales locales. A medida que estos recursos merman por causa de la malversación y por el fraude en las adquisiciones, menos dinero existe para pagar los salarios, financiar las operaciones y mantener los edificios y los equipos. Le siguen a lo anterior las consecuencias para el personal, la infraestructura y la calidad en el cuidado de la salud. De esta forma, los actos corruptos y en especial la malversación, casi simultáneamente, interfieren en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del derecho a la salud. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

Ahora, un punto esencial para la vida, que afecta a la salud y por lo tanto aquel vínculo expresado previamente, la dignidad de las personas es lo relacionado a la alimentación, una de las crisis que toma forma en la peor manera de vejación, ya que ante la ausencia de nutrientes la muerte llega lentamente y con mucho sufrimiento al ser del que es objeto, ello lo podemos evidenciar en un continente como el Africano en muchos de sus países o comunidades al interior del mismo; sin embargo, se entiende que es un lugar con muchas dificultades lo que presenta una acciones y ayuda de mayor talante, distinto a un país con recursos y riquezas naturales como lo es Colombia, lo que se convierte en casi una ofensa el que existan personas que sufran de mala alimentación, pero ello también encuentra explicación a la vez que reproche.

La malversación también puede afectar la seguridad de la alimentación y de las necesidades nutricionales reconocidas en el derecho a la alimentación (Artículo 11(2), PIDESC). Cuando un funcionario público se apropia indebidamente de parte de un plan de subsidios u otros fondos designados para un programa de alimentación y, a su vez, realiza compras de bajo costo y adquiere alimentos por debajo del estándar, el programa puede fracasar al no satisfacer las necesidades nutricionales y puede incluso proveer alimentos que no son idóneos para el consumo. Ambos efectos violan el derecho a la alimentación de los beneficiarios. Los alimentos deben ser también accesibles a todos, debe ser posible adquirirlos y estar, físicamente accesibles. En particular, deben estar al alcance de los grupos socialmente vulnerables (tales como las personas que son muy pobres o carecen de tierras) cuyas necesidades exigen que se les brinde una atención especial. La corrupción socava la accesibilidad cuando afecta programas de alimentación, que, en la práctica, son muy vulnerables a la corrupción porque tienen grandes presupuestos y un número elevado de beneficiarios (casi siempre anónimos), lo que crea muchas oportunidades y alicientes para el abuso. Cuando un funcionario desfalca los fondos que han sido creados para comprar y distribuir alimentos, o roba o vende la comida, el resultado es que las personas se ven privadas de aquellos alimentos que necesitan y a los que tienen derecho. Con tal comportamiento se viola, claramente, el derecho a una alimentación adecuada. La malversación de los fondos destinados a la educación elimina recursos que son necesarios para dotar de equipos a las instituciones educacionales y pagar a los maestros. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

Pero ello no sólo crea una afectación en materia alimentaria, la corrupción tiende a tener impactos devastadores en materia educativa, ya que es uno de los sectores por el cual no tiende a existir mucha protección, a pesar de estar conscientes de su necesidad e importancia, pero ante la corrupción es de los primeros derechos restringidos.

El derecho a la educación (Artículos 13 y 14, PIDESC) provee que las instituciones y los programas educacionales deben estar disponibles en cantidades suficientes. La disponibilidad significa también que las instituciones y los programas educacionales deben estar dotados del equipo que sea necesario para su funcionamiento, incluyendo maestros capacitados y pagados, materiales para la enseñanza, edificios, instalaciones sanitarias, agua potable, etc. Las prácticas corruptas, diferentes y variadas, en el sector de la educación dañan la disponibilidad y la calidad de la misma. Se afectan los alumnos cuando se roban los fondos porque los equipos educacionales serán de inferior calidad y los maestros carecerán de recursos. El no pago de los salarios a los maestros conducirá a otras prácticas corruptas tales como el ausentismo frecuente o la aceptación de sobornos. De esta forma, la malversación crea una nueva corrupción. En estas condiciones, el Estado no puede cumplir con su obligación de asegurar el derecho a la educación y así se viola ese derecho. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

El documento presenta un punto de gran importancia en lo que concierne a las prisiones (un tema bastante álgido en Colombia y en muchos países latinoamericanos), nos pone en evidencia que aunque la criminalidad despierta grandes sentimientos encontrados, como personas que son, son objeto de los derechos humanos. Además debe tenerse en cuenta que no siempre las prisiones son un tema de delincuencia, sino que en materia de derecho internacional humanitario nos encontramos con los prisioneros de guerra, los cuales en cada bando participe de la guerra esperan sean tratados de la mejor forma posible.

La malversación de los fondos para financiar los servicios a las prisiones también provoca serias violaciones de derechos. Esta práctica tiene el mismo efecto que en la educación: reduce la calidad de las instalaciones y la calidad de los servicios que provee. Todas las personas que son privadas de su libertad y enviadas a prisiones, hospitales, campos de detención, instituciones correccionales y otras, tienen el derecho a ser tratados con humanidad y dignidad (Artículo 10, PIDCP). Esto implica, por ejemplo, que en las cárceles, cada prisionero debiera tener un espacio físico personal mínimo y el acceso a un contenido mínimo de aire cúbico, a instalaciones sanitarias adecuadas, a ropa que no sea degradante o humillante, a una cama personal y a una alimentación con el adecuado valor nutricional (Reglas Mínimas para el Trato de

Prisioneros, Naciones Unidas).¹ La malversación de los fondos asignados a las prisiones puede ocurrir en muchos niveles, desde el nivel ministerial hasta los custodios. La corrupción de este tipo ciertamente afectará el tratamiento a los prisioneros, posiblemente hasta el grado de darles un tratamiento inhumano, violando así los tratados de derechos humanos (por ejemplo, Artículo 10, PIDCP). Esto puede suceder si las faltas de fondos traen como consecuencia escasez en la comida de la prisión, o la imposibilidad de proveer cobijas o camas, por ejemplo. En tal caso, la corrupción se puede asociar con la violación del derecho de una persona privada de su libertad a ser tratada en forma humana y digna. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

La Justicia, que en Colombia también representa una institución que despierta bondades y enemistades, el ambiente en general se refleja como un derecho que no es oportuno y muchas veces se enfrasca en discusiones sin fin, teniendo una única víctima de todas las discusiones que genera al respecto y es la sociedad en todas sus formas. Ante un país con las condiciones como las colombianas, la necesidad de un aparato de justicia eficaz, legítimo, virtuoso y con fortaleza requiere recursos en muchos sentidos de capacitación, actualización y contacto más humano con quienes solicitan la dilucidación de sus controversias.

La malversación o apropiación indebida de bienes pueden también afectar el derecho a un juicio justo y a una reparación efectiva (Artículos 14 y 2 (3), PIDCP). La malversación priva al sistema de justicia de los recursos necesarios y esto afectará su calidad y su efectividad. La propia falta de recursos puede significar que se contrate a un número insuficiente de empleados judiciales quienes, a su vez, crearán una acumulación de casos y causarán lentitud en los procedimientos, infringiendo el derecho a ser juzgado sin dilación indebida como lo estipula el Artículo 14(3(c) del PIDCP y, por consiguiente, violando el derecho a un juicio justo y a una reparación eficaz. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

Y por lo tanto se llega a una gran conclusión frente a la hacienda pública, la corrupción y los derechos humanos.

Cuando el dinero público se pierde, el Estado no cumple con una de las principales obligaciones de los derechos humanos: utilizar el máximo de los recursos de que disponga para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (Artículo 2(1) del PIDCP).

¹ Adoptado por el Primer Congreso sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento a los Ofensores de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobado por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C (XXIV) del 13 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977.

En la mayoría de los casos, el desfaldo imposibilita al Estado cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y, probablemente, resulte en violaciones a estos derechos.

El efecto negativo acumulativo de la corrupción se hace evidente, en especial, en los programas sociales a gran escala. Considerando que por lo general muchos funcionarios administran este tipo de programas, si la corrupción es endémica y extendida, los niveles en la malversación de fondos pueden ser muy altos. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

Es aquí donde se presenta la necesidad de repensar la forma de financiar los derechos humanos, ante la posible ausencia de recursos por parte del Estado, de lo público, además de las malversaciones a las que hay lugar, se llega así a la necesidad de mirar a otro lado en busca de otras opciones, en este caso, hacía los particulares que ante todo nos debemos la solidaridad como seres parte de una comunidad o colectivo, entendiendo que la convivencia individual no es posible y que por lo tanto cada ser debe tener una protección para lograr la supervivencia del todo.

El informe nos pone de presente unas situaciones de alto riesgo, las cuales muchas de ellas acaecen en Colombia, por lo que es un llamado de atención a todo proceso-proyecto que se inicie en nuestro territorio, ya que la corrupción está en muchos niveles, culpa de una generación que propicio la obtención de grandes recursos, con grandes riesgos, dejando de lado todo tipo de institucionalidad, convirtiendo a un Estado debilitado por una historia de guerras, intolerancia, desconocimiento del otro, con una mayoría de población cerrada ante el progreso, en un objeto que satisface los intereses de pocos quienes compran y negocian con los derechos todos los sujetos, aunque es una gran parte, me parece indicado poner de presente estas conclusiones, muy reales por cierto, a las que se llegan, en lo que considero de gran importancia siempre tenerlas a la mano.

En ciertas situaciones, es muy probable que la corrupción se asocie a las violaciones más generalizadas de los derechos humanos. Así es, por ejemplo, en países ricos en recursos naturales que carecen de instituciones democráticas fuertes; durante los períodos de reconstrucción después de un conflicto, y cuando se implementan grandes proyectos de infraestructura sin que se tengan en cuenta los derechos humanos.

Si en países ricos en recursos naturales no existen instituciones democráticas sólidamente establecidas y no existen mecanismos de rendición de cuentas ante los ciudadanos, es muy probable que exista un terreno propicio para la corrupción. Los

ingresos provenientes de los recursos no renovables (petróleo, gas, minerales y metales) y de los renovables (bosques, pesca, tierras) son cuantiosos y concentrados. Los funcionarios públicos corruptos tienen oportunidades para robar grandes cantidades significativas de dinero y pueden hacerlo de un solo golpe o a través de una sola fuente de ingresos. En estas condiciones, no es sorprendente que, con frecuencia, la corrupción se vuelva institucional y apoye a los grandes sistemas de patronazgos. Esto, a su vez, socava aún más la responsabilidad y la rendición de cuentas políticas y puede crear rápidamente las condiciones en las cuales la violencia política institucionalizada (financiada por la corrupción y por los ingresos públicos) genera graves violaciones de los derechos. En este sentido, el establecimiento de instituciones democráticas sólidas, que incluyan controles sobre el poder ejecutivo, pueden considerarse como particularmente importantes en aquellos países que son ricos en recursos naturales y que dependen económicamente de ellos. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

En Colombia, sumado a lo anterior, confluye un conflicto armado, el cual se encuentra per se corrupto, ya que se dejaron las antiguas ideologías de lucha, tratando de mantener los negocios ilícitos, al momento de este escrito, el país se encuentra en diálogos, los cuales ninguna de las partes cree, pero se hace el sacrificio de muchas cuestiones para intentar (una vez más, ya que diálogos de paz ha habido en buena cantidad) la tan llamada "paz", un derecho cuya definición es bastante ambigua y del cual nunca se ha gozado, sólo se entiende de ello a través de las naciones que no se encuentran en guerra (intento de definición actual).

Situaciones similares surgen en los países que están dejando atrás un conflicto porque, casi por definición, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se encuentran en proceso de reconstrucción y apenas pueden cumplir con sus responsabilidades. Recursos provenientes de la ayuda internacional e inversiones extranjeras por lo general invaden esos países cuando aún sus sistemas de gobernanza están débiles creando un vasto campo de oportunidades para la corrupción y otras formas del crimen. Además, existe el riesgo particular de que los grupos de personas que se han sido mayormente afectadas por el conflicto sean expropiadas o explotadas. Aquéllos que están en peligro son las comunidades muy pobres cuyos títulos de propiedad de las tierras no están bien documentados; los que han sido desplazados por la guerra, que al retornar a sus tierras y propiedades pudieran hallarlas expropiadas. En general, las personas asociadas a la parte derrotada en un conflicto; los grupos que, históricamente, han sufrido por causa de la discriminación (por ejemplo, por su raza o religión); las mujeres y los niños, ahora viudas y huérfanos, que carecen de ingresos y hogares, etcétera, se encuentran especialmente expuestos a abusos. Una amplia gama de derechos pueden ser violados en esas condiciones y, con frecuencia, la corrupción es el factor que penetra en tales circunstancias. (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

Por último, la infraestructura, negocio lícito por el cual se logran las mayores inversiones o flujos de dinero, que en general el Estado es quien propicia los grandes proyectos, los privados también tienen varios planes de inversión y construcción, pero tiene precisamente esa connotación que limita y excluye, que son de unos particulares; sin embargo, ello no es óbice para no poder dar aquella connotación de solidaridad ya expresada.

Si existe corrupción, esta puede llevar a una asignación de trabajos innecesarios (con fondos del dinero público); la utilización de materiales de calidad inferior (con el dinero público y se incluyen costos adicionales de mantenimiento; algunas veces se pone en riesgo la salud o la vida); la exposición al peligro por merma de la seguridad laboral (se violan las leyes del trabajo y, a veces, se amenaza la salud y la vida); la exacerbación del impacto ecológico de los proyectos (donde resultan perjudicados los intereses de las comunidades locales). También existe un riesgo de que los programas de compensación por tierras adquiridas y de los programas para mitigar el daño no se realicen de manera apropiada y se prive a las comunidades locales de la reparación en violación de sus derechos. Se da también lugar a la cooptación, de las autoridades que los deben monitorear y de los críticos (comunidades afectadas, parlamentarios, los medios de comunicación). (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009).

En conclusión, hay varios puntos a tener en cuenta, muchas veces se considera que los recursos están dirigidos a la inversión en bienes y servicios, que aunque son de real importancia, no pueden ser limitados a una esencia tan básica consumista, es claro que satisfacer necesidades de primera mano es el paso inicial ante la construcción de una sociedad humanista, pero en el plano de la gestión debe atenderse todas las situaciones, personas, bienes, etc., para lograr la mayor efectividad, equidad, eficiencia posible.

Además, la idea de todo este trabajo es lograr que a través de todo gran proyecto, plan, iniciativa, no se deje de lado la óptica de los derechos humanos en los aportes que se pueden tener no sólo desde lo económico (teniendo en cuenta que es el mayor objetivo del documento), sino de toda forma de materializar un poco más sobre la *garantía, implementación, promoción y protección* de los derechos humanos.

d. Formas de financiamiento

El financiamiento, acorde al diccionario de la real academia española consiste en la "*acción y efecto de financiar*", lo que a su vez nos conlleva a definir el financiar como "*aportar*"

el dinero necesario para una empresa o sufragar los gastos de una actividad, de una obra, etc.", llevándonos todo esto a entender la empresa no desde el punto de vista mercantil, sino desde su significado como esa *"acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo"*, todo esta serie de precisiones nos permite hacer un micro marco conceptual para los efectos de este escrito, donde en su integralidad nos lleva a entender que para llevar una acción o tarea de una gran dificultad como es la *garantía, implementación, promoción y protección* de los derechos humanos, debe existir un aporte en dinero o el poder sufragar unos determinados gastos, independiente de la labor humana u obra de personas que ponen de su parte para lograr cometidos a veces extraordinarios (creo que en su mayoría se logran estos objetivos exorbitantes en derechos humanos), tal como se ha venido exponiendo en este capítulo.

Bien lo ha expresado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el documento *"Financiamiento para el desarrollo: América Latina desde una perspectiva comparada"*, el financiamiento se centró en muchos sectores de la economía, pero como se ha venido planteando, poco en el recurso humano de una nación.

El acceso al financiamiento es un aspecto fundamental del proceso de desarrollo en las economías emergentes. Aunque en la actualidad este punto de vista puede parecer obvio, no siempre se aceptó tan ampliamente. La tendencia en la economía del desarrollo durante la mayor parte de la posguerra fue centrarse en el sector "real" de la economía, es decir, la industrialización, la transferencia de tecnología y el intercambio internacional de mercancías, dejándose de lado al sector financiero. En la medida en que el financiamiento integró el conjunto de temas prioritarios, la atención se centró en el financiamiento internacional: la inversión extranjera directa, la asistencia bilateral y multilateral y los préstamos de bancos comerciales internacionales. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2006).

De forma que en ésta época los objetivos del financiamiento deben variar poco, o por lo menos complementarse para lograr una relación equilibrada entre sujetos y mercado o administración de bienes, recursos y servicios.

Pero como siempre ha sido un problema el tema de la rentabilidad o el lograr utilidades, es difícil lograr aquel financiamiento y más de la parte privada si no fueran las donaciones -de las que hablaremos más adelante-, ya que en el caso de los recursos humanos se ven reflejados en otro tipo de beneficios como es lograr un estado de bienestar.

Por lo tanto, es menester acudir a las diferentes modalidades que puedan existir, a veces teniendo que establecer imposiciones necesarias para el mejoramiento social, comunitario, de un pueblo y en ese sentido individual, todo parte del principio de solidaridad (o fraternidad) que debiera ser el cuarto pilar de los derechos humanos, como lo fue en la revolución francesa, ya que el hecho de ser humanos nos comporta el relacionarnos con nuestros semejantes queramos o no, entonces si es una necesidad u obligación por el hecho de ser humanos, porque no hacerla lo más amena posible.

De esta forma, traigo un primer abanico de posibilidades, que con posteriores apoyos o escritos puedan complementarse, ajustarse, adicionarse, etc.; las dos primeras serán aportes traídos de la voluntad de las personas naturales o de las entidades e instituciones públicas o privadas, las donaciones y asignaciones. La última será entonces el eje por el cual se centra el documento, lo relacionado a la contratación pública y que nos permitirá hacer múltiples enlaces.

i. Donaciones

Esta primera forma de financiar el proyecto propuesto en materia de derechos humanos, o cualquier otro, es la donación, esta modalidad tiene su más primigenia connotación jurídica en el código civil, que tiene toda una formación histórica dada desde los tiempos greco-romanos, además contiene la manera en que debe entenderse o de cómo ha de llevarse a cabo. Para tal fin, iremos a la definición traída por la normativa civil y será adecuada en mejor forma por la doctrina dándole el sentido más ajustado al caso.

El artículo 1443 del código civil define así la donación entre vivos: *"La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta"*. De esto, la doctrina trae un par de aclaraciones al respecto.

"Las principales críticas que se han hecho a esta definición pueden sintetizarse así:

1.1.1 Primera crítica:

La donación no es un acto sino un contrato, porque requiere que existan dos partes: el donante y el donatario. Y éste último debe aceptar la donación, pues si está aceptación no se produce; la sola intención de donar por parte del donante, es solamente una oferta.

1.1.2 Segunda crítica:

La otra crítica que se hace a la definición transcrita es la que señala que, a diferencia de lo que expresa la definición, la donación no es un modo de transmitir el dominio, sino un contrato sujeto a las teorías del título y el modo. El título es el contrato y el modo, la tradición o entrega. Esto quiere decir que la donación que se haga por virtud del contrato requiere de la tradición (entrega) del bien donado.

De ahí, que para la donación de inmuebles la ley exija escritura pública (título) e inscripción (modo) según lo señala el art. 1457 del Código Civil.

La doctrina define la donación como "un contrato en que una de las partes se obliga a dar gratuitamente una cosa a la otra parte, sin que ésta se obligue a ninguna contraprestación".

En general se contemplan las donaciones como actos gratuitos o liberalidades.

Se puede entender la liberalidad como una figura que surge de la moral, mediante la cual una persona distribuye generosamente sus bienes a cambio de nada, vale decir, sin esperar contraprestación por ello." (Linares Vesga, 2008).

Lo anterior, a pesar de no tener una relación directa al tema de los derechos humanos, permite plantear algunas discusiones jurídicas respecto del tema, así sea que las críticas estén dirigidas a las características, o naturaleza jurídica, de la donación, el primer punto estableciendo que la donación no es tan unilateral, ya que es menester la aceptación; en segundo lugar, se expresa que el perfeccionamiento del negocio en sí mismo no transmite el dominio, sino que es compuesto, siendo necesario el título además de la entrega, o tradición, como forma de transferencia del dominio.

A contrario sensu, el mismo código civil establece los casos en que considera que no se constituye una donación, estos son: El artículo 1452. *"No hay donación en el comodato de un objeto cualquiera, aunque su uso o goce acostumbre darse en arriendo. Tampoco en el mutuo sin interés"*. Artículo 1453. *"Los servicios personales gratuitos no constituyen donación, aunque sean de aquellos que ordinariamente se pagan"*. Por su parte el artículo 1454 nos dice que no hay donación en fianza, prenda o hipoteca. Aunque añade que *"Pero hace donación el*

que remite una deuda y el que paga a sabiendas lo que en realidad no debe". Precisarse la doctrina en este punto.

La donación y la remisión no son figuras iguales, pues la donación implica en primer lugar ánimo de donar y en segundo lugar ésta -la donación- no está precedida de una deuda anterior que se perdona. Debe recordarse que de conformidad con el artículo 1711 CC, la remisión de la deuda es la renuncia a cobrar que realiza el acreedor en favor del deudor. Es el perdón de la deuda, lo cual desde luego extingue la obligación. (Linares Vesga, 2008).

Ya una vez dilucidado que se considera como donación, en materia jurídica, y que no, es dable exponer que este contrato puede darse entre vivos y por causa de muerte, dejando la advertencia que como se establece en el ordenamiento, lo dado en el primer caso tiene la característica de ser irrevocable, diferente a lo que acaece en los términos del decujus². En igual forma, una última distinción de nuestro interés, es que la donación puede presentarse de manera consensual o solemne, haciendo la diferencia el hecho de que la solemnidad está dada por ciertos actos especiales objeto de la donación, que requieren de alguna formalidad otorgada por la ley³.

Aunque nos encontramos en materia de derechos humanos, se habla desde el punto de vista civil, por ser un tema ya zanjado por esta área, ya que los usos que puedan darse varían acorde a los bienes, sujetos y objeto que tenga relación con la misma; es difícil hallar alguna literatura especializada en el tema, las razones que pueda dar son algo subjetivas, considero que será porque en sí misma, la donación nace en su mayoría como un acto desinteresado el cual no es necesario entrar a regular de manera especial, salvo que los bienes que la componen sean de un llamativo especial para el Estado, por lo que normalmente este entra a regular la materia es en las cuestiones tributarias.

La legislación tributaria colombiana, ofrece ciertos incentivos a los contribuyentes que realicen donaciones a determinados beneficiarios. Los beneficios, básicamente consisten en permitir deducir de su renta el monto donado, siempre que se cumplan algunos requisitos, y además sometidos a ciertos límites. Es interesante exponer lo que trae el Estatuto Tributario al respecto,

² Artículos 1194 y siguientes del código civil colombiano.

³ a) Cuando versa sobre bienes raíces; b) cuando la donación está sujeta a plazo o condición; c) cuando existen donaciones con causa onerosa; y d) cuando se hacen a título universal.

ya sea para observar si hay deducciones o partes para quienes apoyen lo relacionado a los derechos humanos, ya sea sólo como aporte académico o este de por medio poder difundir mayores conocimientos.

En el artículo 125 se establece la deducción donaciones, en su numeral segundo puede encontrarse una relación o vestigios referidos a los derechos humanos, el resto de la normativa hace mención de los requisitos de los beneficios, de las condiciones para sea reconocida la deducción y de aquellas que son por donación, además de sus modalidades.

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, **la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general.** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Lo anterior nos permite hacernos un panorama respecto de las donaciones en Colombia, afortunadamente encontramos que el apoyo a los derechos humanos encuentra un soporte desde lo tributario, lo que permite un mayor interés en realizar aportes al respecto; sin embargo, ello no implica que no exista una desidia en apoyar o estimular los derechos humanos por parte de los particulares mediante otros beneficios y no sólo a través de las donaciones.

ii. Asignaciones Presupuestales

Para expresar las distintas posibilidades que puede darse sobre este tipo de financiamiento, es necesario, como en todas las demás formas, entender su significado, naturaleza, límites o campos de aplicación, en fin, saber todo lo relevante al respecto, que sea de utilidad al caso. Como siempre, es bueno conocer la definición en cada una de sus partes para después ahondar en algunas concepciones teóricas al respecto.

De esta forma, tenemos que por asignaciones, el diccionario de la real academia de la lengua española lo entiende como *"Acción y efecto de asignar"*, lo que a su vez el asignar se entiende como *"Señalar lo que corresponde a alguien o algo"*; ahora, presupuesto se define como el *"Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y rentas de una corporación"* o la *"Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida*

cotidiana...", esto nos permite conceptualizar de manera general que esa una cantidad de dinero o un cómputo anticipado de un coste o gasto que se le ha de asignar a alguien o algo, lo que nos genera unas dudas básicas, tales como, ¿quién asigna?, ¿a quién se le asigna?, ¿cómo se le asigna?, ¿por qué se le asigna?, y ¿de dónde surge esa fuente de lo que se asigna?, sin querer hacer distinción alguna de los sujetos.

Por lo menos diremos que para los efectos propios del caso, estableceremos que el ente que ha de llevar a cabo las asignaciones será el Estado, y ampliando un poco a esos sujetos que pueden aportar o asignar (teniendo en cuenta las intenciones de este documento) estarán los particulares; de esta forma, se tendrán como objeto de esas asignaciones presupuestales aquellas personas naturales o jurídicas que tendrán un papel relevante en *garantizar, implementar, promocionar o proteger* en lo relacionado a los derechos humanos. Por otro lado, la forma de obtener esos recursos es un tema que no es propio de nosotros o por lo menos implicaría ampliar el texto en cuestiones que no son del caso o se podría decir que ya se ha escrito del tema, así las cosas, ha de decirse de manera muy general que en materia estatal se establece como principio que sus entradas presupuestales son fruto de la tributación obtenida de los sujetos privados, a su vez estas personas obtienen sus ingresos del trabajo, en los términos de occidente. El por qué se asigna obedecerá a las necesidades e intereses de quienes asignan estas partidas, para ello es mejor valerse de lo expuesto por la doctrina o de quienes han tenido la experiencia en el campo.

En un plan del Banco Interamericano de Desarrollo, año 2006, se exponen varios conceptos relevantes e interesantes frente a los sistemas de planificación estratégica e innovaciones presupuestarias, en donde se plantea en uno de sus puntos una visión histórica de cómo se ha dado estas figuras en América Latina.

Al inicio de la década actual comienza a aceptarse en forma explícita que el crecimiento económico por sí sólo no alcanza para asegurar que se derrame bienestar en toda la población. Se revaloriza nuevamente el papel del sector público en relación a diseñar e implementar políticas públicas que promuevan la incorporación de los sectores sociales a los beneficios del crecimiento económico aunque sin sustituir el rol central del sector privado como eje dinámico del crecimiento económico.

Este nuevo rol del Estado lleva a revalorizar la herramienta de la planificación pero en un enfoque diferente al de los 60, porque incorpora la preocupación fiscal a nivel macroeconómico, los instrumentos del NPM (gestión por productos o gestión por

resultados) e insiste en la visión centrada en el servicio al ciudadano. (Tavares-Berretta, 2006).

Una revisión del documento permite aclarar varias cuestiones relativas a la forma de planificación en América Latina, que explicarían la situación actual en las falencias y toma de decisiones, ya que como se expresó previamente, la ejecución de políticas de gran envergadura e importancia dadas en una época determinada crean impactos en generaciones posteriores.

Además el texto nos da cuenta de quienes son los actores en la toma de decisiones públicas, ellos juegan el papel determinante en la estructura del presupuesto, adicionalmente plantea que es una estructura común en los países latinoamericanos, ello puede ser un tema interesante, por cuanto las naciones de América del Sur evidencian un notorio atraso frente a las llamadas naciones desarrolladas.

Fuente: Sistemas de Planificación Estratégica e Innovaciones Presupuestarias. Tavares-Berretta, 2006

Entonces estos actores del sector público juegan el papel fundamental de decidir los destinos de tesoro público, en igual forma sucede con los sujetos del sector privado que tienen la posibilidad de decidir las asignaciones acorde a sus ingresos.

Del principio de equidad, justicia y solidaridad, se espera que quienes obtienen grandes lucros por sus actividades, deben de tener una mayor responsabilidad social y de apoyo a sus prójimos

(aunque ello en sí mismo puede sonar algo desigual e inequitativo para aquellos que tienden a obtener grandes ganancias, pero se les olvida que su riqueza es obtenida a costas del conglomerado social), es por esa razón que un mínimo aporte que debe tener un particular o es aportar algo a la sociedad, ya que es una relación simbiótica, por lo que la mejor forma de colaborar es apoyar las causas de los derechos humanos en general, ya que ello es el mínimo que puede contarse para nuestra existencia como sociedad, la adecuada convivencia con otros.

Aunque se nos remarque que la planeación y el presupuesto esa es una obligación del sector público, ello no es óbice ni excusa para que no sea extensivo a todos los sectores en todas sus clases y calidades, de esta forma todos los actores de la sociedad tienen la obligación y el deber de hacerse partícipe en la estructuración e ideales de una sociedad que busca el desarrollo y bienestar incorporando los derechos fundamentales como base y guía.

iii. Contratación Pública

Una figura jurídica que en la actualidad ha tomado una relevancia e importancia por los fines que cumple, el objeto que la compone, la forma en que se desarrolla, las partes que la componen, los montos o sumas de dinero que operan y por repercutir de manera tajante en la sociedad, ya que es la forma en la cual se ejecuta o materializa por excelencia el Estado. Es importante delimitar y expresar los alcances de este acto jurídico, en especial por ser el eje en el cual ha de moverse la propuesta y los objetivos de este escrito, además de ser una figura que es bastante controversial a veces confusa en su aplicación o en la práctica, por lo que se hace esencial entenderla en su plenitud.

En un principio, el contrato es un concepto que se aplica a dos o más sujetos privados, data de épocas greco-romanas, y es la forma primigenia de las obligaciones de carácter consensual, en la que se estipula el llevar a cabo un objeto en contraprestación de algo. Antes de entrar a la figura del derecho público, es adecuado exponer el concepto desde la parte privada, de esta forma, su concepto prístino en Colombia está contenido en el Código Civil; sin embargo, se plasmará lo establecido en el Código de Comercio por ser un concepto más contentivo con la concepción actual de contrato y además contiene lo expresado en el primero, de esta forma el artículo 864 trae la siguiente definición.

El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta.

(...)

Por otro lado, tenemos la definición de contrato estatal, traída por la Ley 80 de 1993, la cual es la primera normativa posterior a la Constitución de 1991 que regula en su totalidad el régimen de la contratación pública, de ahí en adelante las modificaciones, actualizaciones o complementos posteriores a lo allí contenido, giran en torno a lo estipulado en ese régimen. Dice así en su artículo 32.

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación.

(...)

Son conceptos con muchos elementos en común, su marcada diferencia radica en la especificidad de los sujetos que son parte, ya que siempre uno de ellos debe ser el Estado quien decide la forma o método de seleccionar a la contraparte estableciendo las reglas de juego, ello lo hace mediante las modalidades de selección (licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa), siempre en función de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Todo ello además, tiene como base los principios rectores de la contratación (transparencia, economía, responsabilidad, etc.).

Se puede observar que conceptualmente hay bastante claridad, pero como se expresó el problema consiste en su práctica, ya que la aplicación de estos criterios es muy amplia por lo que en ocasiones varios objetivos o fines caben dentro de un mismo paquete o existen problemas en su procedimiento (que es la mayor parte de los problemas). Verbigracia: en materia procedimental, se evidencian problemas con la existencia de una tendencia al uso de

los mecanismos de contratación de carácter excepcional, como son las declaratorias de urgencia manifiesta (tendría que entrarse a establecer que es una urgencia en ese momento, que puede ser un concepto algo ambiguo, pero en principio es algo de lo que se predica de una gran gravedad que debe resolverse en poco tiempo, o como lo expresa la *RAE: inmediata obligación de cumplir una ley o un precepto*) o la contratación directa, desvirtuando así la participación abierta y la igualdad de oportunidades que deben caracterizar los actos administrativos de este tipo, que se materializan a través de licitaciones y concursos públicos abiertos; en cuestiones del objeto material del contrato, se pueden cruzan derechos e intereses tales como le prelación medio ambiente y progreso, o derechos laborales o individuales y progreso, prerrogativas a sujetos con especial protección a la igualdad formal lo que conlleva a la exclusión de personas por prelación, etc., todo ello implica hacer estudios de fondo e integrales desde sus inicios o proyecciones, analizando todas las figuras jurídicas o estatales que fundamentan todo el andamiaje de un Estado.

¿Por qué es importante esta figura?; primero, porque dentro de los fines de la contratación pública está el cumplir con los fines estatales, ello implica a su vez que, en los objetivos del Estado se encuentran las obligaciones adquiridas por la Nación internacionalmente e internamente con los derechos humanos como se vio en la primera parte del texto; en segundo lugar, como podrá verse posteriormente, estadísticamente hablando, además teniendo en cuenta las partidas presupuestarias, toda esa estructura jurídica es la forma en que el Estado mantiene su sistema y operatividad, por lo que es desde este punto (además del presupuesto general de la nación) donde se empieza a comprometer los fines y obligaciones del Estado, además de hacer partícipe a los particulares en la garantía, implementación, promoción y protección de los derechos humanos. Lo anterior parte de una correlación y cooperación en dos niveles, desde la exigencia del Estado a sí mismo de su compromiso para con la sociedad -desde la planeación del presupuesto y sus asignaciones-, como de los particulares hacia la sociedad y al Estado -en las modalidades de selección enunciadas en la ley 80 de 1993 y posteriores-.

DERECHOS HUMANOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

Hay que tener en cuenta que toda la construcción previa a este tema, es la base por la cual se quiere dar a entender que existe todo un orden jurídico interno, así como internacional, además de realzar que se cuenta con unos recursos con los cuales se puede, y se debe, dar promoción, implementar, proteger, garantizar, aplicar e invertir en derechos humanos. Se presentó todo el soporte económico público por el cual se evidenció la posibilidad de financiar toda esa normativa, logrando un elemento adicional, el cual no sólo ha de quedarse en el plano del deber, sino que es una verdadera realidad, es posible lograr su aplicación con la debida gestión y la adecuada voluntad política, esa que se ha tratado de instaurar en tiempos recientes.

Hasta aquí tenemos toda una base de datos, e información que nos proporciona una investigación generosa y que nos permite hacer muchas inferencias, además de llegar a descubrimientos y conclusiones importantes, una de gran importancia es la evidente quietud del Estado por más de dos décadas en dar aplicación a toda obligación y fines estatales, si quiera el plantearse una política eventual y duradera que sea instaurada de manera paulatina teniendo en cuenta nuestra realidad de conflicto. Adicionalmente nos permite observar que nunca se ha tratado de vincular a los particulares en la construcción de Estado, siendo todos, parte de la compleja organización, ya que es evidente la necesidad de población en la conformación de una Nación.

De esta forma, surge la idea de no sólo comprometer más al Estado en los ideales de garantizar, implementar, promocionar y/o proteger los derechos humanos, sino que también los particulares sean parte de esos conceptos e imaginarios que a veces suelen verse utópicos, pero que realmente su puesta de lado obedece a una falta generalizada de voluntad y a un pasado o presente lleno de desesperanza e incredulidad. La manera en que se decidió realizar ese compromiso, es mediante uno de los modos en que el Estado pone en funcionamiento todo su aparato o sistema y que además pone en manos de particulares varias de los fines que en él recaen, la contratación estatal, que como se expondrá a continuación aporta un sinnúmero de posibilidades en la materia.

Debe tenerse en cuenta que gracias al modelo dual de la Constitución, de un Estado Social de Derecho o proteccionista de derechos fundamentales, sociales o colectivos, junto con un Estado

con un modelo neoliberal económico de desregulación y no protección del Estado en esta materia, se han generado muchas contradicciones, problemas o prevalencias de un lado u otro impactando en el modelo contrario, casos como el del antiguo UPAC puede nombrarse o salir colación como un ejemplo de ello. Y ni se diga del impacto que tiene el modelo económico en los derechos humanos.

Los antecedentes del modelo de economía política neoliberal en Colombia permiten analizar, objetivamente, su impacto sobre el desarrollo y la transformación de los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos en las últimas dos décadas; al final de las cuales se puede concluir que el modelo neoliberal no es sostenible ni genera respeto por los derechos de los colombianos. Esta conclusión se elaboró desde una metodología inductiva, por medio del análisis crítico de fuentes como: entrevistas, informes estadísticos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, artículos de investigación en periódicos y revistas, libros, capítulos, documentos y bases de datos bibliográficas en internet. (Tejedor Estupiñán, 2012).

Es así, que lograr hacer vínculos entre estos dos modelos es una forma ideal de abarcar todos los derechos, en especial los fundamentales, sin dejar de lado los criterios neoliberales que en la actualidad es la primera forma y punta de lanza de la globalización.

Antes de entrar a observar los componentes o etapas que constituyen un contrato estatal, lo pertinente es definir en que consiste esta figura jurídica, de esta forma podemos estar ante la definición legal y doctrinal.

La Ley 80 de 1993, en su artículo 32, trae el siguiente concepto "*son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación (...)*". Visto de esa forma, parece una noción bastante amplia, que nos expone que son actos jurídicos, los cuales generan unas obligaciones especiales mientras medie una entidad del Estado, fruto de la autonomía de la voluntad de las partes, y algunos adicionales que se presentarán posteriormente.

El doctrinante Jaime Orlando Santofimio Gamboa, trae a colación una definición bastante más completa al respecto, en relación a otros conceptos, que nos permite abarcar muchos otros elementos, es ideal no presentar todas las posiciones de la doctrina, ya que no es un documento

sobre esa figura, sino que es un medio para lograr consolidar y desarrollar el cuestionamiento inicial de este texto. De esta forma:

La estructuración jurídica de un concepto operativo de contrato estatal o por lo menos cualquier aproximación que se intente en torno a la figura, reconociéndole su carácter de mecanismo fundamental para la realización efectiva de los cometidos a cargo del Estado, no solo conlleva complicaciones formales y normativas, sino que también, dado el origen privado de la institución, significa admitir su naturaleza compleja: en primer lugar, la de instrumento básico para el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción del interés general, que, por lo demás, debe ser preservado en la economía del contrato mismo, por lo tanto sumida inevitablemente en conceptos que involucran compromisos con los intereses de la comunidad; y, en segundo lugar, la de fuente de obligaciones conforme a las elaboraciones del derecho privado, pero, como se advierte, bajo consideraciones inmanentes con los intereses públicos y comunitarios, esto es, en absoluta posición dicotómica respecto de los contenidos individualistas y subjetivos, derivadas de las corrientes clásicas sustentadoras del derecho privado, lo que implica inexorablemente, en la hora actual de la disciplina, la articulación de normas, reglas y principios derivados del subsistema jurídico positivo privatista en interrelación permanente con principios, reglas e incluso normas inspiradas en el mantenimiento y preservación de intereses públicos y generales vinculado necesariamente al carácter social de nuestro Estado de derecho, en lo que podríamos denominar la configuración de un peculiar régimen jurídico y conceptual de contrato estatal, que no recoge los extremos fundamentalistas de la pretendida sustantividad del contrato estatal, ni la de la exclusiva sujeción de este a los parámetros de los principios privatistas nugatorios de lo público. (Santofimio, 2008).

En el texto, él enmarca el concepto bajo la concepción de un Estado Social de Derecho, y reconoce que no es una figura poco pacífica para la doctrina en general, pero esa definición comprende varios elementos relevantes a nuestro documento, reconoce que es un instrumento básico en el cumplimiento de fines estatales, lo que es altamente coherente con lo dicho hasta el momento, expresa la necesidad de mantener los intereses de la comunidad y enmarca un poco los principios del derecho privado, a pesar de que no se refiere a los sujetos en particular, al enlazar ambos conceptos entendemos que dependerá de quien vincule su voluntad con alguna de entidad del Estado.

Este contrato para lograr su perfeccionamiento, ejecución y posteriores obligaciones o responsabilidades, debe pasar por una serie de etapas, las cuales se han de detallar en mejor forma a continuación, pero advirtiéndole desde ahora la importancia fundamental de una fase (etapa pre- contractual), ahondando en su desarrollo con mayor énfasis.

4. La etapa pre-contractual pública como una forma de política pública y de garantizar los Derechos Humanos, además de disminuir futuras responsabilidades estatales

El Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual Pública, 2004, en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, establece cuatro etapas en materia de Contratación: **a) planeación, b) precontractual, c) contractual y d) de liquidación.** Sin embargo, considero que el Manual se queda corto respecto a los alcances de cada etapa, por cuanto en materia la planeación hace parte de lo precontractual y en términos de responsabilidad lo contractual no puede finalizar en la mera liquidación del contrato, lo postcontractual debe extenderse hasta las garantías dadas en el contrato o indemnización, así se establece en la Cartilla de Contratación Estatal diseñada por la Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CORPOTIC - en el año 2011.

Fuente: Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - CORPOTIC – en el año 2011.

Las etapas contractual y postcontractual aunque son de gran importancia, esta investigación tiene la intención de estar dirigida a la prevención, planeación o previsión para que de esta forma el Estado no se vea envuelto en acciones posteriores y que se inmiscuya en laboras que a la larga son más costosas repercutiendo siempre en las arcas públicas, permitiendo haciendo un mejor uso desde el principio de esos rubros en una buena planeación, aplicación y gestión en la obtención de logros establecidos por los fines constitucionales e internacionales, teniendo a su vez un impacto determinante en el bienestar del conglomerado social de sus individuos como de forma colectiva.

Es así, como la etapa precontractual entra a jugar un papel determinante mediante la planeación, de los documentos presupuestales y del proceso de selección, es así como ha de verse cada uno de estos temas; de los distintos contratos por los cuales el Estado pone en funcionamiento todo el sistema y de cómo el Estado hace parte a los particulares a través de los procesos de selección, adicionalmente es preciso evidenciar que en la normatividad al respecto no se hace mucha mención del tema de los derechos humanos, presentando lo útil que puede ser una fusión de estos temas y finalizando con temas de exigibilidad en cuanto a las cláusulas contenidas en lo estipulado.

a. Diferentes modalidades de contratación estatal, de los procesos de selección y su ejecución o aplicación

Los distintos modos de contratar del Estado nos permite determinar todas las posibilidades que tiene el mismo para llevar a cabo sus funciones para cumplir las metas u objetivos impuestos por la Constitución y las Leyes, es por eso que de forma muy sumaria se ha de presentar los tipos de contratos de carácter estatal, a su vez, hay que exponerse como son los distintos procesos de selección por los cuales se elige al particular con las mejores características o que cumpla los estándares impuestos en la etapa de planeación, en la cual se determinan o se exigen los requisitos mínimos o máximos para que una persona, pueda ser elegible.

Obra: Su objeto es la construcción, mantenimiento, instalación o cualquier otro trabajo material sobre un inmueble.

Consultoría: Su objeto es la realización de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de proyectos específicos, asesorías técnicas, interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos anteproyectos o proyectos.

Prestación de servicios: Su objeto es desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de una entidad. Solo se pueden celebrar con personas naturales cuando la planta no tenga el personal especializado y no generan relación laboral con la Entidad.

Concesión: Su objeto es otorgar a un concesionario la prestación, operación, explotación u operación total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación y conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tasa, tarifas, valorización o participación en la explotación.

Encargos fiduciarios y fiducia pública: Su objeto es la transferencia a una Entidad Fiduciaria vigilada por la Súper Financiera de Colombia de recursos vinculados a los contratos estatales para su administración y manejo. Tiene reglas especiales respecto de la fiducia mercantil y control especial.

Estos que se han enunciado son los enmarcados dentro de la legislación contractual estatal, pero en general, es cualquier acuerdo de voluntades que constituya un acuerdo lícito, sean contratos típicos o atípicos, nominados o innominados previstos o no en las leyes civiles o comerciales, suscritos por entidades estatales en ejercicio de la autonomía y requeridos para satisfacer una necesidad estatal o servicio público.

Dentro de los distintos tipos de contratos, las partes consisten, por un extremo el Estado o una Entidad Estatal (definidas por el artículo 2° de la Ley 80 de 1993) y del otro lado el denominado contratista, debe de aclararse un poco lo que compone cada una de las partes.

De la parte pública pueden hacerse unas categorías en general sobre su estructura, que hasta este momento es lo que conforma o compone al Estado, lo que es sumamente relevante, ya que si hablamos de que la otra parte contratante es ese sujeto jurídico o una entidad en especial, debe haber una claridad conceptual de cómo está constituido al momento de realizar cualquier contratación. Ahora, lo que no es propio de este documento es entrar a analizar la naturaleza o funciones de cada uno, ya que de ello debe haber toda una literatura al respecto y que no empata con la ruta establecida.

De la descentralización territorial: La Nación, Regiones, Departamentos, Provincias, Distrito Capital y Distritos Especiales, Áreas Metropolitanas (conformadas por 2 o más municipios con relaciones económicas, sociales y físicas se coordinan para realizar el desarrollo armónico del área), Asociaciones de Municipios, Territorios Indígenas.

Descentralización por servicios: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos, Sociedades de Economía Mixta y Empresas Industriales y Comerciales del Estado con participación estatal superior al 50% del patrimonio, sus filiales y subsidiarias, demás personas jurídicas donde la participación del Estado sea mayoritaria cualquiera que sea la denominación que adopten. Se incluyen de forma expresa las C A R. y FONADE (ley 1150 de 2007).

Órganos del poder público: Rama Legislativa (Senado y Cámara), Rama Ejecutiva, Rama Judicial (incluyendo la Fiscalía General de la Nación), Ministerio Público Procuraduría y Contraloría, Órgano Electoral (Registraduría Nacional del Estado Civil) y Banco de la República.

Por último, encontramos las cooperativas y asociaciones conformadas por entes territoriales y todos los demás órganos del Estado a los que la ley les otorgue capacidad para celebrar contratos, como por ejemplo: CREG -Comisión de Regulación de Energía y Gas-; CRA- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- y; CRT -Comisión de Regulación de Telecomunicaciones- hoy CRC -Comisión de Regulación de Comunicaciones.

Acorde a la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el artículo 95, sobre la aplicación del estatuto contractual, establece que en aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.

Normalmente, para las normas generales del derecho, existen excepciones que confirman la regla, por lo tanto, al régimen de contratación estatal para entidades o contratos.

Las Empresas Sociales del Estado: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1876 de 1994, las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública. Al disponer el régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, la ley 100 de 1993 señaló en el numeral 6 de su artículo 195

que, en materia contractual, se registrarán "por el derecho privado", pero con la facultad para utilizar discrecionalmente "las cláusulas exorbitantes" previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública.

Las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios: Por expresa disposición de las leyes 142 de 1994 y 689 de 2001 se rigen en sus actos y contratos por el derecho privado. En todo caso se sujetan a los principios de la función administrativa y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto por el estatuto de Contratación.

Los contratos de servicios de telecomunicaciones tienen un régimen de contratación especial de acuerdo con los artículos 33 a 36 de la Ley 80 de 1993.

Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, se registrarán por la legislación especial aplicable a dichas actividades.

De los contratos que se celebren en Colombia y se ejecuten en el extranjero se pueden someter a Ley extranjera, o los celebrados en el extranjero, acorde al artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Los contratos financiados con recursos de organismos multilaterales de crédito o con personas extranjeras de derecho público u organismos de asistencia y ayuda internacional.

Las Universidades Públicas, por expresa disposición de la Ley 30 de 1992, se rigen en sus actos y contratos por el Derecho privado.

Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás **entidades financieras de carácter estatal**, artículo 15 de la Ley 1150 de 2007.

Los contratos de ciencia y tecnología, que se registrarán por la ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes, artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las

Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con **excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados**, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, artículo 93 de la Ley 1474 de 2011.

Teniendo en cuenta la Ley 1150 de 2007, en su artículo 16 y Decreto 2474 de 2008, artículo 15, los contratos que celebren **Satena, Indumil, El Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial -COTECMAR- y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana -CIAC-**, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad.

Del otro extremo del contrato, encontramos al denominado Contratista, el cual también puede ser categorizado, pudiendo ampliar la gama de posibilidades en cuanto a las relaciones con el Estado o las Entidades Estatales:

Las personas naturales o jurídicas (cuya duración no sea inferior al plazo del contrato y un año más), de manera individual o conjuntamente (mediante consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad).

El consorcio consiste en la presentación conjunta de la propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta además del contrato y las sanciones afectan por igual a los integrantes.

La unión temporal es la presentación conjunta de la propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, su responsabilidad es solidaria por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta además del contrato y las sanciones afectan según participación en la ejecución del contrato. Adicionalmente, se debe indicar en qué modalidad se participa, en caso de ser una unión temporal se señalan los términos y extensión de participación, además se deben designar representantes legales.

Por último, respecto a la posibilidad de promesas de sociedad futura, la responsabilidad es igual que para los consorcios, deben ser legalmente capaces según las disposiciones legales vigentes. Y de las personas con condiciones especiales para ciertos tipos de contratos debe observarse la naturaleza de la actividad a desarrollar y el perfil del contratista.

Ya vistos los tipos de contratos y las partes que pueden componer la relación contractual, ambos temas de gran relevancia al documento, en cuanto ello nos permite visualizar no sólo las distintas formas contractuales, sino quienes pueden ser partícipes en ella; ello es óbice a establecer los límites respecto de quiénes y el cómo endilgar responsabilidades y obligaciones en derechos humanos. Es de advertir que las distintas relaciones que se puedan realizar no vienen al tema, tan sólo se abre la puerta a las posibilidades.

Para finalizar esta parte, hemos de establecer el proceso de selección, que es la parte final de la etapa precontractual y por medio de la cual se selecciona al contratista idóneo el cual ha de llevar a cabo lo dado en la etapa de planeación, es decir, las obligaciones propias en la ejecución de la prestación adquiridas, y posteriores, recibiendo la contraprestación correspondiente.

La elección de los contratistas hace parte del principio de transparencia, todo lo relacionado al respecto se encuentra en las Leyes 1150 de 2007, 1474 de 2011 y Decretos 2516 de 2011 y 1510 de 2013. Por regla general, al momento de seleccionar se habla de la licitación pública, cuyas excepciones consisten en la contratación directa, selección abreviada, concurso público de méritos y la contratación de mínima cuantía. La selección objetiva está dada entonces por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, mientras puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

Licitación pública. Se entiende por licitación pública el proceso de selección utilizado por las entidades estatales mediante el cual escoge a sus contratistas a través de una invitación de carácter público que se dirige a todas las personas potencialmente interesadas en ejecutar un contrato, para que en igualdad de condiciones y bajo criterios objetivos garantizados por el

pliego de condiciones, presenten ofertas entre las que se escogerá la más favorable. La licitación pública, en la práctica, se reserva para objetos de carácter complejo y mayor valor.

Selección abreviada. La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización; la contratación de menor cuantía, será principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de participantes en el proceso de selección correspondiente cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10); sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y en la ley 1122 de 2007, la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud; la contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierto del proceso inicial; la enajenación de bienes del Estado; la enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado; productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta; por último, la contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.

Contratación directa. Urgencia manifiesta; contratación de empréstitos; contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos; la contratación de bienes y servicios en el sector Defensa que necesiten reserva para su adquisición; los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público; cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; y el arrendamiento o adquisición de inmuebles.

Concurso público de méritos. Ello corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, se presenta en dos modalidades: por concurso abierto o precalificación, en este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. La Ley 80 de 1993 dice que *cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública*. La ley 1474 de 2011 dota al Gobierno de la posibilidad de reglamentar procedimientos especiales para cada modalidad de concurso de acuerdo al específico objeto.

Contratación de mínima cuantía. Es la contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto.

Visto lo anterior, se reafirma lo dicho respecto a que todo este régimen soporta el actuar y el sistema Estatal, por lo menos sus soportes económicos, vemos que tiene una especial importancia si puede darse de manera adecuada el ligar obligaciones y la destinación de los recursos en pos de los derechos humanos.

b. Una normatividad sesgada en Derechos Humanos

Tal como se acaba de expresar, toda la contratación estatal se encuentra soportada en una lógica de corte utilitarista, es decir, obtener el mayor beneficio a los costos más bajos a lugar, y ello ligado a la mayor calidad posible (se diría que exista favorabilidad); en unos pocos asuntos se permite hacer selección específica sobre el factor humano. Lo que es una constante en todo ese régimen es la omisión de hacer parte o dar cabida a los derechos humanos, si se tiene en cuenta la importancia y el peso del tema, resulta que se deja a un lado grandes beneficios en términos de soportar e impulsar todo lo que hemos tratado hasta el momento sobre garantizar, implementar, promocionar y proteger.

De esta forma, al llevar a cabo un análisis de las principales normas en el régimen de contratación estatal, o por lo menos el marco legal y algunos decretos que regulan la materia sólo puede hallarse una pequeña mención a los derechos humanos.

La Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, normativa que es base en el tema, no hace mención alguna como se había anticipado al principio del documento en lo relacionado al hacer mención del ordenamiento jurídico en temas de obligaciones; sin embargo, es importante observar todas las normas posteriores para seguir formando un panorama de la escases en el tema.

Es de considerar que en una regulación posterior, como en los Decretos 855 de 1994 *"por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de contratación directa"*, 2170 de 2002, *"por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999"*, 626 de 2001 *"por el cual reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993"* y 3629 de 2004 *"por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993"*, es relevante como en un periodo aproximado de diez años, no se haya mencionado algo al respecto. Entre las disposiciones diferenciales que tienen una gran importancia social y que tienen una relación a la cuestión, se encuentran los CONPES, en este caso el 3249 de 2003, cuyo asunto consiste en la *Política de Contratación Pública para un Estado Gerencial*, el cual tampoco hace referencia alguna.

Ya para el Decreto 3740 de 2004 *"por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y se adiciona el artículo 4° del Decreto 855 de 1994"*, se hace una primera mención en algunos puntos relacionados con los derechos humanos a pesar de haber estado compuesto por dos artículos. Es así como en su Artículo 1° expresa que: *Los bienes y servicios, incluso contratos fiduciarios que demanden los programas de protección de derechos humanos y de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley para la atención de las personas desmovilizadas y reinsertadas, así como las de sus respectivos grupos familiares, en los términos del Decreto 128 de 2003 o de la norma que lo sustituya, modifique o adicione*⁴. Sin embargo, este artículo fue derogado por el artículo 83 del Decreto Nacional 066 de 2008.

Ya pasado un tiempo, se profiere por parte del legislativo un régimen complementario, presionado en gran parte por los problemas dados hasta ese momento por la corrupción, fue

⁴ Dice la norma que del texto subrayado se decretó la Suspensión provisional mediante Auto fechado junio 23 de 2005, del Consejo de Estado. Expediente 29393.

necesario expedir una segunda gran norma base en materia contractual, la Ley 1150 de 2007 *"por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"*, la cual en su título primero *de la eficiencia y de la transparencia*, artículo 2° *de las modalidades de selección*, numeral 2 *Selección abreviada*, literal h), establece que: *Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden.* Siendo lo anterior, una pequeña mención en toda aquella normativa.

Pasado otro periodo, el Decreto 4170 de 2011 *"por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura"*, siendo ella la agencia especializada y establecida para el tema, se vuelve a omitir la incorporación de derechos humanos o si quiera fundamentales.

Así las cosas, cabe destacar el Decreto 0734 de 2012 *"por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones"*, en su Sección VII *Contratos de entidades a cargo de ejecución de Programas de Protección de Personas Amenazadas, Desmovilización y Reincorporación, Población Desplazada, Protección de Derechos Humanos y Población con Alto Grado de Exclusión*, Artículo 3.2.7.1. *Procedimiento de contratación*, establece que: *Los contratos a los que se refiere el literal h) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, y que estén directamente relacionados con el desarrollo o ejecución de los proyectos allí señalados, se celebrarán por parte de la entidad estatal competente haciendo uso del procedimiento previsto para la selección abreviada de menor cuantía.* Sin embargo, esta normativa, que contiene en su esencia una

pauta procedimental, también fue derogada por el artículo 163 del Decreto Nacional 1510 de 2013.

De esta forma, se llega al Decreto Nacional 1510 de 2013 *"Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública"*, la cual en su artículo 64 *Contratación de entidades estatales dedicadas a la protección de derechos humanos y población con alto grado de vulnerabilidad*, establece que: *Las entidades estatales que tengan a su cargo la ejecución de los programas a los que se refiere el literal h) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 deben aplicar el procedimiento establecido para la selección abreviada de menor cuantía*. Siendo una reproducción de la normativa anterior derogada, haciendo referencia a un aspecto procedimental.

Todo lo anterior nos permite exponer algunos puntos; en primer lugar, denota la ausencia de regulación o estipulación alguna en derechos humanos, lo que no lleva al segundo punto, siempre se ha mantenido la creencia institucional de que la contratación no puede tener relación con el tema, ya que en su mayoría se creería que consiste en comprar y vender por parte del Estado, pero ello es sólo una pequeña parte de su importancia y trascendencia, ya que se juegan recursos que están destinados a cumplir con los fines del Estado, es por ello que tiene el potencial de abarcar todos los temas tanto de salud, como de comunidades, grupos, vida, libertad, vivienda, locomoción, derechos laborales, en fin, la contratación siempre obra como una tela que puede ser modificada acorde a las necesidades del momento y de las partes que la necesitan, ello se irá denotando en los próximos acápites.

Por último, solo como mención, es significativo traer a colación la Directiva Presidencial 12 de octubre 1 de 2002, cuyo asunto trata sobre la lucha contra la corrupción en la contratación estatal. Como se expresó previamente, un tema que abarca tantos los intereses particulares, como colectivos o estatales y ante la notoria corrupción generalizada, que siempre ha afectado o por lo menos ha redundado en todos los derechos de manera transversal, fue necesario tratar el tema de la corrupción, mediante la transparencia, como se evidencia en disposiciones posteriores a la fecha.

Es tan importante todo este fondo, que es uno de los pocos temas en que se legisla para evitar que existan todas aquellas motivaciones ilegales o adversas, tanto en su proceder como en las

estipulaciones, adicionalmente genera tantos conflicto que tiene ocupada toda una sección en el alto tribunal administrativo tratando de dilucidar las litis casadas, es así el volumen e importancia de sus contenidos y trances que mucho se ha llevado a campos extrajudiciales, en lo que se conoce como los Mecanismo Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) para resolver toda la actividad que genera. Lo que amerita implicar los derechos humanos en un asunto de tal importancia.

c. Utilidad de su aplicación en la planeación y proceso de selección

En este punto se debe ir al principio de la etapa precontractual y es donde se debe centrar el esfuerzo de planeación e integración de los derechos humanos, es aquí donde se denota la política pública del Estado en garantizar, proteger, implementar y promocionar el asunto, ya que si se planea adecuadamente exigiendo unas condiciones o cláusulas adecuadas, todo el resto ha de sustentarse en ello y funcionar acorde al plan, esto es, crear unas bases y estructuras que soportan todo el actuar de los particulares y el Estado.

Siendo así las cosas, tiene que denotarse la relevancia de las bases en la normatividad, por lo tanto, acorde a los términos exigidos por la Ley 80 de 1993, los pliegos de condiciones o términos de referencia deben:

- Indicar requisitos objetivos necesarios para participar en el respectivo proceso.
- Definir reglas claras, justas y completas que permitan ofrecimientos de la misma índole, permitan la selección objetiva y eviten la declaratoria de desierta.
- Definir con precisión condiciones de costo y calidad de los bienes o servicios.
- No incluir condiciones y exigencias de imposible cumplimiento.
- Definir reglas que no induzcan a error a los proponentes y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada.

Y deja claro que la principal sanción por incumplimiento de estas disposiciones es la ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones de los pliegos; pero ¿ello es suficiente?

Antes de abarcar esa pregunta, que contiene todo y nada a su vez, en estos puntos dados por la ley, se hallan todas las posibilidades para elaborar todas las condiciones necesarias que estarán contenidas en los futuros contratos, será entonces el Estado y las Entidades Estatales en quienes recae y recaerá toda la responsabilidad de hacer aquellas grandes construcciones y las consecuencias que de ella surjan. Se considera que es en esa etapa donde se puede, y debe, estimularse al contratista, además del conglomerado social, que no sólo es tomar y ejecutar un presupuesto, el cual ha sido aportado por toda un colectivo de personas con el ideal de construir una mejor sociedad, sino que debe entenderse que aquel objeto pactado por más pequeño que sea tiene un sinnúmero de dolientes a quienes está dirigido, que hacen parte del mismo, e incluso afecta a todos los seres en distintos tiempos.

Si se logra entender la responsabilidad que abarca el tema, puede hablarse entonces de realizarse unas estipulaciones sobre los requisitos o cláusulas para dar garantías, exigir un mayor respeto o protección de los derechos, logrando un doble cometido su vez; por un lado la implementación en distintos niveles de los derechos humanos, y en segundo lugar, se promueve el uso de los mismos, dejando claro que el objeto del contrato da pie a ello, ya que no puede exigirse imposibles como bien se establece en la norma.

Sin embargo, realmente el hacer uso de unos cuantos requisitos que se traduzcan en algunas cláusulas en pro de los derechos humanos ¿es algo imposible?, teniendo en cuenta lo amplio de ambos temas, es viable considerar que todo puede ser contenido mutuamente, sin llegar a hacer grandes sacrificios en lo contractual o detrimento de derechos fundamentales. Ya que si se ha logrado mantener el hilo conductor hasta el momento, ha de observarse el potencial de poder pactar desde un principio, la necesidad o la exigencia del respeto por parte del contratista en diversos temas.

Pero ¿que contienen los derechos humanos?, esta pregunta es demasiado grande para tratarla en este documento, por lo cual, se han de tomar algunas posturas con las cuales estamos de acuerdo, tratando de limitar en la mayor medida de lo posible el tema al caso, y de esta forma lograr una fusión con lo contractual. Siendo así las cosas, se debe partir de aclarar dos puntos;

en primer lugar, debe hacerse mención de la llamada teoría de las generaciones, esto es, que algunos derechos se entiendan como fundamentales por ser parte de una época acorde a los principios del contexto social e histórico, a contrario sensu considero que deben entenderse que todos los derechos como fundamentales, por lo menos entender, que los derechos a pesar de ser fruto de una lucha para su obtención en algún punto de la historia, ellos no están sujetos a ser categorizados por un determinado tiempo (aunque así se ha venido reconsiderando paulatinamente por la jurisprudencia constitucional en Colombia, por lo menos en los temas de salud).

Esta teoría se nos ha querido mostrar como una herramienta de explicación pedagógica, para evidenciar el desarrollo histórico de los derechos humanos, sin embargo, esta presunta herramienta, encubre un contexto ideológico que es necesario rebatir. La evolución histórica de los derechos humanos no fue construida solamente desde occidente, muchos pueblos y culturas han tenido desde los inicios de sus civilizaciones las consideraciones éticas, políticas y culturales que estructuran los derechos humanos. El pensamiento liberal occidental estructuró con la Revolución Francesa uno de los pilares de los derechos humanos pero no fue la única cultura que aportó a la construcción de estos derechos, por eso pretender desarrollar una teoría como la llamada "Teoría de las Generaciones" a partir de un solo desarrollo histórico de los derechos humanos no es justificable. Norberto Bobbio parece dejar entreabierto otra posibilidad cuando afirma "*los Derechos Humanos no nacen todos en un momento, nace cuando deben o puedan nacer (...) ciertas garantías nacen cuando nacen ciertas necesidades*". En muchos lugares del mundo, han nacido esos derechos, no solo en Occidente. (Fajardo Sánchez, 2009).

En segundo lugar, si tenemos en cuenta que todos los derechos son fundamentales, lo que si se debe considerar es la opción de que un derecho tenga la cualidad de ser dirigido a un individuo, a un grupo de personas, a una colectividad o a toda la sociedad, por lo que los derechos pueden tener la posibilidad de ser expuestos a distintos puntos de vista, lo anterior implica que los derechos no son simples, tienen una complejidad que muchas veces sólo el operador jurídico o las partes pueden dar ciertos alcances, pero en ciertas ocasiones hasta ellos pueden verse limitados tanto en la teoría como en la práctica.

Como bien lo muestra en base en el rechazo de la regla de reconocimiento de Hart y el rechazo de una discreción judicial en casos difíciles, Dworkin entiende al derecho válido como un fenómeno social complejo. El positivismo define al Derecho válido como la suma de reglas sociales que, pueden ser identificadas como un hecho social con base en una regla fundamental aceptada. Para Dworkin una teoría de derecho tiene que aclarar cómo decide un juez en casos en donde existen reglas poco claras o donde

de plano no existen. La remisión a una discreción judicial, la encuentra Dworkin como no clara y de poca ayuda. Con esto no son las conclusiones del positivismo jurídico las que se ponen en tela de juicio, sino la forma en que aclara el fenómeno jurídico y el contenido de sus argumentos. Las cuestiones que se derivan gracias a la existencia de un material jurídico positivo poco claro o inexistente forman una parte importante de cualquier teoría del derecho. (Rojas Amandi)

Para dar un ejemplo de lo anterior, puede tomarse el caso de la salud, en el cual está implícita su múltiple naturaleza, ya que tiene la posibilidad de verse afectada individualmente o de forma colectiva, pero no deja de lado el ser un derecho fundamental, es por excelencia uno de esos derechos que tienen distintas ópticas. Ahora, el tomar cada uno de los derechos y abarcar todo lo que los compone podría tomar algunos tomos, por lo que por ahora sólo es pertinente tener claro la amplitud y multiplicidad que ellos contienen, dando paso a que sea tenida en cuenta su importancia de manera transversal en todos los campos del derecho, teniendo siempre como foco el progreso y desarrollo como humanidad.

Entonces, tratando de demostrar de cierta manera la actividad precontractual en su planeación, se diseñaran, acorde al contrato en cuestión las cláusulas que se desean estipular para su cumplimiento, es así que si hablamos de un tema como la construcción podemos hallar que pueden ser desarrollados derechos laborales, de la salud, del impacto medio ambiental (territorio, fauna, etc.), respeto por las comunidades, sitios arquitectónicos o históricos, vivienda, en fin todo ello dependerá de lo que se esté pactando, pero siempre teniendo presente el factor vida en todos los niveles. Al igual poder contar en el diseño cuenta los enfoques diferenciales tanto del diseño como a quienes está dirigido, esto es, la condiciones especiales de algunas personas que no piensan o actúan acorde a la "normalidad" o que han sido excluidas por su historia, género, capacidad, tendencias (filosóficas, religiosas o no, políticas). Y en un tema que tiene una compleja utilidad en aplicación, pero por qué no pensar, de influirse sobre la adquisición de bienes o en la prestación de servicios; en el primer caso que se responda por tener niveles de calidad adecuados, más si están dirigidos al consumo humano (aunque es claro que los productos tienden a ser de las reglas comerciales o asuntos privados, en algún punto el Estado delega a particulares el ser un proveedor por ejemplo). En el caso de la prestación de un servicio, es donde más debe tenerse en cuenta los enfoques diferenciales y tener en cuenta siempre el factor dignidad.

Las críticas se centrarán en que ya existen medidas jurídicas en todo lo expuesto hasta el momento en este capítulo, pero debe entenderse que todos los instrumentos jurídicos están dispuestos en caso de que exista un daño o perjuicio. Por lo que uno de los mayores objetivos del documento, es evitar la responsabilidad futura del Estado, ya que una vez se han cumplido los fines dispuestos por la Constitución e instrumentos internacionales gracias a un cumplimiento por usar medios preventivos, esto no daría paso a litigios con el Estado salvo por el incumplimiento contractual, garantizando el goce de los derechos que en un principio no deberían litigarse para poder obtenerse disfrutarlos, ya que por el hecho de ser derechos es que nadie debe ponerlos en cuestión y sólo limitarlos al entrar en contacto con otros derechos; otro punto a favor es la protección de las arcas públicas, ya que se puede redirigir los recursos implicados en las diversas litis, en poder seguir invirtiendo.

La segunda crítica se establecerá frente a la existencia de mecanismos como la consulta previa o cláusulas medio ambientales, pero como se verá más adelante, estas sólo se limitan a un sector y muchas veces no son tenidas en cuenta o no se respetan, mientras que aquí desde un principio ya hace parte de las obligaciones contractuales y serán extensivas a varios temas.

Por último, al ser la contratación la forma en que ejecuta el Estado, al incluir en toda la contratación la protección, promoción, implementación y el garantizar los derechos humanos hablaríamos de una política pública e integra además de constante, ya que la partidas presupuestales como se presentan ahora en derechos humanos, estarían dirigidas a seguir cumpliendo el papel que tienen hasta el momento, las cuales consisten en ser unas medidas de un corto y mediano alcance, para las situaciones que requieren atenderse de manera inmediata o con cierta premura, pero estas partidas como están diseñadas no son parte de una política pública. Y el Estado en su potestad de príncipe puede y debe exigir a los contratistas el incluir todos estos elementos, así sea que el costo, el cual debe ser razonable y justificable, se aumente con el objetivo de no mermar los beneficios de ambas partes.

d. Exigibilidad a las partes, por medio de la implementación de cláusulas especiales, que permitan la protección de derechos fundamentales de manera inmediata

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra cláusula como *cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento análogo,*

público o privado, y la disposición es entendida como el *precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la autoridad*, son los términos por los cuales ha de empezar a exponerse esta parte.

Por lo tanto, se dirá que para este caso, teniendo el concepto de contrato que hemos traído previamente, las cláusulas en la contratación estatal serán unas órdenes o mandatos de carácter público que están dispuestos en un documento, en el cual se evidencian las obligaciones a adquirir por las partes, en este caso no existe deliberación, ya que es el Estado quien expone las condiciones para entregar parte de sus funciones a particulares u otra entidad a cambio de una contraprestación^{5/6}.

Ya hemos dicho que dentro de las cláusulas deben de estar contenidas obligaciones en pos de los derechos humanos, pero a veces por contener dichas estipulaciones no significa que realmente se dé un cumplimiento de lo allí dispuesto, pero de alguna forma debe evitarse en la mayor medida de lo posible asistir un litigio que dilate la ejecución de un contrato, ya que esto entra en detrimento de las partes y de a quienes va dirigido, por lo que debe darse una solución eficaz para todos, en principio podemos hablar de lo que jurídicamente se denomina como cláusulas compromisorias, es así como la Ley 446 de 1998, establece:

Artículo 116. Cláusula Compromisoria. Derogado por el art. 118, Ley 1563 de 2012. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:

"Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral.

Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal.

Parágrafo. La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la existencia y la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán cometerse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la existencia y la validez

⁵ **RAE. Contraprestación:** Prestación que debe una parte contratante por razón de la que ha recibido o debe recibir de la otra.

⁶ **RAE. Prestación:** Cosa o servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación legal.

del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente."

Pero aquí debemos hacer una distinción, ya que los cambios propuestos en este escrito implican un cambio sistémico en lo jurídico, pues frente a este punto es menester realizar nuevas modificaciones, entendiendo que la composición de un Tribunal es una forma "rápida" actual de dar solución a las controversias en la jurisdicción ordinaria y administrativa para los temas económicos del contrato, en materia de derechos fundamentales ese tiempo es inclusive demorado, por lo que en este punto es necesario hacer dos propuestas con el fin de hacer funcional la protección. En primer lugar, como toda la demás competencia de la jurisdicción, la constitucional debe ser una, inclusive la más importante, esto es, que existan jueces, magistrados de tribunal y de altas cortes (en el sistema de oralidad), quienes deben pronunciarse sobre los derechos constitucionales y no los de cualquier otra competencia, resolviendo de manera pronta los mecanismos que se han dado en la protección de muchos de los derechos fundamentales individuales, de grupo o colectivos. Establecido lo anterior, la siguiente propuesta consiste en la existencia de cláusulas compromisorias digamos de corte procesal o económico para que sean resueltas por un árbitro u otro conductor del proceso en los MASC; y por otro lado, cláusulas compromisorias que deben dar resolución a los conflictos que surjan de los derechos fundamentales contenidos en estos contratos tal como se ha venido exponiendo hasta el momento, siendo estos, resueltos por esa competencia constitucional en un corto tiempo, teniendo un desarrollo jurídico distinto al de la tutela, ya que esta figura debe mantenerse sin hacerle perder su naturaleza como una herramienta de protección en los casos de violación y urgencia.

Este capítulo es una propuesta en el esquema expuesto hasta el momento, del cual puede hacerse un desarrollo en los eventos de su aceptabilidad.

5. Sobre la consulta previa y de las cláusulas medio ambientales

Ha de hacerse una exposición genérica en este contenido, ya que es un punto por el cual ha de presentarse aquellas diferencias, a grandes rasgos, frente al tema que estamos tratando, anticipando que se hará un mayor énfasis a la consulta previa.

Como su nombre lo indica las cláusulas ambientales tienden a fomentar protecciones en relación a aquellos aspectos que anuncia; sin embargo, a pesar de que existan o se mencionen no da paso a que siempre sean cláusulas que sean cumplidas, aunque está en sus obligaciones hacerlo, el desarrollo de estas estipulaciones será dada por las circunstancias del territorio, la necesidad de su protección, de las especies que protege o sobre la reconstrucción por daños ocasionados, en fin, está dada toda una variedad de posibilidades, en las cuales su estudio y desarrollo harían parte de un escrito alterno, como varios de los temas aquí tratados.

De todas formas, frente a las cláusulas ambientales, se puede exponer algo, por lo menos de los avances lugares como la unión europea en donde se ha dado una discusión al respecto.

Para concluir, debe destacarse de manera positiva el actual estadio de implantación de los criterios ambientales en la contratación pública. A ello ha contribuido, indudablemente, la importante tarea desempeñada por la Unión Europea. Así, es reseñable como el espíritu sostenible está impregnando paulatinamente las normativas y políticas no sólo comunitarias, sino también nacionales, como se ha reflejado en el estudio al examinarse tanto la nueva Ley de Contratos española como las iniciativas autonómicas, y que nos permiten hablar de compras públicas verdes.

Efectivamente, la contratación pública es un sector en el que se está experimentando con la introducción de criterios ambientales y ello es positivo, dada la trascendencia de esta actividad pública, según demuestra el impacto económico al que se ha hecho referencia en páginas anteriores. No obstante, también es necesario destacar que, las previsiones comunitarias (art. 53 de la Directiva 2004/18/CE) no son vinculantes en este sentido para los Estados Miembros, sino que presentan como una posibilidad el usar cláusulas ambientales en la contratación. Además, debe tenerse en cuenta como limitación a su uso, que están sometidas a una serie de condiciones, como se ha encargado de manifestar la jurisprudencia comunitaria en la Sentencias Concordia Bus Finland (2002), vinculación al objeto del contrato, no atribución de una libertad incondicional de elección al órgano de contratación, mención expresa en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y respeto de los principios del Derecho Comunitario.

Con todo, y valorando positivamente la ecologización de la contratación pública, debe abogarse por una mayor peso de los criterios en la adjudicación del contrato y posterior ejecución (art. 102 LCSP), así como de una mayor implantación de medidas de fomento, como las ecoetiquetas de los productos sostenibles, que permiten una mejor y más completa información a los ciudadanos, que pueden con ello valorar y decidir sobre la actuación de las Administraciones y el cumplimiento de lo dispuesto en este caso en el art.45 CE. (Oller Rubert, 2010).

Lo anterior obedece a situación casi paradójica, ya que en los países latinoamericanos donde se tiene un complejo y abundante medio ambiente o ecosistema, los temas no son tomados en cuenta o discutidos con la seriedad que merecen, por lo que es importante mencionarlos e incluirlos (con el procedimiento propuesto previamente) en la contratación estatal, o privada si se da el caso, más si estamos de la licitación de minería, petróleo, obras públicas o construcciones de gran nivel e impacto, y ni hablar que esta debe ser una constante política de Estado.

En países de Latinoamérica, y del mundo, donde existen tantos tipos de grupos que no obedecen a la lógica o cosmovisión de la realidad dada por una mayoría, esto es, la diversidad de culturas, es necesario que en la democracia contemporánea, tal como se ha venido hablando en la antropología, sociología y filosofía jurídica, de cuenta de estos grupos, respetando su forma de ver el mundo, logrando una coexistencia en la cual todos puedan obtener los beneficios de convivir distintos seres en un mismo territorio.

La consulta previa surge del ideal de dar la mayor protección posible a esos grupos con una percepción distinta del mundo, además se combina con el tema del modelo económico de occidente, como es el caso de Colombia, en donde coexisten en un gran territorio distintas etnias, grupos, comunidades, razas, y gran parte de una cultura se formó con la necesidad del desarrollo, beneficios, obtención de capital y competencia en un mercado mundial, es un modelo que basado en el consumo, trata de buscar una normalidad de las personas para la fabricación en masa, negando otras realidades inclusive, la existencia del otro. De esta forma en países del centro, sur y parte de norte de América cuyo mayor rasgo es el ser coloniales, se trajeron o crearon normas como un medio de control y de poder estableciendo virtualmente la "propiedad" diferenciando y excluyendo a quienes no hacían parte de ese sistema, la contratación pública o privada es la punta de lanza de toda esa compleja estructura, ya es la forma más rápida que tiene el derecho para adaptarse a las realidades del mercado. Se puede decirse entonces que la consulta previa nace como un mecanismo idóneo, irónicamente establecido por aquellos quienes establecen las normas, ante la necesidad de proteger a aquellas minorías que mantienen una posición alterna.

Parte del desfase entre la importancia práctica y los magros avances jurídicos de la consulta, se debe a la proliferación de normas de todo tipo que regulan el problema. Como se verá en las siguientes páginas, ellas van desde reglas de "derecho duro" (p.ej.,

leyes nacionales y tratados internacionales), vinculantes estrictamente para los Estados, hasta normas de "derecho blando" o "derecho suave" (p.ej., reglas operativas de organismos financieros multilaterales y códigos de responsabilidad empresarial de firmas multinacionales), que operan más como guías de conducta que como estándares jurídicos en sentido propio. Se trata de normas de naturaleza y contenidos muy diversos que, de hecho, frecuentemente chocan entre sí porque establecen parámetros y protegen intereses distintos.

Si bien este pluralismo jurídico no es infrecuente (especialmente en el ámbito del derecho internacional), la falta de sistematización de los estándares existentes puede ir en detrimento de la protección eficaz de los derechos de las poblaciones protegidas por ellos; en este caso, los pueblos indígenas y otros grupos étnicos (como las comunidades afrodescendientes en América Latina). Tal es, ciertamente, el caso de la consulta previa.

Un segundo obstáculo para la garantía del derecho a la consulta previa es la tendencia de los analistas, los jueces y los gobiernos a tratar el problema como si fuese un todo, es decir, como si el dilema (desde la publicidad de los pormenores de un proyecto económico que se plena ejecutar en territorio indígena, hasta los participantes y la duración de la consulta), en cuyos detalles se juega el nivel de protección a los derechos de los pueblos y comunidades resguardadas. Por ello, en lugar de un estudio global del problema, se requiere de un análisis desagregado de los temas y pasos fundamentales de la consulta y de las repercusiones que tienen para los Estados, los pueblos indígenas, el sector privado y otros actores. (Garavito-Morris, 2010).

Este mecanismo no debe quedarse como un simple acto protocolario o como un medio para convencer a una comunidad, debe considerarse como parte integrante previa a cualquier etapa, ya sea en temas de reparación, asignaciones presupuestales o de la misma etapa precontractual, es decir, frente a nuestro tema, una vez realizada la consulta, debe ser aportada a planeación para que estos lo integren a las cláusulas que deben ser parte del contrato, garantizando su cumplimiento y que no quede como una promesa en el aire, con las debidas acciones ya mencionadas.

Por lo general, los estados han abogado por un entendimiento limitado del efecto de la consulta previa, en el cual el deber de consultar se agota en la realización de un diálogo con las comunidades, cuyo resultado no vincula al estado. Varias formas de esta manera de entender la consulta han sido establecidas en los pronunciamientos de derecho internacional, entre ellos el Convenio 169, que en general establece estándares que se diferencian por el tipo de proyecto o medida consultada...

(...)

Dada esta ambigüedad, y las consecuencias que tienen las diferentes posturas sobre el problema, tanto por terceros como por los estados y los pueblos indígenas involucrados, el efecto que debe tener la consulta sigue siendo uno de los asuntos más polémicos en las discusiones jurídicas y políticas sobre esta cuestión. (Garavito-Morris, 2010).

Esta consulta previa, debería ser extensiva a todo grupo considerados como una minoría con un proyecto de vida o visión del mundo alterno al occidental, que tenga especiales connotaciones culturales o ancestrales, ampliando su concepción no sólo a indígenas o afrodescendientes, sino por ejemplo a grupos como los RrOM o a comunidades extranjeras agrupadas y radicadas en el país, etc., en conclusión, un concepto amplio contentivo de los distintos colectivos diferenciados.

Es importante el cumplimiento de las consultas previas, y más aún, evitar cualquier clase de perjuicio frente a las comunidades con los cuales se lleva a cabo, ya que el Estado será responsable a nivel local e internacional ante las vejaciones, violaciones o restricciones a los derechos dirigidos hacia ellas.

La violación del derecho a la consulta previa, bien sea por la realización de una consulta inadecuada, bien sea por la omisión completa de una consulta de la población afectada por una medida o proyecto, resulta en una obligación de reparar las víctimas de dicha violación. La obligación general de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos está establecida en diferentes instrumentos del derecho internacional, y adquiere características propias cuando se trata de reparar a pueblos y comunidades indígenas y a sus miembros por violaciones a sus derechos. (Garavito-Morris, 2010).

Una vez más, teniendo en cuenta estos acuerdos integrándolos a las formas de planeación del Estado, evita futuros desgastes, dilaciones y erogaciones que pueden redundar en mejores inversiones o proyectos, es por lo tanto una propuesta que puede lograr ser altamente funcional y totalmente preventiva.

III. CONCLUSIONES

Para finalizar el escrito, hay que escindir el cierre en dos partes. Unas primeras conclusiones que nos permiten retomar toda la información recolectada hasta el momento, ya que ante tantos datos obtenidos en la indagación deben de salir algunas reflexiones; a punto seguido, debe resaltarse todo aquello que se ha propuesto a lo largo del texto, estableciendo los beneficios, los descubrimientos y las utilidades que han surgido de esta investigación, con la expectativa que no se convierta sólo en un documento que aporta conocimientos de utilidad, y fundamento

para otros trabajos, sino que además pueda ser aplicado en las distintas prácticas jurídicas, políticas, sociales, antropológicas, entre otras.

Antes de concluir los distintos puntos anunciados, es pertinente empezar por las definiciones de los verbos que siempre se han puesto en escena a lo largo del documento, ¿por qué estos conceptos que deberían de estar al inicio, han de ponerse al final?, con ello se pretende que, al definir al final del texto, permite realizar una mirada retrospectiva de toda la construcción de una mejor forma, logrando así que en una segunda lectura, se genere un mayor estudio en detalle y pueda dar paso para hacer otros tipos de análisis distinto a la primera idea que se genera al tomar una lectura por primera vez.

Garantía. Cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad / Seguridad o certeza que se tiene sobre algo.

Protección. (Proteger). Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándolo, etc.

Promoción. Elevación o mejora de las condiciones de vida, de productividad, intelectuales, etc.

Promover. Iniciar o impulsar una cosa o un proceso, procurando su logro / Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo.

Implementación. (Implementar). Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo.

Delimitado lo anterior; el siguiente punto es relativo a la información recolectada, lo primero a decir es que, la mayoría de los datos se encuentran fundamentados en la normatividad nacional e internacional, lo que permite dar a entender en mejor forma las obligaciones formalmente contraídas por el Estado en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre otros compromisos adquiridos relacionados al derecho internacional de los derechos humanos.

Se rescata de ese vasto ordenamiento la notoria lentitud que se tuvo respecto a la ratificación de algunos tratados, al analizar e investigar del tema, ello obedeció a las dificultades del momento en el país y las inconveniencias, o costo político y jurídico, para los gobiernos de turno al ratificar dichas disposiciones; no obstante, es claro el nivel de responsabilidad y compromiso que ahora tiene Colombia, independientemente de lograr atrasar el reconocimiento de aquella normatividad, ello se corrobora ante las diversas condenas que ha tenido la nación en las diferentes jurisdicciones internacionales y al interior.

Las estadísticas, bases de datos, índices o presupuestos expuestos nos permiten evidenciar no sólo las condiciones económicas del país sino además las distintas prioridades y gestiones con las cuales los órganos del poder, las entidades, las instituciones o los diferentes organismos optaron en su determinado momento.

Toda decisión a nivel macro, económica, política o jurídicamente hablando, implica repercusiones que atraviesan generaciones enteras, como se ha podido evidenciar en nuestra realidad actual, impactos de las decisiones tomadas a principio y mediados del Siglo XX; verbigracia, los campesinos quienes se conformaron en grupos alzados en armas ante la falta de reconocimiento por parte del Gobierno de la época de sus necesidades y problemas, un tema que pudo haber sido solucionado garantizando esos derechos mínimos dando paso a las guerrillas actuales; ello repercutió en la creación de grupos paramilitares. Por lo tanto, entendiendo los ciclos económicos, las decisiones políticas y jurídicas, pueden generarse escenarios futuros de los cuales a los cuales se pueden responder de manera adecuada realizando acciones fundamentadas en la prevención adecuada.

Por último, la misma normatividad nos permitió dar a exponer uno de los fenómenos de mayor importancia al interior de un país como lo es la contratación estatal, es tan relevante que una buena parte de la economía gira alrededor de esta, por lo menos en los temas de infraestructura y prestación de servicios, además de ser la forma en que se ejecuta la totalidad del presupuesto nacional; las multinacionales o emporios económicos de gran nivel centran su atención y gestiones para obtener las lucrativas posibilidades que de allí se generan, conocer su estructura y funcionamiento básico nos permite orientar su utilidad e importancia para aplicarlo a los derechos humanos.

La segunda parte de las conclusiones permite mostrar los resultados de la investigación y poner de presente temas que son de utilidad, se logra presentar de manera concreta los beneficios que se han ido dando a lo largo de cada capítulo.

a. Implementación de una política pública

La política pública implica toda una voluntad y una gestión dedicada por completo a un determinado tema, a lo largo del tiempo por parte de un Estado (y por cada una de las partes que lo compone), en este caso, el tema son los derechos humanos en función de los verbos ya definidos, entendiendo que un plan de estatal o institucional, o un plan de desarrollo sin los adecuados recursos otorgados por un presupuesto nacional o privado no puede funcionar fácilmente, más si la posibilidad de materializar los objetivos están atados a unos grupos políticos e intereses determinados.

Pero lo cierto es que el primer paso, es incluir los derechos humanos en todas las áreas, planes y programas posibles del Estado de una manera indeterminada, constante e ilimitada da inicio a una verdadera política pública, para el caso haciendo uso de la contratación como una herramienta adicional. En la actualidad ya empieza a ponerse en práctica y poner en la agenda los derechos humanos, pero aún se da prevalencia a algunos pocos temas, además aún se cuenta con bajos fondos, pero de pocos años acá hay unos primeros intentos contundentes que deberán extenderse.

b. Garantía de recursos

Concatenado a lo anterior, si se logra establecer esa política pública en los términos dados, existirá entonces un mejor presupuesto público, que enlazado con la capacidad de los particulares o los contratistas, existirá un impulso o soporte adicional económico para garantizar la estabilidad y constancia de los distintos proyectos que sean necesarios de implementar en pos del equilibrio social, además de la recuperación de la dignidad humana y derechos.

c. Evitar responsabilidades o futuro del Estado por violaciones

Ante la posibilidad de ejecutar esos proyectos de manera continua, logrando ejecutar, implementar y promover los derechos humanos, se irá recuperando o por lo menos restableciendo de manera paulatina el bienestar social, además de reparar en la mejor forma el daño causado.

Lo que ello implica es que a futuro ya no existirían fundamentos para incoar acciones contra el Estado en pos del restablecimiento de derechos, sino que los mismos ya se estarían ejerciendo y no están siendo vulnerados evitando litigios y costes estatales que pueden ser reinvertidos en lo social o mejoramiento de las condiciones económicas, infraestructura, ampliando cada vez en mayor medida el disfrute y goce de todos los derechos en todos los niveles.

d. Desarrollo o cumplimiento efectivo de los deberes del Estado

Esto es directamente proporcional a lo anterior, ya que evitando perjuicios y permitiendo el ejercicio de los derechos, se está cumpliendo con los objetivos determinados en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

e. Ambiente para mejorar las condiciones económicas

Dadas todas las condiciones, esto es, que exista un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, en que todas las personas están haciendo uso y goce libre de sus derechos, en un país como Colombia, que tiene la potencialidad de ser una nación con posibilidades abundante e ilimitadas en materia de industria, producción, financiera, ambiental, capital humano; esto será fundamental para un mayor crecimiento económico en el cual todos pueden ser beneficiados en igualdad de condiciones.

Está pendiente un futuro viable y positivo en derechos humanos, en lo económico, en bioestabilidad, en recuperación y mantenimiento de recursos naturales; la riqueza y abundancia para todos quienes componen esta nación, es una obligación y una deuda histórica ante tantos tiempos de tristeza, guerra y sufrimiento, pero para ello es necesario hacer innovaciones y

cambios que nunca se han tenido en cuenta u ópticas que antes no eran si quiera una opción, ya que como expresó Albert Einstein en su época "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo", y espero que este escrito sea resultado de esa filosofía.

IV. ANEXOS

1. Cuadros.-

Cuadro 1.1.-

1992

Ley 5	Por el cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes cuyo artículo 216 establece el trámite prioritario de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos sometidos a su consideración, además enuncia que el Procurador General de la Nación podrá exhortar al Congreso para que expida las leyes que aseguren <i>la promoción, el ejercicio y la protección de los derechos humanos</i> (cursiva no es parte del texto).
Ley 11	En su totalidad, ya que mediante esta se aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, (Protocolo I), adoptado en Ginebra, el 8 de junio de 1977.
Ley 12	Por medio de la cual se aprueba el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico Sudeste, es importante traerla a colación puesto se refiere a los temas de impacto ambiental, en relación a la educación ambiental, a la prevención, reducción y control de la contaminación de las áreas protegidas, todo ello relevante para los derechos humanos.
Ley 13	Por medio de la cual se aprueba el instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 72a. Reunión, Ginebra, 1986.
Ley 24	Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia, en su artículo 26, sobre la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, en el numeral 3ro de funciones, establece que debe velar por la defensa de los Derechos Humanos en las entidades públicas, especialmente en los establecimientos carcelarios, judiciales, de Policía y de internación psiquiátrica, a fin de que los internos o retenidos sean tratados con el respeto debido a su dignidad, no sean sometidos a tratos crueles, degradantes e inhumanos y tengan oportuna asistencia jurídica, médica y hospitalaria; y en el numeral 4 plantea la función de proyectar las opiniones, informes recomendaciones y observaciones que frente a violación o amenaza de derechos humanos corresponda hacer al Defensor del Pueblo. Y lo más relevante al tema, se encuentra contenido en su Título VIII, en el cual se trata sobre la dirección de promoción y divulgación de derechos humanos, además de orientar a todas las personas en su ejercicio, cuestiones como la elaboración y puesta en práctica de programas académicos para la enseñanza de los Derechos Humanos, la promoción de campañas de respeto, promover los programas necesarios en entidades estatales, coordinación con los directores de las escuelas de formación de los miembros de la Fuerza Pública, organizar y mantener el Centro de Documentación de Derechos Humanos, realizar y promover estudios e investigaciones, coordinación de todas las dependencias al interior de esta entidad para la elaboración de los informes y propuestas legislativas y las demás que asigne el Defensor del Pueblo.

1993

Ley 80	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y de gran importancia para este escrito, que será analizada con mayor detalle posteriormente, en principio no hace mención a los derechos humanos, si establece en su artículo 62 la intervención del Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y los demás agentes, adelantarán investigaciones en relación a esta normativa, pero en nuestra opinión, debe tener en cuenta lo asignado en derechos humanos por la constitución y ser un referente más en el control que realice.
---------------	---

1994

Ley 133	Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política, garantiza ese derecho fundamental, el cual debe ser interpretado con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados, en el artículo 15 se presenta la posibilidad del Estado de celebrar Tratados Internacionales o Convenios de Derecho Público Interno con las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas que gocen de personería, ofrezcan duración y cuenten con un número de miembros.
Ley 134	Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, que enuncia todas aquellas normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles.
Ley 136	Se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, ello indica que se ha pensado hasta las entidades territoriales del Estado más pequeñas, logrando así objetivos de implementación en todos los niveles, artículos como lo son el 168 (Personerías); 169 (Naturaleza del cargo); 178 (Funciones), mencionan actividades que tienen relación de alguna forma con los derechos humanos, muy parecido a lo establecido para la Procuraduría General de la Nación.
Ley 137	Reglamenta los estados de excepción en Colombia, un tema importante por cuanto implica la restricción de algunos derechos en determinadas condiciones, además de conceder importantes atribuciones y facultades a quien ejerce el poder, al tema, el artículo 3 es esencial, pues ostenta la relevancia de los derechos fundamentales y la prevalencia de tratados internacionales sobre derechos humanos y el respeto por el derechos internacional humanitario por encima del orden jurídico interno.
Ley 146	Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1990
Ley 169	por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, suscrita en Nueva York el 14 de diciembre de 1973
Ley 171	A dos años desde la ratificación del Protocolo I, sobre conflictos internacionales, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)", hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977; situación que es interesante, ya que ambos Protocolos son contemporáneos, la diferencia radica en el carácter no internacional del conflicto, situación álgida en Colombia y que permite explicar el tiempo transcurrido para su aprobación. Por último, la Ley 173 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980.

1995

Ley 181	Se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte, tema entendido como un derecho social, del cual se entiende en la norma, que son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona, establece que su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social.
Ley 195	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional", el cual fue suscrito en Nueva York el 2 de febrero de 1971.

Ley 199	<p>por la cual se cambia la denominación del Ministerio de Gobierno y se fijan los principios y reglas generales con sujeción a los cuales el Gobierno Nacional modificará su estructura orgánica y se dictan otras disposiciones; en su artículo 6º hace referencia al SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS y establece en su disposición: <i>“En desarrollo de la obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, el Ministerio del Interior coordinará las actividades de todos los organismos del Ejecutivo, encargados de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.</i></p> <p><i>El Ministerio del Interior contará con un sistema de atención a las demandas de protección de los derechos ciudadanos. El desarrollo de este sistema estará a cargo de una Unidad Administrativa Especial dependiente del Ministerio del Interior, la cual deberá actuar previamente en caso de amenaza inminente de los derechos ciudadanos y desarrollar programas orientados a la protección, preservación y restablecimiento de los derechos humanos de los denunciantes. El Ministerio del Interior o la autoridad en la que se delegue esta función, emprenderá, de oficio, las acciones correspondientes ante las autoridades judiciales, sin detrimento de las funciones de las mismas o de las atribuciones del Ministerio Público.”</i></p>
Ley 210	Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Washington", suscrito en Washington el 14 de diciembre de 1992, en el cual se reafirman importantes principios.
Ley 248	Se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994
Ley 251	La cual aprueba la "Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales", hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907.

1996

Ley 265	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional", suscrito en La Haya, el 29 de mayo de 1993.
Ley 297	Se aprueba el "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de Muerte", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989.
Ley 319	Se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.
Ley 320	Se someten: el "Convenio 163 sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto" y el "Convenio 164 sobre la protección en la salud y asistencia médica de la gente de mar", adoptados en la 74a. Reunión del 8 de octubre de 1987; el "Convenio 165 sobre la seguridad social de la gente de mar" (revisado) y el "Convenio 166 sobre la repatriación de la gente de mar" (revisado), adoptados en la 74a. Reunión el 9 de octubre de 1987; el "Convenio 171 sobre el trabajo nocturno", adoptado en la 77a. Reunión el 26 de junio de 1990; el "Convenio 172 sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes y establecimientos similares", adoptada en la 78a. Reunión el 25 de junio de 1991; el "Convenio 174 sobre la prevención de accidentes industriales mayores" y la "recomendación 181 sobre la prevención de accidentes industriales mayores", adoptados en la 80a. Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993.

1997

Ley 405	Por medio de la cual se aprueba la enmienda al párrafo 7 del artículo 17 y al párrafo 5 del artículo 18 de “la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, adoptada en Nueva York, el 8 de septiembre de 1992.
----------------	---

Ley 409	Se aprueba un importante instrumento internacional la "Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura", suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
Ley 418	Se busca dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales, reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia, la cual ha sido prorrogada en distintas ocasiones.

1998

Ley 472	Por medio de la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo, están se encuentran orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personas, tema relevante para los derechos humanos, un área relevante es dada en la protección de minorías y en temas de impacto e interés general, tal como lo es el medio ambiente.
----------------	---

1999

Ley 522	Fue derogada por la Ley 1407 de 2010, pero tiene un gran valor en términos de derechos humanos, ya que por medio de aquella se expidió un Código Penal Militar.
Ley 524	Por la cual se aprueba el "Convenio Número Ciento Cincuenta y Cuatro (154) sobre el Fomento de la Negociación Colectiva", adoptado en la Sexagésima Séptima (67) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, con fecha diecinueve (19) de junio de mil novecientos ochenta y uno (1981).

2000

Ley 554	Se aprueba la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), estableciendo una obligación que es esencial para un Estado como el colombiano, cuyo estado es de conflicto armado interno y por el cual han existido un sinnúmero de víctimas por MAP/MUSE.
Ley 589	En virtud de la, se da un gran avance en la protección de los derechos humanos, ya que en esta se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura, además de otras disposiciones.
Ley 620	Se aprueba la "Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores", suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado.

2001

Ley 707	por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", hecha en Belém do Pará, el 9 de junio de 1994, en la cual los Estados realizan compromisos de no practicar, permitir, ni tolerar este acto, inclusive en estado de emergencia o excepción, ni suspenderán las garantías individuales, además han de sancionar a todo autor, cómplice o encubridor del delito, por último estos cooperarán entre sí para la prevención, sanción y erradicación, en igual forma se define y delimita el delito; a continuación.
Ley 704	Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación", adoptado por la 87a. reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

	O.I.T., el 1 de junio de 1999, que en cierta medida está dirigido también a erradicar este tipo de actuaciones en los Estados parte.
--	--

2002

Ley 732	Se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado. En virtud de la Ley 762 de 2002 se aprueba la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Ley 742	Se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma, el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) y es declara exequible por la Sentencia C-578/02 de la Corte Constitucional.
Ley 765	Es declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-318 de 2003, por medio de esta se aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía", adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de mayo de dos mil (2000).
Ley 782	Contiene disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.

2003

Ley 800	Por medio de la cual se aprueban la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
Ley 812	Se puede decir que contenía un objetivo interesante, pero fue derogada en su mayoría por la Ley 1450 de 2011, en ella se aprobaba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, "hacia un Estado comunitario".
Ley 850	Se reglamentan las veedurías ciudadanas como mecanismos democráticos de representación.
Ley 852	La protege y regula la misión y las actividades humanitarias de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, se le brindan garantías para su ejercicio.

2004

Ley 875	Se regula el uso del emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y los protocolos adicionales, en donde se tratan temas como las normas relativas al uso del emblema, medidas de control y sanciones, entre otros puntos de manera general en relación a los emblemas.
----------------	--

2005

Ley 941	Organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Ley 971	Se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente.
Ley 975	Se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y sobre acuerdos humanitarios.

Ley 985	Adopta medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.
----------------	--

2006

Ley 1008	Se fijan algunas competencias y procedimientos para la aplicación de convenios internacionales en materia de niñez y de familia.
Ley 1010	Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Ley 1021	Fue declarada inexecutable por la sentencia de la Corte Constitucional C-030 de 2008, por ella se expedida la Ley General Forestal.
Ley 1029	Esta norma modifica un artículo de la Ley 115 de 1994 que trata sobre la enseñanza obligatoria.
Ley 1095	Se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política, en relación al Hábeas Corpus. Finalmente, de gran importancia, por medio de la Ley 1098 de 2006 se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.

2007

Ley 1146	Se expiden disposiciones para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.
Ley 1151	Se expide el Plan Nacional de Desarrollo, declarado executable por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 2008, bajo el entendido de que se suspenderá la ejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa la consulta previa específica exigida por el bloque de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudencia constitucional.

2008

Ley 1197	Por medio de la cual se aprueba el “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado en la octogésima quinta (85ª) reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el 19 de junio de 1997.
-----------------	---

2010

Ley 1410	Se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Ley 1418	Se aprueba la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

2011

Ley 1448	Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Ley 1450	Se expide el plan nacional de desarrollo 2010-2014. Aunque no implica una norma que exprese una obligación directa frente a los derechos humanos, estimo que tiene impacto en distintos sectores.
Ley 1474	Se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

2013

Ley 1620	Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
Ley 1662	Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Corte Penal Internacional sobre la Ejecución de las Penas Impuestas por la Corte Penal Internacional”, disposición que tiene como propósito, uno de los tantos establecidos, demostrar por parte del Estado que encuentra a la CPI como una aliada, en la lucha contra la impunidad, de los crímenes que ofenden a la humanidad y ratifica el compromiso de seguir empoderando el régimen del Estatuto de Roma.

Cuadro 1.2.-

Decreto 4100 de 2011	Por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se modifica la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4633 de 2011	Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
Decreto 4634 de 2011	Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano
Decreto 4635 de 2011	Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Decreto 4800 de 2011	Se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4801 de 2011	Por el cual se establece la estructura interna de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Decreto 4802 de 2011	Por el cual se establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Decreto 4829 de 2011	Por el cual se reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras.
Decreto 1069 de 2014	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 985 de 2005.

Cuadro 1.3.-

CONPES 3172 de 2002	Líneas de acción para fortalecer la política del Estado en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
CONPES 3411 de 2006	Política de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho

	Internacional Humanitario, a través del fortalecimiento de la capacidad del Estado Colombiano para la investigación, juzgamiento y sanción.
CONPES 3673 de 2010	Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados
CONPES 161 de 2013	Equidad de género para las mujeres
CONPES 3784 de 2013	Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado

Cuadro 1.4.-

Presidencia de la República	Directiva Presidencial 007 de 1999
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario	Directiva 007 de 2011
Ministerio de Defensa Nacional	Directiva No. 09 de 2003 Sindicalistas y Defensores de DDHH Directiva No. 09 de 2005 Desplazados Directiva No. 01 de 2007 Retorno desplazados Directiva No. 06 de 2006 Desaparición Forzada Directiva No. 16 de 2006 Indígenas Directiva No.13 de 2007 Red de Cooperantes Directiva No.07 de 2007 Afrocolombianos Directiva No. 10 de 2007 Homicidios en Persona Protegida Directiva No.19de2007 Complemento Directiva 10 de 2007 Directiva Permanente No. 300-28 de 2007
Comando General Fuerzas Militares	Directiva 186 de 2009

Cuadro 2.-

Año	Normativa	Monto
Destinación a temas relacionados con D. Humanos o D. Internacional Humanitario		
2010	Ley 1365 de 2009	\$ 148'292.622'987.234
	Ministerio de Educación Nacional	\$ 20.616.795.143.600
	Instituto Nacional para Sordos (INSOR) -Aporte Nacional-	\$ 3.365.362.118
	Instituto Nacional para Ciegos (INCI) -Aporte Nacional-	\$ 3.849.079.052
	Instituto Técnico Central -Aporte Nacional-	\$ 6.953.359.760
	Instituto Superior de Educación Rural de Pamplona (ISER) -Aporte Nacional-	\$ 1.922.348.688
	Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo -Aporte Nacional-	\$ 2.484.835.150
	Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia -Aporte Nacional-	\$1.046.283.432
	Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César -Aporte Nacional-	\$ 1.692.562.205
	Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Aporte Nacional-	\$ 4.697.680.482
	Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez" de Cali -Aporte Nacional-	\$ 2.257.395.212
	Procuraduría General de la Nación*	\$ 341.825.807.808
	Defensoría del Pueblo*	\$ 232.102.004.172
	Rama Judicial*	\$ 1.832.228.447.978
	Fiscalía General de la Nación*	\$ 1.437.526.644.588
	Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses*	\$ 127.892.396.633
	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial*	\$ 1.712.536.013.992
	Fondo Nacional Ambiental (En materia de conservación no aparece aportes nacionales, sólo recursos propios).	\$ 6.200.000.000
	Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)	\$ 647.427.934.064
	Ministerio de Cultura*	\$ 192.869.882.313
	Instituto Colombiano de Antropología e Historia -Aporte Nacional-	\$ 5.772.050.958
	Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) -Aporte Nacional-	\$ 138.866.090.892
	Instituto Caro y Cuervo -Aporte Nacional-	\$ 6.000.862.921
	Ministerio de la Protección Social*	\$ 23.347.028.621.394
	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** -Aporte Nacional-	\$ 0

Instituto Nacional de Salud -Aporte Nacional-		\$ 42.846.600.000
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -Aporte Nacional- Gran parte de sus ingresos es a través de recursos propios		\$ 24.478.000.000
Superintendencia Nacional de Salud -Aporte Nacional- De igual forma que con el ICBF		\$ 2.553.000.000
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud (CRES)**		\$ 0
Ministerio del Interior y de Justicia*		\$ 452.925.893.735
Fondo para la participación y el fortalecimiento de la democracia		\$ 1.494.904.862
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) -Aporte Nacional-		\$ 943.536.865.154
Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación		\$ 242.561.299.822
2011	Ley 1420 de 2010	\$ 147'255.252'549.186
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) -Aporte Nacional-		\$ 3.234.868.674.916
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**		\$ 0
Departamento Nacional Administrativo de Economía Solidaria		\$ 7.612.041.696
Superintendencia de la Economía Solidaria**		\$ 0
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- -Aporte Nacional-		\$ 28.933.618.001
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) -Aporte Nacional-		\$ 87.345.400.000
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		\$ 1.118.730.303.000
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) -Aporte Nacional-		\$ 416.433.589.593
Ministerio de Educación Nacional		\$ 21.212.708.284.249
Instituto Nacional para Sordos (INSOR) -Aporte Nacional-		\$ 3.221.709.276
Instituto Nacional para Ciegos (INCI) -Aporte Nacional-		\$ 4.307.592.684
Instituto Técnico Central -Aporte Nacional-		\$ 7.189.417.304
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia -Aporte Nacional-		\$ 963.277.988
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César -Aporte Nacional-		\$ 1.733.783.732
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Aporte Nacional-		\$ 4.595.525.917
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali -Aporte Nacional-		\$ 2.295.974.749
Procuraduría General de la Nación*		\$ 370.905.934.864

Defensoría del Pueblo*	\$ 236.093.672.757
Rama Judicial*	\$ 2.109.659.004.692
Fiscalía General de la Nación*	\$ 1.540.871.286.519
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses*	\$ 132.676.974.941
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial*	\$ 1.674.654.635.425
Fondo Nacional Ambiental (En materia de conservación no aparece aportes nacionales, sólo recursos propios).	\$ 3.840.000.000
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)	\$ 927.055.900.000
Ministerio de Cultura*	\$ 194.167.827.897
Instituto Colombiano de Antropología e Historia -Aporte Nacional-	\$ 7.826.968.924
Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) -Aporte Nacional-	\$ 142.769.921.184
Instituto Caro y Cuervo -Aporte Nacional-	\$ 7.562.460.181
Ministerio de la Protección Social	\$ 24.557.839.917.998
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** -Aporte Nacional-	\$ 0
Instituto Nacional de Salud -Aporte Nacional-	\$ 43.433.365.693
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -Aporte Nacional- Gran parte de sus ingresos es a través de recursos propios	\$ 40.362.110.000
Superintendencia Nacional de Salud -Aporte Nacional- De igual forma que con el ICBF	\$ 4.129.590.000
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud (CRES)**	\$ 0
Ministerio del Interior y de Justicia	\$ 461.034.215.827
Fondo para la participación y el fortalecimiento de la democracia	\$ 1.539.752.008
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) -Aporte Nacional-	\$ 999.575.801.485
Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 293.291.836.297
2012	Ley 1485 de 2011
\$ 165'276.318'002.513	
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) -Aporte Nacional-	\$ 4.131.070.787.827
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**	\$0
Ministerio de Justicia y del Derecho	\$113.514.366.423
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) -Aporte Nacional-	\$1.094.938.980.67
Superintendencia de la Economía Solidaria**	\$0
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- -Aporte Nacional-	\$176.809.382.795
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) -Aporte Nacional-	\$136.294.221.09
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	\$69.910.230.000

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) -Aporte Nacional-	\$489.029.032.00
Ministerio de Educación Nacional	\$23.092.798.432.087
Instituto Nacional para Sordos (INSOR) -Aporte Nacional-	\$3.525.177.213
Instituto Nacional para Ciegos (INCI) -Aporte Nacional-	\$4.670.294.295
Instituto Técnico Central -Aporte Nacional-	\$7.661.188.829
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia -Aporte Nacional-	\$1.763.442.068
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César -Aporte Nacional-	\$1.760.268.082
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Aporte Nacional-	\$5.027.222.147
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali -Aporte Nacional-	\$3.325.734.624
Procuraduría General de la Nación*	\$413.944.297.568
Defensoría del Pueblo*	\$304.216.123.230
Rama Judicial*	\$2.397.265.991.739
Fiscalía General de la Nación*	\$1.731.194.446.478
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses* -Aporte Nacional-	\$143.665.215.793
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*	\$1.945.648.903.432
Fondo Nacional Ambiental -Aporte Nacional-	\$500.000.000
Ministerio de Cultura	\$256.723.246.372
Instituto Colombiano de Antropología e Historia -Aporte Nacional-	\$8.069.696.206
Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) -Aporte Nacional-	\$244.668.395.587
Instituto Caro y Cuervo -Aporte Nacional-	\$8.488.063.262
Ministerio de la Protección Social*	\$25.506.983.386.167
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** -Aporte Nacional-	\$0
Instituto Nacional de Salud (INS) -Aporte Nacional-	\$65.065.565.693
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -Aporte Nacional- Gran parte de sus ingresos es a través de recursos propios	\$740.362.110.000
Superintendencia Nacional de Salud -Aporte Nacional- De igual forma que con el ICBF	\$34.174.590.000
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud (CRES)**	\$0
Ministerio del Interior*	\$735.507.531.586
Fondo para la participación y el fortalecimiento de la democracia	\$1.585.944.569
Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación	\$363.362.482.499
Fondo Nacional de Vivienda	\$893.271.577.000

(FONVIVIENDA)		
2013	Ley 1593 de 2012	\$ 185'524.633'717.636
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) -Aporte Nacional-		\$ 43.205.000.000
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres		\$ 32.841.812.678
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas		\$ 156.546.000.00
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**		\$ 0
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia -Aporte Nacional-		\$ 72.269.000.000
Ministerio de Justicia y del Derecho		\$ 107.150.063.174
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) -Aporte Nacional-		\$ 776.616.727.063
Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado		\$ 25.911.769.682
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC)		\$ 506.437.002.042
Superintendencia de la Economía Solidaria**		\$ 0
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- -Aporte Nacional-		\$ 173.463.000.000
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) -Aporte Nacional-		\$ 210.056.838.000
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural		\$ 1.589.535.431.470
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) -Aporte Nacional-		\$ 487.827.864.000
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –(AUNAP) -Aporte Nacional-		\$ 17.913.545.000
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas		\$ 251.753.632.770
Ministerio de Salud y Protección Social		\$ 10.484.950.978.716
Instituto Nacional de Salud (INS) -Aporte Nacional-		\$ 63.625.788.708
Súper Intendencia Nacional de Salud -Aporte Nacional-		\$ 35.120.990.000
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud (CRES)**		\$ 0
Ministerio de Educación Nacional		\$24.899.811.728.484
Instituto Nacional para Sordos (INSOR) -Aporte Nacional-		\$4.490.366.459
Instituto Nacional para Ciegos (INCI) -Aporte Nacional-		\$4.530.761.745
Instituto Técnico Central -Aporte Nacional-		\$9.501.646.385
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia -Aporte Nacional-		\$2.836.104.674
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Aporte Nacional-		\$6.045.663.902
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César		\$2.326.103.322

-Aporte Nacional-		
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali	\$2.934.816.424	
-Aporte Nacional-		
Procuraduría General de la Nación*	\$460.359.000.00	
Defensoría del Pueblo*	\$317.788.000.000	
Rama Judicial*	\$2.674.046.140.043	
Fiscalía General de la Nación*	\$2.049.257.141.993	
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses*	\$166.930.310.246	
-Aporte Nacional-		
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*	\$274.026.392.000	
Fondo Nacional Ambiental**	\$ 0	
Ministerio de Cultura	\$356.394.560.988	
Instituto Colombiano de Antropología e Historia	\$9.107.660.885	
-Aporte Nacional-		
Instituto Caro y Cuervo	\$9.292.016.116	
-Aporte Nacional-		
Ministerio del Trabajo	\$16.824.173.761.000	
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)**	\$ 0	
-Aporte Nacional-		
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	\$ 13.894.535.174	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)	\$1.022.965.823.861	
-Aporte Nacional-		
Gran parte de sus ingresos es a través de recursos propios		
Ministerio del Interior*	\$342.642.573.034	
Fondo para la participación y el fortalecimiento de la democracia	\$1.633.522.90	
Departamento Administrativo de la Ciencia. Tecnología e Innovación	\$387.942.600.000	
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$ 2.261.402.535.544	
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)	\$1.300.396.304.31	
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	\$ 2.388.759.904.206	
Unidad administrativa Especial para la Consolidación Territorial	\$ 183.499.000.00	
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema	\$ 237.912.000.000	
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas	\$ 1.441.553.000.000	
-Aporte Nacional-		
Centro de Memoria Histórica	\$ 41.615.000.000	
-Aporte Nacional-		
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – (COLDEPORTES)	\$ 334.888.914.916	
2014	Ley 1687 de 2013	\$199’854.547’521.535
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia)	\$35.048.047.744	
-Aporte Nacional-		
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$107.751.029.086	
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	\$148.829.000.000	
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**	\$ 0	
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia	\$81.627.400.00	
-Aporte Nacional-		
Ministerio de Justicia y del Derecho*	\$95.289.839.973	
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)	\$826.107.215.725	
-Aporte Nacional-		

Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	\$41.306.760.461
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC)	\$643.427.916.725
Superintendencia de la Economía Solidaria**	\$ 0
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- -Aporte Nacional-	\$159.700.000.000
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) -Aporte Nacional-	\$170.432.526.013
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	\$1.092.443.696.521
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) -Aporte Nacional-	\$215.799.805.876
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –(AUNAP) -Aporte Nacional-	\$15.947.900.000
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	\$219.140.977.000
Ministerio de Salud y Protección Social	\$11.174.046.764.741
Instituto Nacional de Salud (INS) -Aporte Nacional-	\$52.402.000.000
Súper Intendencia Nacional de Salud -Aporte Nacional-	\$157.601.700.000
Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación en Salud (CRES)**	\$ 0
Ministerio de Educación Nacional	\$26.932.267.932.578
Instituto Nacional para Sordos (INSOR) -Aporte Nacional-	\$4.688.012.907
Instituto Nacional para Ciegos (INCI) -Aporte Nacional-	\$4.726.183.279
Instituto Técnico Central -Aporte Nacional-	\$10.202.803.793
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia -Aporte Nacional-	\$2.912.293.424
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César -Aporte Nacional-	\$2.449.468.267
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Aporte Nacional-	\$6.429.931.581
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali -Aporte Nacional-	\$4.075.573.491
Procuraduría General de la Nación*	\$499.862.290.000
Defensoría del Pueblo*	\$363.167.000.000
Rama Judicial*	\$2.863.229.869.158
Fiscalía General de la Nación*	\$2.514.023.774.741
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses* -Aporte Nacional-	\$186.000.926.339
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*	\$318.331.457.988
Fondo Nacional Ambiental -Aporte Nacional-	\$90.000.000.000
Ministerio de Cultura*	\$354.451.666.369
Instituto Colombiano de Antropología e Historia -Aporte Nacional-	\$8.401.336.829

Instituto Caro y Cuervo -Aporte Nacional-	\$8.615.478.447	
Ministerio del Trabajo	\$21.725.797.929.867	
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** -Aporte Nacional-	\$ 0	
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	\$12.349.087.000	
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo	\$ 20.000.000.000	
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -Aporte Nacional-	\$2.975.000.000.000	
Ministerio del Interior*	\$486.111.102.438	
Fondo para la participación y el fortalecimiento de la democracia	\$7.971.532.917	
Departamento Administrativo de la Ciencia. Tecnología e Innovación	\$376.782.250.000	
Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio	\$1.878.796.341.923	
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)	\$1.794.960.848.000	
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	\$3.078.774.847.081	
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial	\$185.746.000.00	
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema	\$163.415.700.000	
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Aporte Nacional-	\$1.365.075.232.608	
Centro de Memoria Histórica -Aporte Nacional-	\$39.940.000.000	
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – (COLDEPORTES)	\$356.320.043.772	
2015	Ley 1737	\$203'658.063'430.308
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) -Aporte Nacional-	\$32.654.447.744	
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	\$31.997.859.086	
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas	\$ 142.925.820.000	
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**	\$126.977.900.000	
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia -Aporte Nacional-	\$85.098.205.000	
Ministerio de Justicia y del Derecho*	\$87.266.915.504	
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) -Aporte Nacional-	\$816.476.039.564	
Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	\$41.641.227.666	
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC)	\$779.180.109.539	
Superintendencia de la Economía Solidaria**	\$24.209.200.000	
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- -Aporte Nacional-	\$165.281.700.000	
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) -Aporte Nacional-	\$225.677.350.000	
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	\$3.135.599.755.371	
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) -Aporte Nacional-	\$523.605.623.866	
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –(AUNAP) -Aporte Nacional-	\$40.504.790.000	

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	\$224.440.760.000
Ministerio de Salud y Protección Social	\$ 11.735.377.927.501
Instituto Nacional de Salud (INS) -Aporte Nacional-	\$53.207.970.000
Súper Intendencia Nacional de Salud -Aporte Nacional-	\$28.680.400.000
Ministerio de Educación Nacional	\$29.019.443.310.505
Instituto Nacional para Sordos (INSOR) -Aporte Nacional-	\$4.770.251.745
Instituto Nacional para Ciegos (INCI) -Aporte Nacional-	\$4.942.416.997
Instituto Técnico Central -Aporte Nacional-	\$10.303.610.465
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia -Aporte Nacional-	\$2.946.198.932
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del César -Aporte Nacional-	\$2.380.747.929
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional -Aporte Nacional-	\$6.142.541.384
Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali -Aporte Nacional-	\$4.159.138.570
Procuraduría General de la Nación*	\$517.596.800.000
Defensoría del Pueblo*	\$424.721.600.000
Rama Judicial*	\$3.328.808.606.633
Fiscalía General de la Nación*	\$2.821.897.015.147
Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses* -Aporte Nacional-	\$186.564.843.906
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*	\$345.744.984.762
Fondo Nacional Ambiental -Aporte Nacional-	\$150.000.000.000
Ministerio de Cultura*	\$390.792.678.028
Instituto Colombiano de Antropología e Historia -Aporte Nacional-	\$8.262.231.635
Instituto Caro y Cuervo -Aporte Nacional-	\$8.638.456.369
Ministerio del Trabajo	\$23.350.664.178.467
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** -Aporte Nacional-	\$1.742.921.250.000
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	\$13.227.598.628
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo	\$25.475.041.700
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) -Aporte Nacional-	\$3.792.108.223.436
Ministerio del Interior*	\$489.691.136.476
Fondo para la participación y el fortalecimiento de la democracia	\$6.641.805.249
Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación	\$377.053.429.121
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	\$1.946.951.548.158
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA)	\$2.016.925.619.000
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	\$3.472.237.578.611
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial	\$201.457.700.000

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema	\$247.686.011.206
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Aporte Nacional-	\$1.635.727.267.443
Centro de Memoria Histórica -Aporte Nacional-	\$40.927.250.000
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – (COLDEPORTES)	\$487.849.303.300
<p>* Se mencionan dichos entes por sus funciones constitucionales y relación con el tema, no por asignación presupuestal directa al respecto).</p> <p>** Se maneja con recursos propios.</p> <p>También se asigna un presupuesto a las distintas corporaciones autónomas regionales.</p>	

2. Gráficas.-

Figura 1.1.-

Figura 1.2.-

Figura 1.3.-

Figura 2.1.-

Figura 2.2.-

Tabla 2.3 Metas y avances de iniciaciones de vivienda			
	Avance 2013	Meta 2013	Avance (%)
Viviendas totales	268.594	288.000	93
VIS	152.919	187.200	82
No VIS	115.675	100.800	115

Fuente: Sinergia – DNP.

Figura 2.3.-

Gráfico 2.13 Viviendas iniciadas acumulado 12 meses, total nacional

Fuente: DNP-DDU.

Figura 2.4.-

Tabla 2.4 Metas y avances de vivienda con apoyo de Fonvivienda y cajas de compensación

	Avance 2013	Meta 2013	Avance (%)
Fonvivienda	129.506	70.712	183
CCF	30.188	56.566	53

Fuente: Sinergia - DNP.

Figura 3.1.-

Gráfico 3.1 Pobreza y pobreza extrema por ingresos - Total nacional

Fuente: DANE, cálculos MESEP con base en Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008 - 2013).

Figura 3.2.-

Figura 3.3.-

Figura 3.4.-

Tabla 3.1 Variables del Índice de Pobreza Multidimensional

Variable	Nacional			Cabecera			Resto		
	2012	2013	Variación	2012	2013	Variación	2012	2013	Variación
Trabajo informal	80,0	78,1	-1,9	76,4	74,2	-2,2	93,0	92,2	-0,8
Bajo logro educativo	53,1	51,6	-1,5	44,1	42,8	-1,3	84,9	83,4	-1,5
Rezago escolar	33,3	31,7	-1,6	31,3	29,5	-1,8	40,6	39,8	-0,8
Sin aseguramiento en salud	17,9	17,1	-0,8	18,3	17,8	-0,5	16,7	14,5	-2,2
Hacinamiento crítico	13,1	12,4	-0,7	13,2	12,5	-0,7	12,4	11,9	-0,5
Inadecuada eliminación de excretas	12,1	11,8	-0,3	7,8	7,6	-0,2	27,3	26,8	-0,5
Analfabetismo	12,1	11,7	-0,4	8,2	8,0	-0,2	26,0	25,0	-1,0
Sin acceso a fuente de agua mejorada	12,3	11,2	-1,1	3,0	3,2	0,2	45,2	40,2	-5,0
Desempleo de larga duración	10,0	9,7	-0,3	10,6	10,1	-0,5	7,8	7,9	0,1
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	9,4	9,7	0,3	9,8	10,0	0,2	7,9	8,3	0,4
Barreras de acceso a servicios de salud	6,6	7,2	0,6	5,9	6,8	0,9	9,1	8,5	-0,6
Material inadecuado de pisos	5,9	5,8	-0,1	2,2	2,3	0,1	19,4	18,4	-1,0
Inasistencia escolar	4,1	3,8	-0,3	3,0	2,8	-0,2	7,9	7,3	-0,6
Trabajo infantil	3,7	3,6	-0,1	2,8	2,7	-0,1	7,0	6,7	-0,3
Material inadecuado de paredes exteriores	2,2	2,1	-0,1	2,1	2,1	0,0	2,2	2,2	0,0

Fuente: DANE- Encuesta de Calidad de Vida, 2012 y 2013

Figura 4.1.-

Figura 5.1.-

Figura 6.1.-

Figura 6.2.-

Tabla 4.1 Acciones de Grupos Armados al Margen de la Ley

	Ene-Dic 2012	Ene-Dic 2013	Var %
Asalto a población	2	0	-100
Ataques a aeronaves	3	6	100
Ataques instalaciones	23	30	30
Hostigamiento	80	74	-8
Emboscadas	32	18	-44
Contacto armado	10	4	-60
Incursión población	1	0	-100
No reportado ⁴⁸	0	2	
Retenes ilegales	16	26	63
Total	167	160	-4

Fuente: Observatorio del delito de la Dijín, Policía Nacional

Figura 7.1.-

Tabla 6.1 Indicadores de gobernabilidad global⁶¹

Indicadores	2012	2013
Voz y rendición de cuentas	45	44
Estabilidad política y ausencia de violencia	6	12
Efectividad gubernamental	57	63
Calidad regulatoria	64	61
Estado de derecho	44	48
Control de la corrupción	42	46

Fuente: Banco Mundial.

Figura 7.2.-

Gráfico 7.11 Recaudo tributario 2013 por concepto

Fuente: DIAN, cifras preliminares.

Figura 8.1.-

Tabla 6.2 Cooperación internacional por área

Áreas	\$USD millones	Participación %
Víctimas, reconciliación y DD.HH.	146,7	25,1
Gobernabilidad	142,2	24,3
Igualdad de oportunidades	118,1	20,2
Medio ambiente	98,7	16,9
Crecimiento sostenible y competitividad	75,8	12,9
Gestión del riesgo	2,4	0,4

Fuente: APC-Colombia.

Figura 9.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 9.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 9.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 10.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 10.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	1.1	4.1	4.1	19.7	1.9	19.4	1.9	19.2	44.2	66.6	91.7
Avance en Productos	0	4.1	8.7	13.1	28.7	32.2	35.7	3.8	44.6	4.2	56	97.3

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 10.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0.2	24.8	26.9	26.1	26.1	26.1	0	0	0
Avance en Productos	0	5.3	5.4	5.4	15.5	17.3	18	18	25.4	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 11.1.-

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 11.2.-

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 11.3.-

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 12.1.-

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 12.2.-

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 12.3.-

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 13.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	3.4	3.4	10.8	16.9	2.1	33.1	37.6	42.6	61	62	57.8	71
Avance en Productos	0	0.1	3.1	11.3	15.5	26.1	27.4	53.9	57.1	58.1	56.7	71

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 13.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0.4	0.6	44.1	49.3	50.5	55.5	49	50.5	51.3	0	0	0
Avance en Productos	0.1	0.4	12.2	10	14.1	18.6	19.6	24.6	32.3	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 14.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 14.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0.6	9.6	35.5	49.7	56.2	67.4	82.4	72.7	85.5	98.7	109	132.6
Avance en Productos	6.7	8.1	50.4	59.4	64.4	74.9	87.8	104.2	111.4	120.9	129.4	150.4

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 14.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	2.2	11.4	2	32.1	45.7	54.1	58.7	63.2	70.3	0	0	0
Avance en Productos	37.6	51.2	55.3	62.1	66.1	73.2	76.8	93	98.6	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 15.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 15.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0.1	0.1	0.1	4	6.9	24.4	27.5	28.3	30.7	36.7	43.9	88.1
Avance en Productos	0	0.2	0.3	2.5	10.7	19.1	26.4	28.6	32	37.1	42.5	85.3

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 15.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0.7	0.8	3.8	8.1	20.8	24.2	21.4	25.6	27.2	0	0	0
Avance en Productos	1.5	1.6	3.8	8	11.6	19.7	19.2	25.9	30.8	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 16.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 16.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0.3	0.8	1.1	1.3	2.1	34	33.8	36.7	40.1	41.7	80.7
Avance en Productos	0.1	23.5	24.8	25	27.5	38.7	52.8	52.4	54.6	55.8	51.6	71.7

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 16.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	1.7	10.2	1.1	11.3	12.4	14	22.9	27	38.7	0	0	0
Avance en Productos	1.5	1.8	21.6	41.7	46.2	49.6	45.9	125.9	151.2	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 17.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 17.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	54.1	5.8	5.8	98.5	1.1	1.1	1.1	107.7	87.8	453.6
Avance en Productos	0	0	110.3	113	114.3	155.5	194.8	194.8	194.8	218.2	31.3	795.9

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 17.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	3.1	2.7	74.9	87	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	4.8	4.8	17.1	16.4	44.7	77.1	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 18.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	4	25.2	25.6	25.8	26.7	2.8	0.2	16.8	18.1	21.8	28	83.3
Avance en Productos	0.2	1.7	1.9	1.8	2.5	3.6	4.9	5.7	0.7	9	25	5.9

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 18.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	22.2	2.3	23.4	29.6	34.9	35.7	36.6	49.7	52.9	0	0	0
Avance en Productos	0.5	0.6	1	1.2	2.7	4.6	13.6	22.9	28.4	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 19.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 19.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	2.2	5.3	0.7	8.5	15.8	17.1	18	19.5	21	21.7	38	62.6
Avance en Productos	0	1.8	2.7	4.8	9.1	11.6	1.5	24.8	26.8	34.4	42.9	75.2

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 19.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	2.1	5.8	19.8	21.2	35.7	39.2	39.7	40.3	36.7	0	0	0
Avance en Productos	0.4	2	2.9	4.3	7.9	11.9	13.4	19.2	22	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 20.1.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 20.2.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0.2	0.5	0.9	0.8	1.2	1.4	3	3.3	3.5	4.7	5	21.6
Avance en Productos	1.5	1	10.5	12.4	13.5	14.4	74	75.2	48.3	50.1	51.8	85.7

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

Figura 20.3.-

Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance en Gestión	0	0.1	0.2	0.5	0.7	1.5	2.1	4.1	5.1	0	0	0
Avance en Productos	0.4	0.6	1.4	2.3	9	9.9	11.2	12.7	38.5	0	0	0

Fuente: Portal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2014.

V. LISTA DE REFERENCIAS

1. Tratados

- Carta de las Naciones Unidas.
- Convención Americana de Derechos Humanos.
- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Para".
- Convención sobre los derechos del niño. A.G. res. 44/25.anexo. 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 167. ONU Doc. A/44/49 (1989), entrada en vigor 2 de septiembre de 1990.
- Convenio OIT No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
- Pacto internacional de derechos civiles y políticos. A.G. res. 2200A (XXI). 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 52. ONU Doc. A/6316 (1966). 999 U.N.T.S. 171, entrada en vigor 23 de marzo de 1976.
- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
- Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
- Convenio OIT No. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo.
- Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador".

- Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
- Convenio OIT No. 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva.
- Convenio OIT No. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la obra de mano femenina por un trabajo de igual valor.
- Convenio OIT No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.
- Convenio sobre la protección de las instituciones artísticas y científicas y de los monumentos históricos (Pacto Roerich) (Washington).

2. Constitución y Leyes

- Constitución Nacional de Colombia de 1991.
- Constitución Nacional de Colombia de 1886.
- Código Civil Colombiano.
- Código Sustantivo del Trabajo Colombiano.
- Estatuto Tributario.
- Ley 29 de 1990.
- Ley 5 de 1992.
- Ley 11 de 1992.
- Ley 12 de 1992.
- Ley 13 de 1992.
- Ley 24 de 1992.
- Ley 30 de 1992.
- Ley 80 de 1993.

- Ley 100 de 1993.
- Ley 133 de 1994.
- Ley 134 de 1994.
- Ley 136 de 1994.
- Ley 137 de 1994.
- Ley 142 de 1994.
- Ley 146 de 1994.
- Ley 169 de 1994.
- Ley 171 de 1994.
- Ley 181 de 1995.
- Ley 195 de 1995.
- Ley 199 de 1995.
- Ley 210 de 1995.
- Ley 248 de 1995.
- Ley 251 de 1995.
- Ley 265 de 1996.
- Ley 297 de 1996.
- Ley 319 de 1996.
- Ley 320 de 1996.
- Ley 405 de 1997.
- Ley 409 de 1997.
- Ley 418 de 1997.

- Ley 446 de 1998.
- Ley 472 de 1998.
- Ley 522 de 1999.
- Ley 524 de 1999.
- Ley 550 de 1999.
- Ley 554 de 2000.
- Ley 589 de 2000.
- Ley 617 de 2000.
- Ley 620 de 2000.
- Ley 689 de 2001.
- Ley 707 de 2001.
- Ley 704 de 2001.
- Ley 732 de 2002.
- Ley 742 de 2002.
- Ley 765 de 2002.
- Ley 782 de 2002.
- Ley 800 de 2003.
- Ley 812 de 2003.
- Ley 850 de 2003.
- Ley 852 de 2003.
- Ley 875 de 2004.
- Ley 941 de 2005.
- Ley 971 de 2005.

- Ley 975 de 2005.
- Ley 985 de 2005.
- Ley 1008 de 2006.
- Ley 1010 de 2006.
- Ley 1021 de 2006.
- Ley 1029 de 2006.
- Ley 1095 de 2006.
- Ley 1122 de 2007.
- Ley 1146 de 2007.
- Ley 1151 de 2007.
- Ley 1197 de 2008.
- Ley 1365 de 2009.
- Ley 1410 de 2010.
- Ley 1418 de 2010.
- Ley 1420 de 2010.
- Ley 1448 de 2011.
- Ley 1450 de 2011.
- Ley 1474 de 2011.
- Ley 1485 de 2011.
- Ley 1593 de 2012.
- Ley 1620 de 2013
- Ley 1662 de 2013.

- Ley 1678 de 2013.
- Ley 1737 de 2014.

3. Decretos

- Decreto 855 de 1994.
- Decreto 2170 de 2002.
- Decreto 3629 de 2004.
- Decreto 3740 de 2004.
- Decreto 066 de 2008.
- Decreto 2474 de 2008.
- Decreto 2516 de 2011.
- Decreto 4100 de 2011.
- Decreto 4170 de 2011.
- Decreto 4633 de 2011.
- Decreto 4634 de 2011.
- Decreto 4635 de 2011.
- Decreto 4800 de 2011.
- Decreto 4801 de 2011.
- Decreto 4802 de 2011.
- Decreto 4829 de 2011.
- Decreto 0734 de 2012.
- Decreto 1510 de 2013.
- Decreto 1069 de 2014

- Decreto Reglamentario 1876 de 1994.

4. Jurisprudencia

- Sentencia *C – 578 de 2002* de la Corte Constitucional.
- Sentencia *C – 318 de 2003* de la Corte Constitucional.
- Sentencia *C – 030 de 2008* de la Corte Constitucional.
- Sentencia *C – 461 de 2008* de la Corte Constitucional.
- Sentencia *T – 409 de 2013* de la Corte Constitucional de Colombia.

5. Directivas

- Directiva Presidencial 007 de 1999.
- Directiva Presidencial 12 de 2002.
- Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Directiva 007 de 2011.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 09 de 2003.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 09 de 2005.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 06 de 2006.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 16 de 2006.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 01 de 2007.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 07 de 2007.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 10 de 2007.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 13 de 2007.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva No. 19 de 2007.

- Ministerio de Defensa Nacional. Complemento Directiva 10 de 2007.
- Ministerio de Defensa Nacional. Directiva Permanente No. 300-28 de 2007.
- Comando General Fuerzas Militares. Directiva 186 de 2009.

6. CONPES

- CONPES 3172 de 2002.
- CONPES 3249 de 2003.
- CONPES 3411 de 2006.
- CONPES 3673 de 2010.
- CONPES 161 de 2013.
- CONPES 3784 de 2013.

7. Doctrina

- Naciones Unidas. Temas Mundiales. Derecho Internacional. Reseña, 2014. Tomado de la página oficial, 26 de Julio de 2014. URL: <http://www.un.org/es/globalissues/law/>.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Objetivos del Milenio, ¿Qué son los ODM?, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: La Agenda Global para superar la Pobreza. Tomado de la página oficial, 26 de Julio de 2014. URL: <http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=h-a-1--&s=a&m=a&e=A&c=02010#.U9PR9PI5NpA>.
- Folleto informativo No.22 - Discriminación contra la Mujer: la Convención y el Comité. Declaración y Programa de Acción de Viena (parte I, párr. 18), aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 25 de junio de 1993, [A/CONF.157/24 (Part I), cap. III]. Tomado de la red, 30 de Julio de 2014. URL: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet22sp.pdf>.
- Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.
- Domingo E. Acevedo (1992). *Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno – Discrecionalidad y razonabilidad en la determinación y aplicación de las normas “operativas” contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre derecho*

humanitario-. Revista IIDH, Vol. 16, Doctrina. UNAM. Artículo tomados de la red, 26 de Julio de 2014. URL: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/16/dtr/dtr8.pdf>

- Carlos García Orjuela (2005). *Competencias del Congreso de la República, en materia de tratados internacionales en el ordenamiento jurídico Colombiano*. Universidad de los Andes, Revista No. 61 Colombia Internacional. Páginas 148 – 161.
- Prosperidad para todos. Plan Nacional de Desarrollo. 2010 – 2014. Tomo I. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. Tomado el día 09 de febrero de 2015 de: <https://sinergia.dnp.gov.co/SISMEG/Archivos/PND2010-2014%20Tomo%20I%20CD.pdf>
- Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Todos por un nuevo país, paz, equidad, educación. Versión preliminar para discusión del consejo nacional de planeación. Tomado el día 10 de febrero de 2015 de: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf>
- Rodrigo Uprimny. “Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedimiento penal” en VV.AA. Reflexiones sobre el Nuevo Sistema Procesal Penal. Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura, 2004.
- Sierra Alfranca. I. 2001. *El concepto de raza: evolución y realidad / Thebreed concept: evolution and reality*. Universidad de Zaragoza. Zaragoza.España.http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/01_22_53_07sierra.pdf.
- Eugenio Lahera P. 2004. *Política y políticas públicas. Serie políticas sociales*. Naciones Unidas. CEPAL. División de Desarrollo Social. Santiago de Chile, agosto de 2004. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/19485/sps95_lcl2176p.pdf (22 de febrero de 2014).
- Desafíos. Bogotá (Colombia). (20): 149-187, semestre I de 2009. *Hacia una nueva definición del concepto “política pública”*. Raúl Velásquez GaVilanes. revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/download/433/377 (22 de febrero de 2014).
- Human Rights Clinic. The University of Texas School of Law. *Maximizando la justicia, minimizando la demora: Acelerando los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Diciembre de 2011.
- Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (ICHRP), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. *La corrupción y los derechos humanos. Estableciendo el vínculo*. 2009. http://www.ichrp.org/files/reports/52/131_report_es.pdf (22 de Marzo de 2014).
- Financiamiento para el desarrollo. *América Latina desde una perspectiva comparada*. Barbara Stallings con la colaboración de Rogério Studart. Publicación de las Naciones Unidas. Julio de 2006. Santiago de Chile.

- Jesús Ángel Linares Vesga. Área Jurídica. *Aspectos relevantes del contrato de donación entre vivos*. Revista Vía Iuris. ISSN 1909-5759 * Número 5 * Julio-Diciembre * 2008 * p. 15 – 22.
- IndexMundi. Colombia. *Producto Interno Bruto (PIB)*. Toma como fuente: Fuente: CIA WorldFactbook. <http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=co&v=65&l=es>.
- Martus Tavares. Nora Berretta. *Sistemas de Planificación Estratégica e Innovaciones Presupuestarias. Informe preparado para el Banco Interamericano de Desarrollo. Programa de ejecución del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV). Diálogo Regional de Política. Abril 2006*. http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/36342/Planificacion_Estrategica_y_Presupuesto.pdf.
- Ministerio de Hacienda – Ley de Presupuesto y Decreto. <http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldeplanacion/LeyPresupuestalPGN/2011>.
- Portal de transparencia económica. <http://www.pte.gov.co>.
- Departamento Nacional de Planeación. *Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual Pública*. 2004. https://www.contratos.gov.co/Archivos/MANUAL_BUENAS_PRACTICAS.pdf.
- Corporación para el Desarrollo, Apropiación y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -CORPOTIC-. *Cartilla de Contratación Estatal*. 2011. http://www.corpotic.gov.co/apc-aa-files/30653965346361386366633062643033/Cartilla_de_Contrataci_n_Estatal.pdf
- Luis Alfonso Fajardo Sánchez. *Globalización de los Derechos Humanos. La “teoría de las generaciones”, ha muerto, ¡viva la teoría de la generación de Viena!*, 2009. Revista Virtual, Via Inveniendi Et Iudicandi “Camino del Hallazgo y del Juicio”. Universidad Santo Tomás.
- Fernando Fantova (2005). *Manual para la gestión de la intervención social. Políticas, organizaciones y sistemas para la acción*. Madrid: Editorial CCS.
- Bissio, Beatriz (1977). *Sudáfrica: La crisis del Apartheid*. Nueva sociedad, Nro. 31-32, julio - octubre, pp. 231-240.
- Marketing: Edición para Latinoamérica, Philip Kotler, Gary Armstrong, Pearson Educación, 2001, ISBN 9702601010, 9789702601012. Pág. 394.
- César Rodríguez Garavito, Meghan Morris, Natalia Orduz Salinas y Paula Buriticá (2010). *Justicia global 2, La consulta previa a pueblos indígenas. Los estándares del derecho*

internacional. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho. Programa de Justicia Global y Derechos Humanos. Bogotá, Colombia.

- Marta Oller Rubert (2010). *La inclusión de cláusulas ambientales en la Contratación Pública*. Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. I – núm. 1: 1 – 34, - estudi -. Universitat Jaume I (Castelló).
- Colombo, Paolo; traducción de Cardoso, Herber (2003). *Gobierno, Léxico de político-1*; pág. 131. Buenos Aires, ed. Nueva visión. ISBN 950-602-468-5.
- Durán Vázquez, José Francisco (2006. 1). *La construcción social del concepto moderno de trabajo*. Universidad de Santiago. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas No. 13). Tomado el día 11 de febrero de 2015 de: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/13/jfduran.pdf>.
- Feres, Juan Carlos; Mancero, Xavier (2001). *Enfoques para la medición de la pobreza*. Breve revisión de la literatura. Serie 4 estudios estadísticos y prospectivos. División de Estadística y Proyecciones Económicas. Naciones Unidas, CEPAL. Santiago de Chile, enero.
- Cardona A., Doris; Agudelo G., Héctor Byron (2005). *Construcción cultural del concepto calidad de vida*. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, vol. 23, núm. 1, enero – junio, pp. 79 – 90, Universidad de Antioquia, Colombia. ISSN: 0120-386X. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica.
- Gómez Lee, Martha-Isabel (2008). *Reseña de “Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación”* de André-Noël Roth Deubel. Revista Opera, núm. 8, pp. 202 – 204, Universidad Externado de Colombia, Colombia. ISSN: 1657-8651. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica.
- Observatorio de Construcción de Paz. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Sociales (2012). *Identidades, enfoque diferencial y construcción de paz*. Serie documentos para la paz N° 3. Tomado el día 11 de febrero de 2015 de: http://www.utadeo.edu.co/files/collections/documents/field_attached_file/serie3_1.pdf
- Mack, Andrew (2004). *El concepto de seguridad humana*. Papeles N° 90. Promoting Security: But How and Forwhom?, Brief 30, Bonn International Center For Conversion (BICC), octubre. University of British Columbia, Vancouver. Tomado el día 11 de febrero de 2015 de: <http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Cohesi%C3%B3n%20Social/Necesidades,%20consumo%20y%20bienestar/MACK,%20Andrew,%20El%20concepto%20de%20seguridad%20humana,%20Papeles%2090.pdf>
- Santofimio Gamboa, Jaime Orlando (abril, 2008). *El carácter conmutativo y por regla general sinalagmático del contrato estatal y sus efectos respecto de la previsibilidad del riesgo y del mantenimiento de su equilibrio económico*. Universidad Externado de Colombia. Derecho, Revista Digital. <http://portal.uexternado.edu.co/pdf/Derecho/Revista%20Digital%20de%20Derecho%20Admini>

strativo/Subir%20aqu%C3%83%C2%AD%20los%20documentos%20para%20descargar/Jaime%20Orlando%20Santofimio%20Gamboa.pdf.

- Víctor Manuel Rojas Amandi. *El concepto de Derecho de Ronald Dworkin*. Biblioteca Jurídica Virtual. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/246/art/art16.pdf>.
- Joan Miguel Tejedor Estupiñán. *El modelo económico y su relación con los derechos humanos en Colombia. Una aproximación*. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Finanzas y Política Económica, ISSN: 2248-6046, Vol. 4, No. 1, enero-junio, 2012, pp. 55-82. Aprobado: 2 de Mayo de 2012. http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/4_9269_el-modelo-econamico-y-su-relacion-con-los-derechos-humanos-en-colombia-una-aproximacion.pdf.